

LACER



INFORME ECONÓMICO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ABRIL 2025

Declaración de divulgación sobre IA: WBG-Translate 2.0, del Grupo del Banco Mundial, se utilizó en abril de 2025 para traducir el contenido de este libro del inglés al español. El contenido traducido fue posteriormente sometido a edición y revisión humana.

© 2025 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Teléfono: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org
Algunos derechos reservados
1 2 3 4 2 8 2 7 2 6 2 5

La presente obra fue publicada originalmente en inglés por el Banco Mundial con el título *Organized Crime and Violence in Latin America and the Caribbean, Latin America and the Caribbean Economic Review (April)* en 2025. En caso de discrepancias, prevalecerá el idioma original. El presente documento fue elaborado por el personal del Banco Mundial, con contribuciones externas. Las observaciones, interpretaciones y conclusiones aquí expresadas no son necesariamente reflejo de la opinión del Banco Mundial, de su Directorio Ejecutivo ni de los Gobiernos representados por este. El Banco Mundial no garantiza la exactitud, la exhaustividad ni la vigencia de los datos incluidos en este trabajo. Tampoco asume la responsabilidad por los errores, omisiones o discrepancias en la información aquí contenida ni otro tipo de obligación con respecto al uso o a la falta de uso de los datos, los métodos, los procesos o las conclusiones aquí presentados. Las fronteras, los colores, las denominaciones, los enlaces, las notas al pie y demás datos que aparecen en este documento no implican juicio alguno, por parte del Banco Mundial, sobre la condición jurídica de ningún territorio, ni la aprobación o aceptación de tales fronteras. La cita de trabajos de otros autores no significa que el Banco Mundial adhiera a las opiniones allí expresadas ni al contenido de dichas obras. Es posible que se hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial (“IA”) para la elaboración de este documento, tal como se menciona en el mismo. Sin embargo, todo el esfuerzo creativo y de transformación reflejado en este trabajo fue realizado por el personal del Banco Mundial o por colaboradores externos. El Banco Mundial no se hace responsable de ningún reclamo, incluidos errores o información inexacta, generado por programas de IA que no estén bajo su control o no sean de su propiedad.

Nada de lo que figura en el presente documento constituirá ni podrá considerarse una limitación ni renuncia a los privilegios y las inmunidades del Banco Mundial, todos los cuales quedan reservados específicamente.

Derechos y autorizaciones

Esta publicación está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO): <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo>. La licencia Creative Commons Attribution permite copiar, distribuir, comunicar y adaptar la presente obra, incluso para fines comerciales, con las siguientes condiciones:



Cita de la fuente. La obra debe citarse de la siguiente manera: Maloney, William, Marcela Melendez and Raul Morales. 2025. *Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe*. Informe Económico América Latina y el Caribe (Abril). Washington, DC: Banco Mundial. doi:10.1596/978-1-4648-2236-0. Licencia: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO

Traducciones. En caso de traducirse la presente obra, la cita de la fuente deberá ir acompañada de la siguiente nota de exención de responsabilidad: “La presente traducción no es obra del Banco Mundial y no deberá considerarse traducción oficial de este. El Banco Mundial no responderá por el contenido ni los errores de la traducción”.

Adaptaciones. En caso de que se haga una adaptación de la presente publicación, la cita de la fuente deberá ir acompañada de la siguiente nota de exención de responsabilidad: “Esta es una adaptación de un documento original del Banco Mundial. Las opiniones y los puntos de vista expresados en esta adaptación son exclusiva responsabilidad de su autor o de sus autores y no son avalados por el Banco Mundial”.

Contenido de terceros. Téngase presente que el Banco Mundial no necesariamente es propietario de todos los componentes de la obra, por lo que no garantiza que el uso de dichos componentes o de las partes del documento que son propiedad de terceros no violará los derechos de estos. El riesgo de reclamación derivado de dicha violación correrá por exclusiva cuenta del usuario. Si se desea reutilizar algún componente de esta obra, es responsabilidad del usuario determinar si debe solicitar autorización y obtener dicho permiso del propietario de los derechos de autor. Como ejemplos de componentes se pueden mencionar los cuadros, los gráficos y las imágenes, entre otros.

Toda consulta sobre derechos y licencias deberá enviarse a la siguiente dirección: World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, EE. UU.; correo electrónico: pubrights@worldbank.org.

ISBN (electrónico): 10.1596/978-1-4648-2236-0

DOI: 10.1596/978-1-4648-2236-0

Diseño de la portada: Alejandro Espinosa/sonideas.com

Agradecimientos

Este informe fue elaborado por la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. La preparación del informe estuvo a cargo de William Maloney (Economista Jefe), Raúl Morales Lema (Economista) y Marcela Meléndez Arjona (Economista Jefe Adjunta). El informe contó con la excelente asistencia de investigación y editorial de Pilar Ruiz Orrico (Analista de Investigación), Gastón Marinelli (Analista de Investigación), José André Camarena Fonseca (Analista de Investigación), Laura Daniela Tenjo Galvis (Analista de Investigación), Laura Victoria González Solano (Analista de Investigación), Nicolás Peña Tenjo (Consultor) y Jacqueline Larrabure (Asistente Senior de Programa). El capítulo 2 utilizó como insumo un primer borrador de un documento de política escrito por Marcela Meléndez Arjona, Juan Fernando Vargas y Ernesto Schargrodsky.

Los siguientes equipos regionales realizaron contribuciones sustanciales:

Finanzas, Competitividad e Innovación: Federico Alfonso Díaz Kalan (Especialista en Sector Financiero, ELCFN) y Guillermo Fernández Zubia (Consultor, ELCFN).

Pobreza y Equidad: Carlos Rodríguez Castelán (Gerente de Práctica, ELCPV), Hernán Winkler (Economista Senior, ELCPV), Diana Marcela Sánchez Castro (Analista de Investigación, ELCPV) y Karen Yiseth Barreto Herrera (Consultora, ELCPV).

Las estimaciones macroeconómicas específicas de cada país y sus correspondientes informes fueron elaborados por economistas de la Práctica Global de Política Económica, bajo la dirección de Shireen Mahdi (Gerente de Práctica de ELCMU) y la coordinación de Elena Fernández Ortiz y Adriane Landwehr. Los colaboradores incluyen a Daniel Barco, Rafael Barroso, Paola Brens, Luigi Butrón, Natalia Cámpora, Bledi Celiku, Paulo Chávez, Fabiano Colbano, Antonio Cusato, Barbara Cunha, Anton Dobronogov, Aygul Evdokimova, Cornelius Fleischhaker, Julian Folgar, Sebastian Franco, Fernando Giuliano, Christian Gonzalez, Bernard Haven, Fernando Im, Evans Jadotte, Melise Jaud, Santiago Justel, Andres Lajer, Woori Lee, Karen Muramatsu, Rafael Ornelas, Fausto Patiño, Raphael Pinto Fernandes, Maryan Porras, Daniel Reyes, Natasha Rovo, Gabriela Schmidt, Heron Teixeira, Vasileios Tsiropoulos, Hulya Ulku, Constanza Vergara, Erik von Uexkull, Pui Shen Yoong y Gabriel Zaourak (todos de ELCMU).

El apoyo en comunicaciones y difusión estuvo a cargo de Ana Elisa Luna Barros (Gerente, ECRLC), Ruth Idalina González Llamas (Oficial Senior de Asuntos Externos, ECRLC), Analia Martínez (Oficial de Comunicaciones en Línea, ECRLC), Yuri Szabo Yamashita (Oficial de Asuntos Externos, ECRLC), Belkis Delcid Díaz (Asistente de Programa, ECRLC), Carlos Alberto Cortés Galavis (Consultor, ECRLC), Francisco Seminario (Consultor, ECRLC) y Leandro Juan Hernandez (Consultor, ECRLC). Nancy Morrison (Consultora, LCRCE) brindó apoyo editorial, Leonardo Padovani (Consultor, LCRCE) tradujo el documento a portugués y Alejandro Espinosa (Sonideas) contribuyó con el diseño.

La fecha de corte para este informe fue el 10 de abril de 2025.

Índice

Panorama general	1
Perspectivas de crecimiento para la región	8
Capítulo 1	
El estado de la región América Latina y el Caribe	9
Entorno externo: los factores externos siguen siendo desafiantes	12
Mayor incertidumbre en el comercio	13
La inflación retrocede lentamente, mientras que la política monetaria se relaja	17
Sector fiscal: el déficit fiscal y la deuda siguen siendo elevados	20
Foco en el Caribe	23
Sector financiero: los préstamos vencidos se moderan, mientras que el crecimiento del crédito difiere entre las distintas subregiones	26
Mercados de trabajo y condiciones sociales: Tendencias recientes y perspectivas futuras	27
Capítulo 2.	
Crimen organizado y violencia en ALC	45
ALC debe priorizar la lucha contra el crimen organizado	46
La debilidad institucional en áreas clave agrava el problema en lugar de mitigarlo	58
La acción estatal en la lucha contra el crimen organizado requiere una mejor comprensión de su funcionamiento	69
El crimen organizado es un problema de primer orden para ALC porque es una barrera creciente para el desarrollo	75

Recuadros

Recuadro 1.1.	¿La inteligencia artificial puede ser el remedio largamente esperado para la desigualdad de ingresos en América Latina?	39
Recuadro 1.2.	¿Están listos los trabajadores latinoamericanos para una transición energética?	42
Recuadro 2.1.	Mirada a los delitos ambientales en la Amazonía brasileña	52
Recuadro 2.2.	La intervención en las cárceles de Rosario en 2024	62
Recuadro 2.3.	Estrategia de la Ciudad de México para la reducción de crímenes de alto impacto	65
Recuadro 2.4.	La estrategia de policía orientada a la comunidad de Río de Janeiro	66
Recuadro 2.5.	Indicadores de justicia: definición y finalidad	68
Recuadro 2.6.	Las unidades de servicios móviles pueden ser una forma de acercar al Estado donde está ausente	70
Recuadro 2.7.	Seguir el dinero: dismantelar las organizaciones criminales requiere interrumpir los flujos financieros y las redes que sostienen a estos grupos	72
Recuadro 2.8.	Entendiendo y enfrentando el crimen organizado en Medellín	73
Recuadro 2.9.	Investigación especializada sobre las bandas criminales en El Salvador	74
Recuadro 2.10.	Casos en que las políticas de seguridad y prevención se refuerzan mutuamente	78

Figuras

Figura 1.1.	El crecimiento sigue rezagado en relación a otras regiones	10
Figura 1.2.	El consumo continuó impulsando el crecimiento en la mayoría de los países de ALC-6	11
Figura 1.3.	Mientras los déficits presupuestarios se mantienen, el aumento del ahorro privado ha dado lugar a mejoras en la cuenta corriente	11
Figura 1.4.	La confianza de los consumidores sigue aumentando, mientras que la confianza empresarial se mantiene estable	12
Figura 1.5.	La incertidumbre externa se mantendrá en 2025	13
Figura 1.6.	La incertidumbre en las políticas comerciales ha aumentado durante la última década	14
Figura 1.7.	ALC se ha ido integrando al mundo	14
Figura 1.8.	Los trabajadores de las industrias exportadoras están expuestos a cambios en el comercio internacional	15
Figura 1.9.	Los patrones de las exportaciones de ALC varían según el socio comercial	15
Figura 1.10.	La productividad de los exportadores en ALC está rezagada respecto de Estados Unidos	16
Figura 1.11.	La inflación se está desacelerando, pero a un ritmo más lento de lo previsto	17
Figura 1.12.	Las expectativas de inflación siguen ancladas	18
Figura 1.13.	La política monetaria se ha relajado lentamente en los países de ALC -5, excepto en el caso de Brasil	19
Figura 1.14.	Las principales monedas de la región se han depreciado debido a la fortaleza del dólar y a la relajación monetaria	20
Figura 1.15.	El déficit fiscal persiste más que nada debido al aumento del pago de intereses	20
Figura 1.16.	El servicio de la deuda absorbe gran parte del gasto público, limitando la inversión	21
Figura 1.17.	La deuda pública está estable en niveles altos	21
Figura 1.18.	Los costos de endeudamiento siguen siendo altos	22
Figura 1.19.	Los países más endeudados son más sensibles a las subas de las tasas de interés	23
Figura 1.20.	Si bien los países dependientes del turismo han recuperado los niveles pre-pandemia, los exportadores de materias primas no lo han hecho	24
Figura 1.21.	El alza de la inflación está retrocediendo	25
Figura 1.22.	La trayectoria de la deuda pública varía en las distintas regiones del Caribe y América Central	25
Figura 1.23.	A pesar de la moderación de los préstamos vencidos, sigue siendo necesario estar atentos	26
Figura 1.24.	Las diferencias en el crecimiento del crédito entre las economías de ALC	26
Figura 1.25.	El ritmo de reducción de la pobreza sigue al crecimiento económico en todas las regiones emergentes	28

Figura 1.26.	La reducción de la pobreza en ALC se desaceleró en la última década y fue superada por regiones con un crecimiento más sólido	28
Figura 1.27.	Las tendencias de reducción de la pobreza de ALC mejoraron en Brasil y México, mientras que la mayoría de los demás países experimentaron retrocesos en el período 2018-23	29
Figura 1.28.	En su mayoría, las transferencias públicas han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en un contexto de espacio fiscal limitado	29
Figura 1.29.	A mediados de 2024, las tasas de empleo volvieron en su mayoría a los niveles anteriores a la pandemia, con algunas excepciones	30
Figura 1.30.	Las tres economías más grandes de la región (Brasil, México y Argentina) ya operaban con tasas de desempleo históricamente bajas a mediados de 2024	30
Figura 1.31.	El ingreso laboral se estancó en la mayoría de los países, con aumentos en los deciles de ingresos más bajos en Brasil y México	31
Figura 1.32.	En la mayoría de los países de ALC, el empleo se concentra en gran medida en pequeñas empresas de 1 a 4 trabajadores	31
Figura 1.33.	El bajo crecimiento de ALC, la falta de habilidades y las estrictas normas laborales perpetúan el amplio sector informal	32
Figura 1.34.	La mayor parte de la fuerza laboral informal tiene educación básica o inferior a la básica	32
Figura 1.35.	El aumento de la productividad laboral genera un aumento de los ingresos laborales reales en toda la región	33
Figura 1.36.	El potencial de mejora de la productividad laboral es significativo	33
Figura 1.37.	Los avances en materia de reducción de la pobreza en ALC durante las últimas dos décadas han sido impresionantes	34
Figura 1.38.	Los avances en la reducción de la desigualdad de ingresos han sido moderados	34
Figura 1.40.	Otros países de ALC se han convertido en el principal destino de los migrantes venezolanos	35
Figura 1.39.	Los flujos migratorios netos de ALC continúan aumentando	35
Figura 1.42.	A medida que aumentan las deportaciones, la migración neta hacia Estados Unidos sigue siendo positiva para la mayoría de los países de ALC	36
Figura 1.41.	La mayoría de los que emigran de los países de ALC vive en Estados Unidos	36
Figura 1.43.	Los países de América Central y el Caribe dependen en gran medida de las remesas	37
Figura 1.44.	El reciente aumento de las deportaciones ha ayudado a reducir el crecimiento de las remesas	37
Figura R1.1.1.	La exposición laboral a la GenAI es mayor en los países más desarrollados de ALC	39
Figura R1.1.2.	Actualmente, los países de ALC utilizan menos tecnologías digitales en los empleos con potencial de mejora mediante GenAI en comparación con sus contrapartes avanzadas	40
Figura R1.1.3.	Los hogares de los quintiles de ingresos más altos tienen una mayor proporción de trabajadores expuestos al aumento de la GenAI y que utilizan una computadora en el trabajo	41
Figura R1.2.1.	Las ocupaciones y los sectores verdes se encuentran en niveles relativamente bajos en ALC	42
Figura R1.2.2.	Los quintiles más pobres de ALC son los más vulnerables a la pérdida de empleo durante la transición verde	43
Figura 2.1.	En ALC, cada vez hay más búsquedas sobre "crimen organizado" en Google	46
Figura 2.2.	Doce países de ALC se encuentran entre los 50 primeros (de 193) por crimen organizado	48
Figura 2.3.	La presencia de ALC es significativa en muchos mercados ilícitos	48
Figura 2.5.	Los países de ALC sufren más violencia letal que otros con niveles de desarrollo y desigualdad similares	55
Figura 2.4.	ALC tiene la tasa promedio de homicidios más alta del mundo	55
Figura 2.6.	Las tasas de homicidio varían significativamente entre países en ALC	56
Figura 2.7.	La victimización se distribuye de manera más uniforme que los homicidios en ALC	57
Figura 2.8.	ALC es la región del mundo con el mayor exceso de violencia criminal letal	58
Figura 2.9.	Los países de ALC tienen tasas de encarcelamiento relativamente altas	59
Figura 2.10.	Las cárceles en ALC están hacinadas y muchos reclusos no han sido sentenciados	60
Figura R2.2.1.	La tasa de homicidios cayó abruptamente después de la intervención de las cárceles	62
Figura 2.11.	El tamaño de las fuerzas de policía varía entre países	63
Figura 2.12.	A la mayoría de los países latinoamericanos les va mal en cuanto a la eficacia de sus sistemas de justicia criminal	67

Panorama general

Las perspectivas para la región de América Latina y el Caribe se han vuelto más inciertas a medida que los modestos avances en el frente interno se ven afectados por un escenario externo más difícil. Se siguen realizando avances en la lucha contra la inflación, aunque el último tramo está resultando largo y el ritmo de reducción de las tasas de interés se ha desacelerado. La confianza de los consumidores y las empresas sigue aumentando o se mantiene estable, el turismo en el Caribe se ha recuperado por completo y los mercados laborales en las economías más grandes continúan ajustándose, lo que implica una reducción modesta de la pobreza.

Sin embargo, el entorno externo ha cambiado sustancialmente en los seis meses transcurridos desde el *Latin America and the Caribbean Economic Review* de octubre de 2024, con consecuencias tanto a corto como a largo plazo. La inflación en los países avanzados, en lugar de estar casi erradicada como se esperaba anteriormente, parece que persistirá, retrasando nuevos recortes de las tasas de interés y limitando el margen de las autoridades monetarias en la región para relajar aún más la política monetaria. El aparente giro de Estados Unidos hacia mayores aranceles arroja incertidumbre sobre el proyecto de *nearshoring*, la práctica de llevar operaciones en el extranjero a países cercanos o amigos, y el acceso a los mercados mundiales en general. El otro mercado principal de ALC—China—sigue mostrando un crecimiento lento. Los recientes recortes de la asistencia externa para el desarrollo por parte de las economías avanzadas afectarán gravemente a algunos países. Si bien durante la última década los crecientes flujos migratorios se han alejado de Estados Unidos y han aumentado entre países de ALC, el aumento de la migración que retorna desde Estados Unidos ejercerá presión sobre los mercados laborales locales y los recursos destinados a la reintegración de los migrantes. Por último, la creciente expansión de la delincuencia organizada transnacional ha elevado la delincuencia y la violencia hasta convertirlas en una fuente predominante de malestar social y plantea graves desafíos para la gobernanza y el desarrollo en ALC.

Estos desafíos complicarán los esfuerzos por reactivar el crecimiento, corregir los desequilibrios fiscales, reducir la deuda, y recuperar los avances logrados en la reducción de la pobreza durante la década anterior. Las tasas de crecimiento de ALC continúan siendo de las más bajas del mundo. La inversión, tanto pública como privada, sigue siendo moderada, e incluso antes de la mayor incertidumbre introducida por el aumento de los aranceles estadounidenses, había pruebas de que la región estaba potencialmente quedándose afuera del “*nearshoring*”. Los modestos resultados tanto en materia de crecimiento como de comercio subrayan la necesidad de avanzar en un programa de reformas de larga data con el fin de preparar a las economías regionales para los nuevos desafíos y las posibles oportunidades.

El capítulo 1 de este informe describe la evolución macroeconómica y social reciente de la región y los desafíos que enfrenta a corto plazo, especialmente en el ámbito del crecimiento, el comercio y el equilibrio de las cuentas fiscales. El capítulo 2 analiza las consecuencias de la continua influencia por parte de delincuencia organizada en el crecimiento, el bienestar social y la gobernanza.

Capítulo 1. Recuperación sostenida en medio de nuevos desafíos

La región continúa avanzando en la reducción de la inflación, aunque la convergencia hacia las metas se ha ralentizado, en gran parte debido al aumento de los costos laborales que impulsa al alza los precios de los servicios y los alimentos. Las expectativas inflacionarias siguen ancladas, ya que todos los principales países esperan alcanzar sus objetivos para 2026 y las políticas monetarias siguen relajándose. Las tasas tanto nominales como reales han comenzado a descender, con excepción de la tasa de Brasil. En el Caribe, debido a que muchas monedas están ancladas, el shock inflacionario inicial fue más moderado y manejable, mientras que los regímenes de metas de República Dominicana y Jamaica han conducido a mayor inflación y reducciones más lentas.

A mediano plazo, se prevé que los vientos en contra del exterior sean más desafiantes. Mayor incertidumbre con respecto a una disminución de las tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos y Europa podría limitar el margen para nuevas reducciones locales mientras los países se defienden de las salidas de capital y de la debilidad monetaria. Tasas más altas también contribuirán a un crecimiento modesto en los países del Grupo de los Siete (G-7), mientras que China continúa luchando con un sector inmobiliario en contracción y la disminución de la confianza de los consumidores. Todos estos factores implican que los precios de los productos primarios se suavizarán.

Según los pronósticos, el crecimiento en América Latina y el Caribe será de 2,1 por ciento en 2025, impulsado por la recuperación de Argentina, con el resto de las economías más grandes mostrando poco dinamismo. Los países caribeños dependientes del turismo obtendrán mejores resultados: San Vicente y las Granadinas y Dominica superarán el 4 por ciento, aunque es probable que para continuar creciendo sea necesario aumentar la conectividad y la capacidad hotelera. Los países exportadores de materias primas, como Trinidad y Tobago y Surinam, experimentarán ligeras mejoras en el crecimiento este año.

En el plano financiero, los altos niveles de las tasas de interés mantendrán la presión sobre los hogares y las empresas que han resultado en aumentos de los préstamos vencidos, aunque los recientes recortes de las tasas han proporcionado alivio en algunos países. Se debe seguir monitoreando estos riesgos, sin embargo, hasta el momento los bancos parecen estar bien provistos y los mercados internacionales siguen siendo optimistas.

Un motivo de preocupación general son las actuales tensiones comerciales mundiales que amenazan el acceso a los mercados y que probablemente tendrán un efecto amortiguador en el crecimiento mundial. Mayores aranceles, y los niveles más altos de incertidumbre comercial en una década, impiden una mayor integración de la región en las cadenas de suministro de Estados Unidos, además de poner en peligro los empleos en las industrias relacionadas con las exportaciones. Los acuerdos recientemente firmados por México y el Mercosur con la Unión Europea representan un paso hacia la diversificación de mercados y una postura relativamente abierta hacia los mercados mundiales. Sin embargo, los nuevos desafíos exigen abordar una agenda pendiente de hace décadas en las áreas de infraestructura, educación, regulación, competencia y política tributaria para aumentar tanto la productividad como la capacidad de adaptación de las economías de la región frente a la nueva incertidumbre. Además, los recortes a la asistencia externa para el desarrollo tendrán impactos diversos, como el debilitamiento de los esfuerzos de ayuda humanitaria en Haití, el debilitamiento de la conservación del Amazonas en América del Sur y la reducción de la asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos en los países receptores.

En el frente fiscal, el gasto público sigue siendo elevado y los déficits siguen siendo considerables. El servicio de la deuda sigue siendo alto, requiriendo en promedio 10,9 por ciento del gasto público, en las economías más grandes (ALC-6), lo que se debe, en gran medida, a las tasas de interés cada vez más altas sobre el mayor volumen de deuda posterior a la pandemia. Las transferencias transitorias a personas en situación de vulnerabilidad y empresas durante

la pandemia de COVID-19 continúan retrocediendo, aunque de manera incompleta, mientras que en muchos países el resto de los componentes del gasto no ha disminuido o ha aumentado. En general, los avances en la reducción de la deuda siguen siendo limitados: la relación deuda-PIB aumentó en 2024 al 63,3 por ciento y se mantiene por encima del nivel del 59,4 por ciento de 2019. En términos generales, los niveles de deuda en el Caribe se mantienen estables, aunque en los últimos años varios países —Barbados, Belice y Jamaica en particular— han experimentado reducciones impresionantes, de entre 26 y 40 puntos porcentuales del PIB. Aun así, la región entera necesita generar más espacio fiscal a través de aumentos en la eficiencia, reducción del gasto y mejoras en el diseño de los sistemas tributarios.

Si bien el desequilibrio en cuenta corriente se ha reducido, esto se debe principalmente al estancamiento de la inversión y al aumento del ahorro del sector privado. Esta escasa acumulación de capital público y privado, combinada con escasos aumentos de la productividad a largo plazo, es un mal augurio para el crecimiento a largo plazo.

Pobreza y desigualdad

La reducción de la pobreza continúa avanzando, aunque más lentamente. Las estimaciones para 2024 indican que la pobreza monetaria disminuirá marginalmente al 24,4 por ciento de la población de ALC (sobre la base de una línea de pobreza de ingreso medio alto de USD 6,85 por día en términos de paridad del poder adquisitivo de 2017), desde un nivel de 25 por ciento en 2023. Por otro lado, se prevé que la desigualdad se mantenga alta en comparación con los estándares globales, con un coeficiente de Gini del 49,9 por ciento. Alrededor del 65 por ciento de la mejora de la pobreza entre 2018 y 2023 fue impulsada por una combinación de transferencias públicas y mercados laborales más sólidos, en particular mayores ingresos ajustados por inflación. Los casos más positivos se registraron en Brasil, Colombia y México, pero dado que estos países ya tenían tasas de desempleo históricamente bajas a mediados de 2024, y dado que en muchas economías las transferencias públicas se están reduciendo, es más probable que cualquier ganancia social adicional provenga de la mejora de la calidad de los empleos mediante el aumento de la productividad. En Colombia, por ejemplo, un aumento de 1 por ciento en la productividad puede dar lugar a un aumento de casi medio punto en los salarios, con la consiguiente caída de la pobreza. En la actualidad, la productividad laboral oscila entre el 20 por ciento y el 60 por ciento de los niveles de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que sugiere que hay margen para obtener beneficios si se implementan las reformas adecuadas. El aumento de la productividad del sector moderno y la mejora de las habilidades de los trabajadores de las regiones también son fundamentales para reducir la tasa de informalidad, persistentemente alta.

Crear empleos de alta productividad: el desafío de la inteligencia artificial y la transición energética

Si bien el incremento de los salarios mínimos a partir de niveles iniciales muy bajos puede aumentar los salarios y reducir la pobreza, la solución a largo plazo para el progreso social es promover el aumento del número de empleos de alta productividad en el sector moderno. Dos cambios en la economía mundial, la aparición de la inteligencia artificial (IA) y la evolución de la economía verde, plantean desafíos y oportunidades para la creación de tales empleos.

Si bien la inteligencia artificial generativa (GenAI) no se ha adoptado ampliamente en ALC, su potencial para mejorar los puestos de trabajo (aumentando la productividad) pero también para automatizar (y desplazar) a los trabajadores ha generado preocupación en los países avanzados. Sin embargo, esta tecnología se está propagando más lentamente en ALC: en la actualidad, se estima que entre el 26 por ciento y el 38 por ciento del empleo está expuesto a la GenAI, y los más vulnerables son entre el 1 por ciento y el 6 por ciento del empleo, especialmente en empleos como agentes de atención al cliente e ingreso de datos. Entre el 7 por ciento y el 14 por ciento de los empleos en ALC podrían ser más productivos a través de mejoras en la GenAI, particularmente en sectores como la educación, la salud y los servicios personales. Sin embargo, para maximizar los beneficios de la GenAI y minimizar su potencial para acrecentar la desigualdad, se necesitan políticas complementarias, como desarrollar infraestructura digital, proporcionar apoyo a los ingresos de los trabajadores desplazados y equipar a los trabajadores con habilidades básicas.

La transición energética también tiene consecuencias significativas para la demanda laboral y la desigualdad de ingresos, ya que desplaza empleos en sectores tradicionales y crea oportunidades en otros nuevos. El empleo en sectores con emisiones de gases de efecto invernadero relativamente bajas es aún reducido, alrededor del 10 por ciento, mientras que el empleo en sectores con emisiones de gases de efecto invernadero altas, como la agricultura, es más generalizado. Al igual que en el caso de la IA, los sectores emergentes posiblemente requerirán un conjunto diferente de habilidades. Como en la mayoría de los sectores emergentes, proporcionar a los trabajadores la educación y las habilidades necesarias para competir es una política complementaria fundamental.

El impacto de la mayor migración de retorno

A mediano plazo, las deportaciones anunciadas de varias economías avanzadas —pero especialmente de Estados Unidos— requerirán integrar a los migrantes que regresan a los mercados laborales locales. Aunque la migración total aumentó ligeramente durante el período 2021-24 a 1,5 millones por año desde el período históricamente alto de 2016-20 de 1,4 millones, tanto los países de destino como los de origen han cambiado sustancialmente en la última década. Las normas migratorias más estrictas en Estados Unidos han redirigido los flujos migratorios desde Estados Unidos hacia ALC y Europa meridional: aproximadamente el 20 por ciento de los nuevos migrantes se dirige a Estados Unidos, el 61 por ciento a otros países de ALC y el resto a partes de Europa. Dicho esto, Estados Unidos sigue concentrando la mayor proporción del total de migrantes de ALC, con un 55 por ciento, aunque ese nivel es significativamente menor que hace una década (68 por ciento). La crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela ha convertido al país en la fuente del 57 por ciento del total de flujos migratorios desde ALC, mientras que los flujos netos desde México han pasado a ser negativos en la última década. Dicho esto, debido a la expansión general de la migración, incluso con las tasas históricamente altas de deportación en el período 2021-22, los flujos netos hacia Estados Unidos siguen siendo positivos. Los flujos de remesas siguen siendo elevados en algunos países: representan más del 15 por ciento del PIB en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Jamaica. En estos países se observará una desaceleración del crecimiento, si no una caída más sostenida como en el caso de Haití.

Finalmente, la creciente ola de violencia en la región impulsada por el crimen organizado está provocando un deterioro en las condiciones de vida de los habitantes de la región, aumentando la incertidumbre que impide la inversión necesaria en capital y tecnología para el crecimiento de la productividad, así como debilitando la capacidad de los Estados para responder a sus necesidades.

Capítulo 2. Crimen organizado y violencia en ALC

Los desafíos del desarrollo de ALC se multiplican con la expansión del crimen organizado en la región a nuevos países e industrias, más allá de los países donde el narcotráfico y los grupos criminales han estado presentes por décadas, como Colombia, Brasil o México. Esta expansión no es solo un problema de la región: los grupos criminales de ALC son parte de una vasta red internacional en la que grupos transnacionales de crimen organizado se involucran en una amplia gama de actividades ilegales, que va desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes, la minería ilegal y la deforestación. Estos grupos se caracterizan por el control y la gobernanza de territorios, la extorsión y la captura del Estado. Doce países de ALC se encuentran entre los 50 primeros en 2023 según el puntaje de criminalidad de la Iniciativa Mundial contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por su sigla en inglés).

El crimen organizado y la violencia obstaculizan el camino hacia el desarrollo

El crimen organizado plantea numerosos desafíos, no solo para el bienestar de los ciudadanos, sino también para el crecimiento económico: la incertidumbre sobre los derechos de propiedad reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los costos de transacción de las empresas y reducen su competitividad; los gastos

improductivos en seguridad pública desvían recursos del gasto en salud, educación e infraestructura, que podrían mejorar la vida de las personas; las víctimas de violencia ven reducida su capacidad para acumular capital humano; los delitos a activos o propiedades erosionan el capital físico; el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y fauna deterioran el capital natural a través de la deforestación y la contaminación del agua; las comunidades que viven bajo el dominio del crimen organizado pierden sus libertades básicas; la infiltración en las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos y la provisión de servicios esenciales.

¿Por qué está aumentando el crimen organizado en ALC?

Si bien no es fácil determinar qué hay detrás del aumento del crimen organizado en la región, hay varios factores que pueden estar contribuyendo. Durante la década de 2010, la demanda mundial de cocaína, oro ilegal y el tráfico ilícito de migrantes aumentó considerablemente, lo que atrajo nuevos participantes a estos mercados. Las medidas represivas de varios gobiernos después del 2005 resultaron en una reorganización de los grupos de crimen organizado de ALC y un nuevo panorama de actores, antiguos y nuevos, en competencia. La pandemia del COVID-19 permitió a los grupos criminales ganar legitimidad y poder en zonas desatendidas por el Estado, les dio a estos grupos la oportunidad de optimizar sus operaciones y facilitó el reclutamiento entre las poblaciones empobrecidas. El aumento en la producción y la disponibilidad de armas facilitó el crecimiento del crimen organizado en nuevas zonas y mercados. La innovación tecnológica, incluidas las criptomonedas, permitió la expansión de grupos transnacionales.

El exceso de violencia letal distingue al crimen organizado en ALC de otras regiones

En ALC, la violencia letal es más alta que en cualquier otra región del mundo. Aunque ALC representa solo el 9 por ciento de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en ALC fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a 8,0. Las tasas de homicidios en los países de ALC son altas en comparación con las de países con niveles similares de ingreso per cápita y desigualdad. Por lo que, si bien las condiciones sociales explican en parte las altas tasas, hay otros factores en juego. Las tasas de victimización, basadas en encuestas, que capturan la “criminalidad general” (tanto los crímenes violentos letales y no letales como los crímenes de propiedad) también son altas, de 30 por ciento en promedio, aunque solo tres veces más altas que las del resto del mundo, en comparación con ocho veces en el caso de los homicidios. Existe un nivel “excesivo” de homicidios en ALC, dado lo que predecirían las tasas de victimización, atribuible, posiblemente, a una mayor letalidad de la violencia del crimen organizado ALC.

Las instituciones débiles en áreas críticas agravan el problema en lugar de mitigarlo

La lucha contra el crimen organizado se ve obstaculizada por deficiencias en los sistemas carcelarios, las fuerzas de policía y los sistemas de justicia.

Cárceles: Además de los persistentes niveles de hacinamiento, alta reincidencia y encarcelamientos sin sentencia, en muchos lugares de ALC los grupos de crimen organizado han tomado el control de las cárceles y gestionan el crimen desde adentro. Como resultado, los objetivos de incapacitación, disuasión y resocialización se vuelven inalcanzables, mientras que las cárceles sirven como lugares de reclutamiento para nuevos miembros. Las autoridades deben recuperar el control de las cárceles, mejorar sus condiciones y buscar alternativas al encarcelamiento. El éxito de las estrategias de “mano dura” es fuertemente dependientes del contexto específico en que se implementan y estas estrategias son, con frecuencia, contraproducentes.

Fuerzas de policía: El tamaño de las fuerzas de policía de la región como porcentaje de la población varía mucho de un país a otro. Sin embargo, es imposible determinar si los países de ALC tienen un exceso o un nivel insuficiente de policías, porque la eficacia policial está determinada por factores distintos al tamaño. La efectividad podría aumentarse mediante mejores en la asignación de las fuerzas sobre el territorio, la reasignación de recursos de patrullaje a investigación, mejor entrenamiento, mejores condiciones de trabajo, y una mayor cooperación entre agencias a nivel local y nacional, y entre países. La confianza en la policía es una de las más bajas del mundo y se necesitan reformas para cultivarla.

Sistemas de justicia: La debilidad de los sistemas de justicia de la región implica que los países no pueden detectar, investigar y dismantelar organizaciones criminales complejas con múltiples actores y capas o, al menos, castigar a los delincuentes y las actividades que generan las peores externalidades para el bienestar de los habitantes de la región. La impunidad es un problema significativo. Parte de esta debilidad puede deberse a indicadores de desempeño ineficaces que no proporcionan los incentivos correctos a las autoridades y los funcionarios en los diversos eslabones de la cadena de justicia penal. Las autoridades judiciales también son fundamentales para reducir el encarcelamiento. Para recuperar el control estatal en zonas donde las organizaciones criminales prestan servicios de justicia, es necesario llevar instituciones de justicia que funcionen adecuadamente. Apoyar mecanismos innovadores de resolución de disputas puede ser un primer paso.

La acción del Estado requiere una mejor comprensión de cómo opera el crimen organizado para combatirlo

Parte de la debilidad institucional obedece a la falta de datos o a la falta de capacidad para utilizar los datos disponibles para informar la toma de decisiones. Un desafío es que el crimen organizado tiene tanto elementos visibles —como la violencia letal— como aspectos invisibles que son mucho más difíciles de cuantificar. No existen encuestas oficiales comparables y sistemáticas que puedan ser utilizadas para focalizar las políticas y programas. Este capítulo enfatiza la necesidad de encuestas recurrentes especializadas y el uso inteligente de los datos administrativos, y destaca el papel que puede desempeñar la investigación rigurosa de largo plazo para guiar la acción del Estado.

El crimen organizado se reproduce en la ausencia de oportunidades

La falta de oportunidades, especialmente para los hombres jóvenes, que son las principales víctimas y los principales perpetradores de actos de violencia criminal, facilita el reclutamiento de las organizaciones criminales. En muchos casos, no hay reclutamiento forzado, pero los grupos criminales ofrecen oportunidades de ingresos significativamente mejores que las disponibles en los mercados legales. También ofrecen perspectivas de desarrollo profesional y elementos de “movilidad emocional” (respeto y reconocimiento), que los empleos precarios en los mercados lícitos de la región no pueden proporcionar.

Las políticas para prevenir el reclutamiento dirigidas a los jóvenes en riesgo deben ser una prioridad en la lucha contra el crimen organizado, ya que pueden ayudar a romper el acceso de las organizaciones criminales a su potencial fuerza laboral. Esto incluye intervenciones educativas focalizadas, programas de prevención y protección basados en la comunidad y la resocialización de antiguos delincuentes. Además, las intervenciones que abordan las masculinidades nocivas y las desigualdades de género pueden ayudar a eliminar las normas sociales que soportan la aceptación de las diferentes formas de violencia, y reemplazarlas por otras que construyan sociedades pacíficas. Los programas de mentoría y apoyo emocional, donde los jóvenes pueden encontrar modelos a seguir fuera del contexto criminal, también han demostrado ser efectivos. La prevención no puede reemplazar las políticas de seguridad, pero es un complemento fundamental. Igualmente, una buena política de seguridad sin medidas de prevención será insuficiente en el largo plazo.

La coordinación y colaboración internacional son fundamentales para enfrentar el crimen organizado

Los Estados de ALC enfrentan desafíos claros para construir la capacidad estratégica que necesitan para gestionar el crimen organizado, proteger a sus ciudadanos de sus expresiones más dañinas y brindarles iguales oportunidades para desarrollar las vidas que desean. Sin embargo, es poco probable que lo logren por sí solos, porque el crimen organizado es un problema que trasciende las fronteras nacionales y requiere soluciones coordinadas. La colaboración internacional debe ocurrir en varios frentes, incluyendo plataformas para el intercambio de información entre países—entre aduanas, autoridades fiscales, unidades de inteligencia financiera y unidades de investigación criminal—, la estandarización de los protocolos probatorios, y la presentación de una única voz en la conversación mundial sobre drogas, armas de fuego y flujos financieros.

Probablemente, el crimen organizado tiene una escala y un alcance aún mayores de los que se alcanzan a vislumbrar. Sin embargo, la región ha enfrentado este problema en el pasado y, con las reformas necesarias en la gobernanza, la creación de oportunidades para la juventud y la colaboración internacional es posible hacer frente a los desafíos actuales y reducir su amenaza para el desarrollo.

Perspectivas de crecimiento para la región

Tasas de crecimiento del PIB real

	2022	2023	2024e	2025p	2026p	2027p
Argentina	5,3	-1,6	-1,8	5,5	4,5	4,0
Bahamas	10,8	2,6	1,9	1,1	1,2	1,3
Barbados	17,8	4,1	3,8	2,8	2,0	1,7
Belice	9,4	1,1	8,2	2,8	2,4	2,3
Bolivia	3,6	3,1	1,4	1,2	1,1	1,1
Brasil	3,0	3,2	3,4	1,8	2,0	2,0
Chile	2,2	0,5	2,6	2,1	2,2	2,1
Colombia	7,3	0,7	1,7	2,4	2,7	2,9
Costa Rica	4,6	5,1	4,3	3,5	3,7	3,8
Dominica	5,6	4,7	4,6	4,3	3,4	2,8
Ecuador	5,9	2,0	-2,5	1,9	2,0	2,1
El Salvador	3,0	3,5	2,6	2,2	2,4	2,9
Granada	7,3	4,7	3,7	3,8	3,4	2,7
Guatemala	4,2	3,5	3,7	3,5	3,8	3,8
Guyana	63,3	33,8	43,4	10,0	23,0	24,3
Haití	-1,7	-1,9	-4,2	-2,2	2,0	2,5
Honduras	4,1	3,6	3,6	2,8	3,4	3,7
Jamaica	5,2	2,6	-0,7	1,7	1,7	1,6
México	3,7	3,3	1,5	0,0	1,1	1,8
Nicaragua	3,8	4,6	3,6	3,4	3,3	3,3
Panamá	10,8	7,4	2,9	3,5	3,8	4,3
Paraguay	0,2	5,0	4,2	3,5	3,6	3,6
Perú	2,8	-0,4	3,3	2,9	2,5	2,5
República Dominicana	5,2	2,2	5,0	4,0	4,2	4,4
San Vicente y las Granadinas	5,0	5,8	4,5	4,9	2,9	2,7
Santa Lucía	20,4	2,2	3,7	2,8	2,3	1,9
Surinam	2,4	2,5	2,8	3,1	3,3	3,5
Trinidad y Tobago	1,1	1,4	1,7	2,8	1,3	3,2
Uruguay	4,5	0,7	3,1	2,3	2,2	2,2

Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial.

Nota: la fecha de corte para los datos es el 10 de abril de 2025, e = estimación; p = pronóstico.



CAPÍTULO 1

El estado de la región América Latina y el Caribe

La percepción del rumbo de la economía mundial ha cambiado en los seis meses transcurridos desde el *Latin America and the Caribbean Economic Review* (LACER) de octubre de 2024.¹ La inflación en los países avanzados, en lugar de estar erradicada como se esperaba anteriormente, parece que persistirá, retrasando nuevos recortes de las tasas de interés y limitando el espacio para que los bancos centrales de América Latina y el Caribe (ALC) flexibilicen aún más la política monetaria. El aparente giro de Estados Unidos hacia mayores aranceles arroja incertidumbre sobre el proyecto de *nearshoring* en ALC y el acceso a los mercados mundiales en general, mientras que el otro principal mercado de ALC, China, continúa mostrando un crecimiento anémico. Además, los recientes recortes a la asistencia externa para el desarrollo por parte de las economías avanzadas podrían afectar a varios países. Si bien durante la última década la mayoría de los flujos migratorios se han producido dentro de ALC, el aumento de la migración que retorna desde Estados Unidos podría ejercer presión sobre algunos mercados laborales locales y los recursos destinados a la reintegración de los migrantes, al mismo tiempo que se reducen las remesas. Es probable que el orden mundial se encuentre en un estado de cambio por un tiempo.

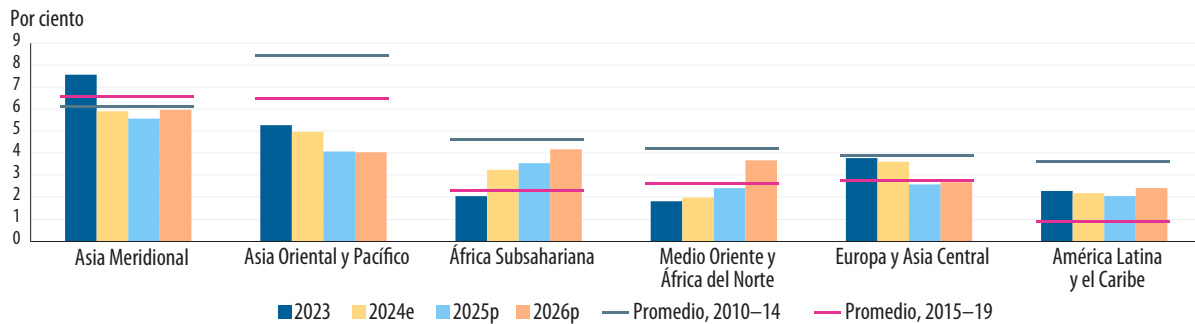
Actividad económica: el crecimiento sigue rezagado

En 2024, al igual que en años anteriores, ALC fue una de las regiones con menor crecimiento del mundo (figura 1.1, panel a). El crecimiento del producto continuó siendo moderado, reflejando la constante convergencia al producto potencial en México y al proceso de ajuste en Argentina. En Brasil, el crecimiento se mantuvo firme. Las grandes economías

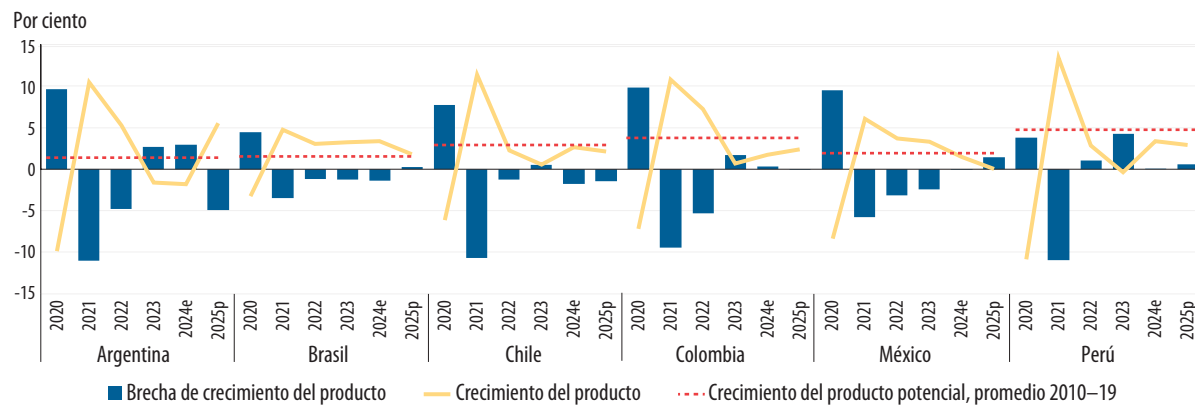
FIGURA 1.1.

El crecimiento sigue rezagado en relación a otras regiones

a. Crecimiento por región



b. Crecimiento en ALC-6



Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.

Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). En el panel b, la región de ALC-6 incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. e = estimación; p = pronóstico; PIB = producto interno bruto.

1 Banco Mundial (2024a).

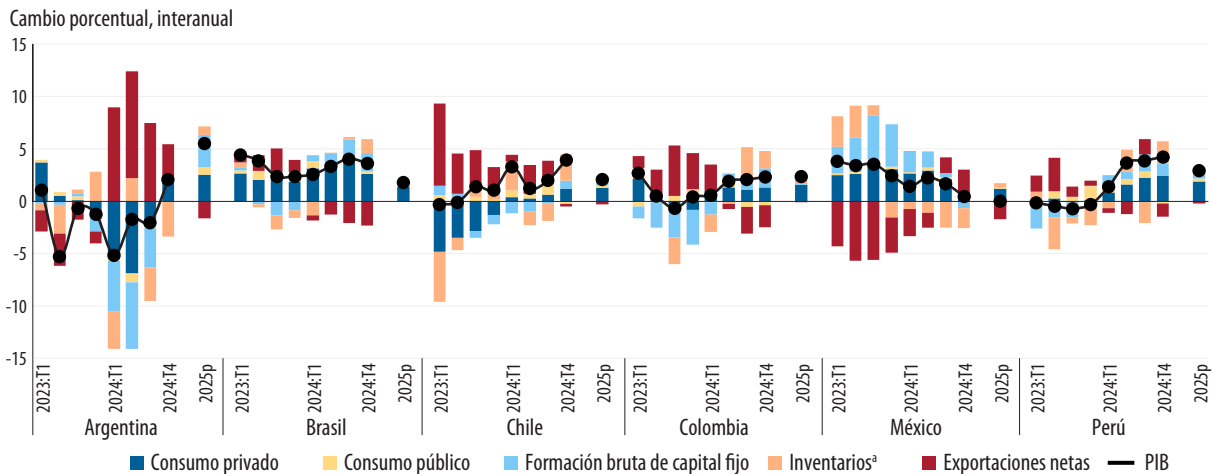
restantes —Chile, Colombia y Perú— experimentaron un leve repunte, lo que redujo la brecha de crecimiento del producto desde su posición cíclica negativa. Para 2025, se espera que el crecimiento se desacelere ligeramente, con solo Argentina y Colombia mostrando un desempeño más fuerte que en 2024 (figura 1.1, panel b).

A lo largo de 2024, el consumo continuó impulsando el crecimiento, excepto en Argentina y Chile, donde el crecimiento fue impulsado por el sector externo. En México, la inversión pública apoyó la expansión de la inversión agregada y el crecimiento del producto durante 2023, pero a medida que perdió impulso durante 2024, este estímulo se debilitó. En el resto de la región, la inversión se mantuvo baja, debido a las altas tasas de interés y a las expectativas de crecimiento económico persistentemente bajo (figura 1.2).

FIGURA 1.2.

El consumo continuó impulsando el crecimiento en la mayoría de los países de ALC-6

Contribuciones al crecimiento del PIB real

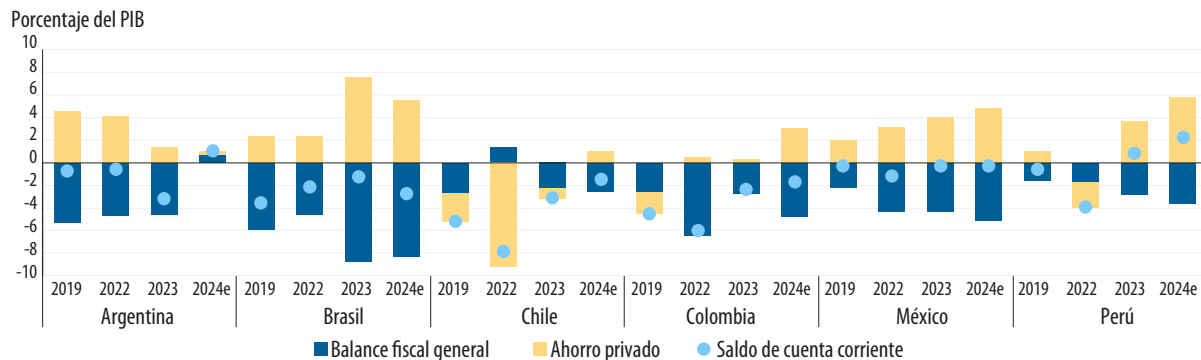


Fuentes: Haver Analytics; Banco Central de Chile; Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial; y cálculos del personal del Banco Mundial.
 Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). p = pronóstico; PIB = producto interno bruto.
 a. Los inventarios incluyen discrepancias estadísticas.

La desaceleración de la demanda interna ha contribuido a corregir los desequilibrios con el sector externo. A pesar de que los déficits fiscales persisten en toda la región, aumentos en el ahorro neto del sector privado han ayudado a mejorar la posición externa en la mayoría de los países (figura 1.3).

FIGURA 1.3.

Mientras los déficits presupuestarios se mantienen, el aumento del ahorro privado ha dado lugar a mejoras en la cuenta corriente



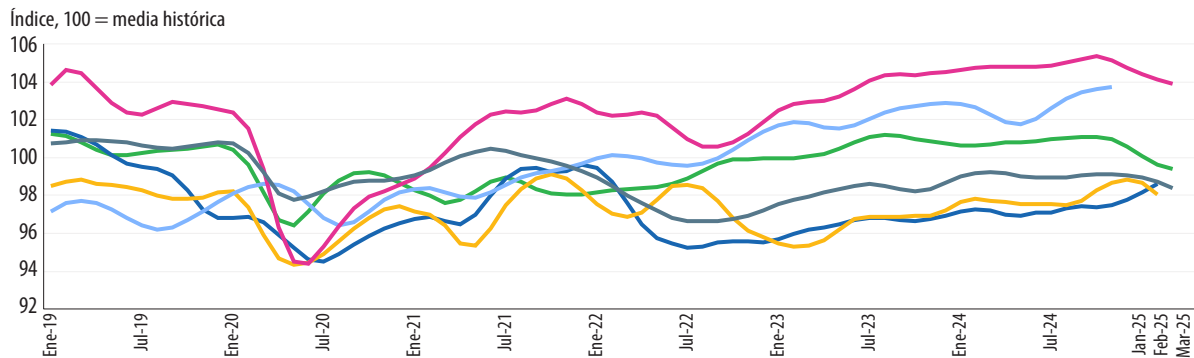
Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.
 Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación; PIB = producto interno bruto.

Las expectativas de los hogares siguen mejorando, respaldadas en gran medida por la baja de la inflación y el dinamismo de los mercados laborales (figura 1.4, panel a). La confianza empresarial se mantiene estable en torno a los valores históricos, en consonancia con las moderadas tasas de inversión (figura 1.4, panel b). Este patrón sugiere que la baja inversión, en lugar de ser solo un fenómeno cíclico, se explica en parte por los fundamentos económicos de ALC.

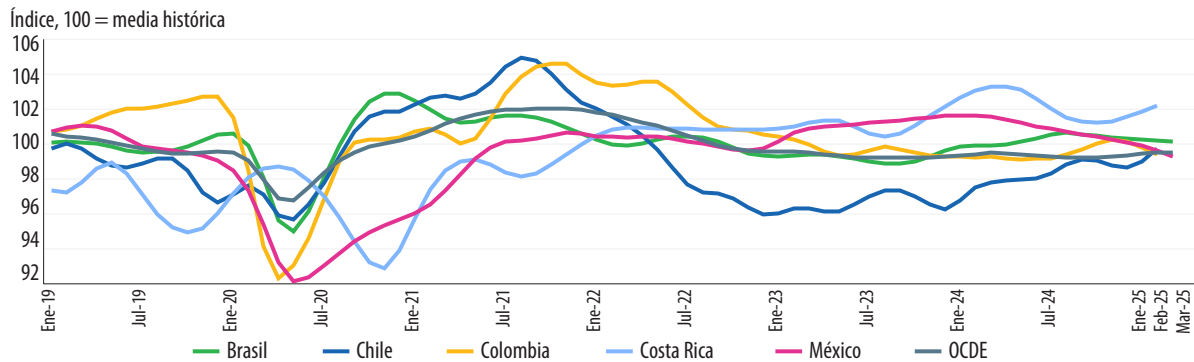
FIGURA 1.4.

La confianza de los consumidores sigue aumentando, mientras que la confianza empresarial se mantiene estable

a. Índice de confianza del consumidor



b. Índice de confianza empresarial



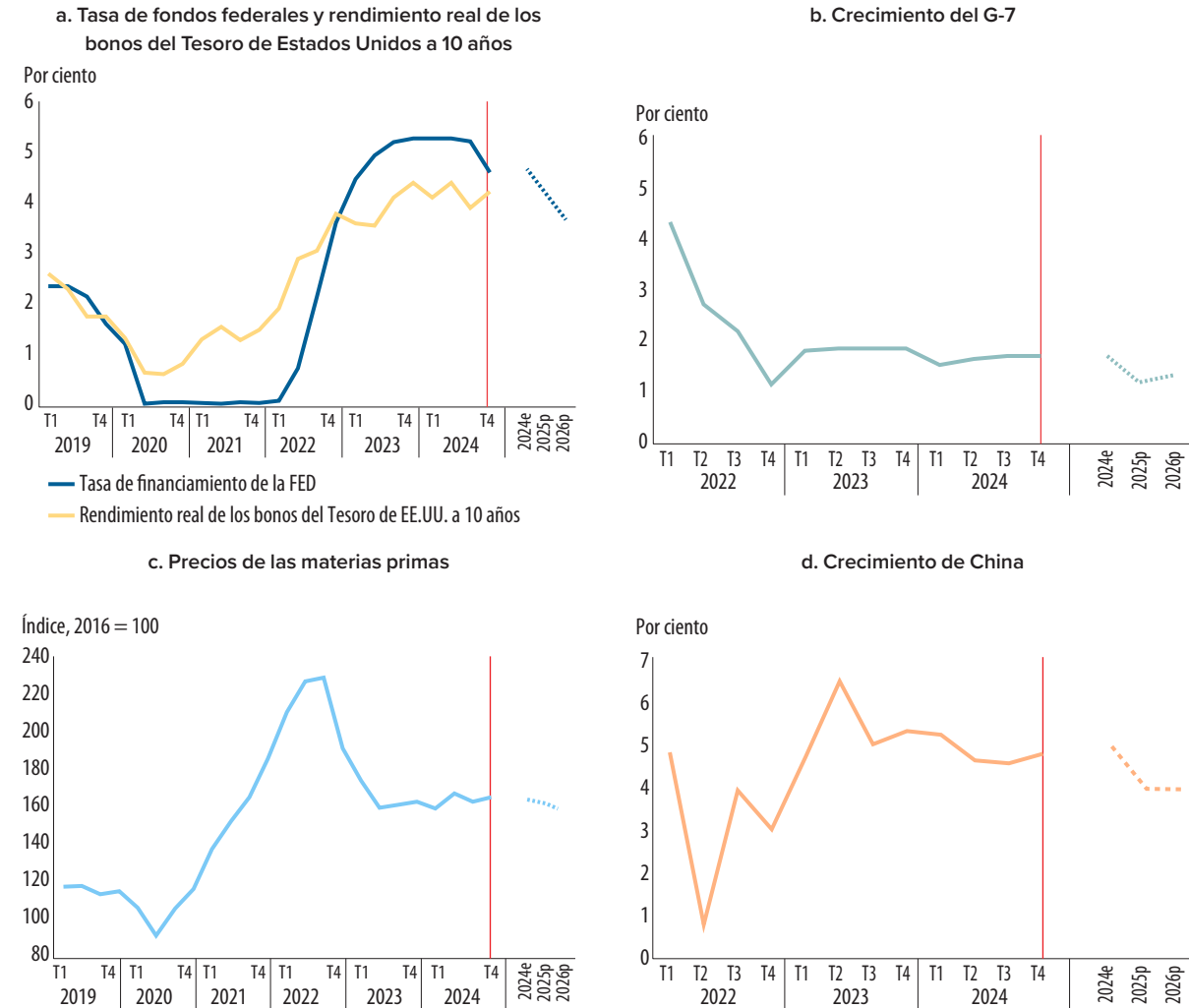
Fuentes: para el panel a, Índice de Confianza del Consumidor (indicador) de la OCDE (doi: 10.1787/46434d78-en). Para el panel b, Índice de Confianza Empresarial (indicador) de la OCDE (doi: 10.1787/3092dc4f-en).
Nota: OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Entorno externo: los factores externos siguen siendo desafiantes

El entorno externo es desafiante y es probable que lo continúe siendo. Por el lado positivo, en el tercer trimestre de 2024, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comenzó a normalizar lentamente las tasas de interés, un proceso que se espera que continúe durante el 2025, lo que aliviará las condiciones financieras en todo el mundo. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la velocidad de disminución de las tasas de interés a medida que la Reserva Federal retrasa nuevos recortes, así como sobre el punto final, que probablemente seguirá siendo más alto que en el periodo pre-inflacionario (figura 1.5, panel a). Además, si bien los precios de las materias primas se encuentran por debajo de su punto máximo del año 2022, siguen siendo altos en comparación con los niveles anteriores a la pandemia (figura 1.5, panel c). Por el lado negativo, el crecimiento del producto en los principales socios comerciales de ALC continúa moderándose. Tras la desaceleración registrada en 2024, se espera que el crecimiento del G-7 continúe moderándose y alcanzando un 1,2 por ciento en 2025, como reflejo de la moderación de la economía de Estados Unidos y del escaso crecimiento de Europa (figura 1.5, panel b). Al mismo tiempo, las perspectivas para China siguen siendo moderadas e inciertas (figura 1.5, panel d).

FIGURA 1.5.

La incertidumbre externa se mantendrá en 2025



Fuentes: para el panel a, datos económicos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco de la Reserva Federal de St. Louis (FRED); para el panel b, PIB trimestral (indicador) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (doi: 10.1787/b86d1fc8-en) y base de datos Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI) (<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2024/October>); para el panel c, precios de productos primarios del Banco Mundial (hojas rosa) (<https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>) y base de datos WEO del FMI; para el panel d, Haver Analytics y base de datos WEO del FMI. Nota: p = pronóstico; G-7 = Grupo de los Siete.

Mayor incertidumbre en el comercio

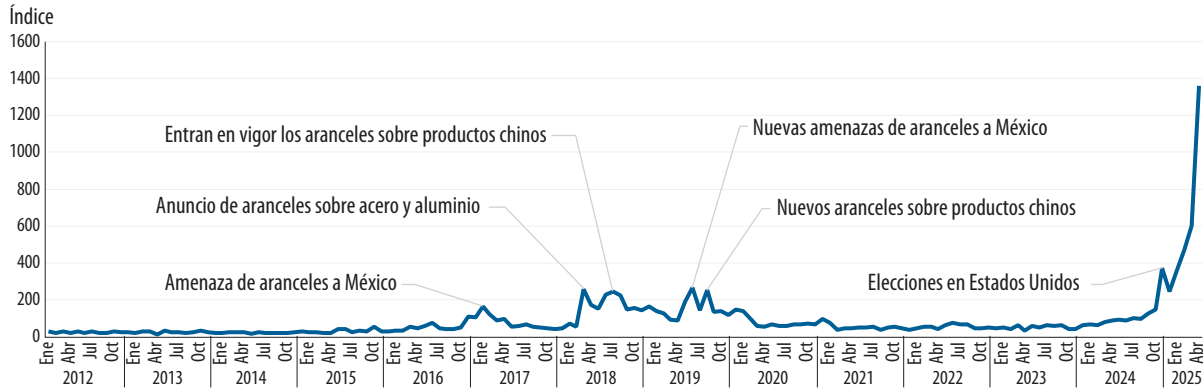
El escenario externo menos dinámico se complementa con una mayor incertidumbre sobre las políticas comerciales de los principales socios comerciales de la región, que van desde mayores aranceles implementados o en consideración por parte de las economías avanzadas (Estados Unidos, China y la Unión Europea) hasta realineamientos consistentes con el fenómeno del *nearshoring*. El índice de incertidumbre en política comercial muestra que en los últimos 10 años la incertidumbre ha aumentado y se ha mantenido persistentemente por encima de los niveles observados antes de 2015 (figura 1.6).

Este aumento de la incertidumbre en las principales economías del mundo es especialmente relevante para ALC, ya que la mayoría de los países han avanzado constantemente en la integración a las cadenas de valor mundiales. En las últimas dos décadas, las exportaciones de la región han aumentado del 14,6 por ciento al 21 por ciento del PIB, y tanto Estados Unidos como China han aumentado su importancia como mercados de exportación. Si bien Estados Unidos

FIGURA 1.6.

La incertidumbre en las políticas comerciales ha aumentado durante la última década

Índice de incertidumbre en política comercial



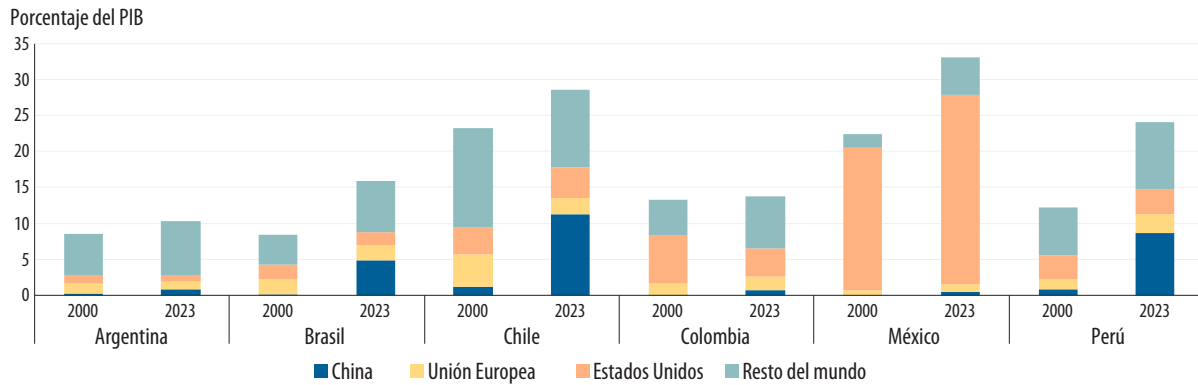
Fuente: Caldara et al. 2019.

Nota: el índice representa el porcentaje de artículos periodísticos que contienen referencias a la TPU. Un valor de 100 en el índice corresponde al 1 por ciento de los artículos que mencionan TPU. TPU = incertidumbre en política comercial.

FIGURA 1.7.

ALC se ha ido integrando al mundo

Exportaciones por destino



Fuentes: personal del Banco Mundial con datos de la Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística de las Naciones Unidas, los principales agregados de cuentas nacionales y la base de datos Comtrade.

Nota: la figura se centra en los países de ALC-6 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).

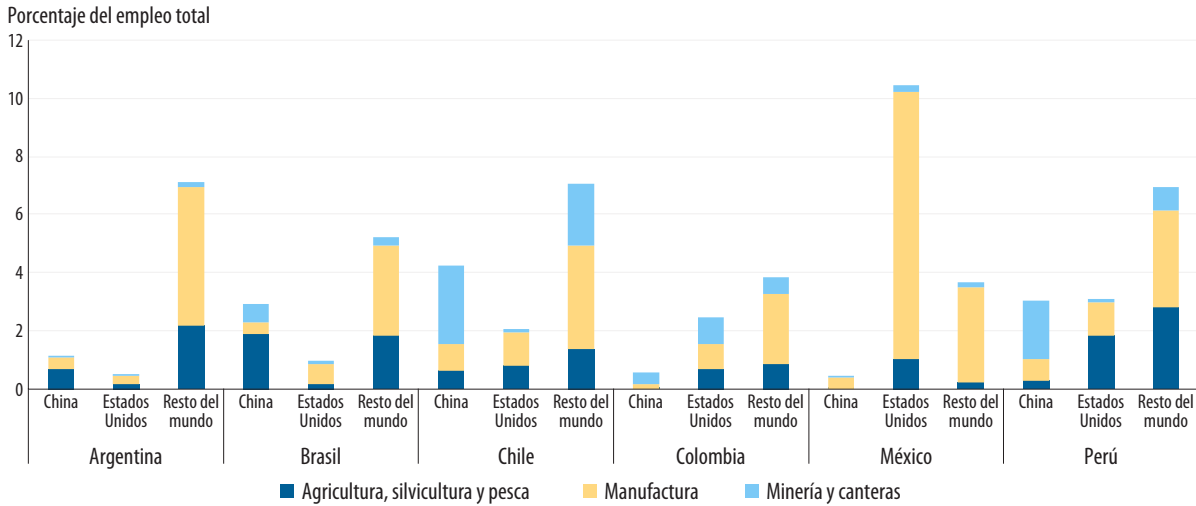
sigue siendo el principal destino de las exportaciones de ALC, los países en ALC han tratado de diversificar sus socios comerciales. Algunos países, como Chile y Perú, han ampliado significativamente sus exportaciones a China (figura 1.7) y, recientemente, México y el Mercosur han impulsado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Si bien esta mayor integración ha creado amplias oportunidades para las empresas y los trabajadores de la región, también significa que una proporción significativa de los trabajadores está empleada en industrias exportadoras y, por ende, está expuesta a posibles vaivenes del comercio internacional (figura 1.8).

La vulnerabilidad ante cambios en el régimen comercial mundial varía según las diferentes canastas de exportaciones a cada país de destino. Si bien ALC exporta principalmente bienes primarios, el 39 por ciento de las exportaciones son manufacturas, en su mayoría de Brasil y México a Estados Unidos. En cambio, las exportaciones a China se centran casi exclusivamente en alimentos no procesados y minería. Por lo tanto, los cambios en las políticas comerciales mundiales se sentirían de manera desigual en los distintos países e industrias (figura 1.9). Incluso los sectores de bienes primarios podrían enfrentar dificultades.

FIGURA 1.8.

Los trabajadores de las industrias exportadoras están expuestos a cambios en el comercio internacional

Empleo doméstico involucrado en exportaciones brutas en los países de ALC-6 en 2019

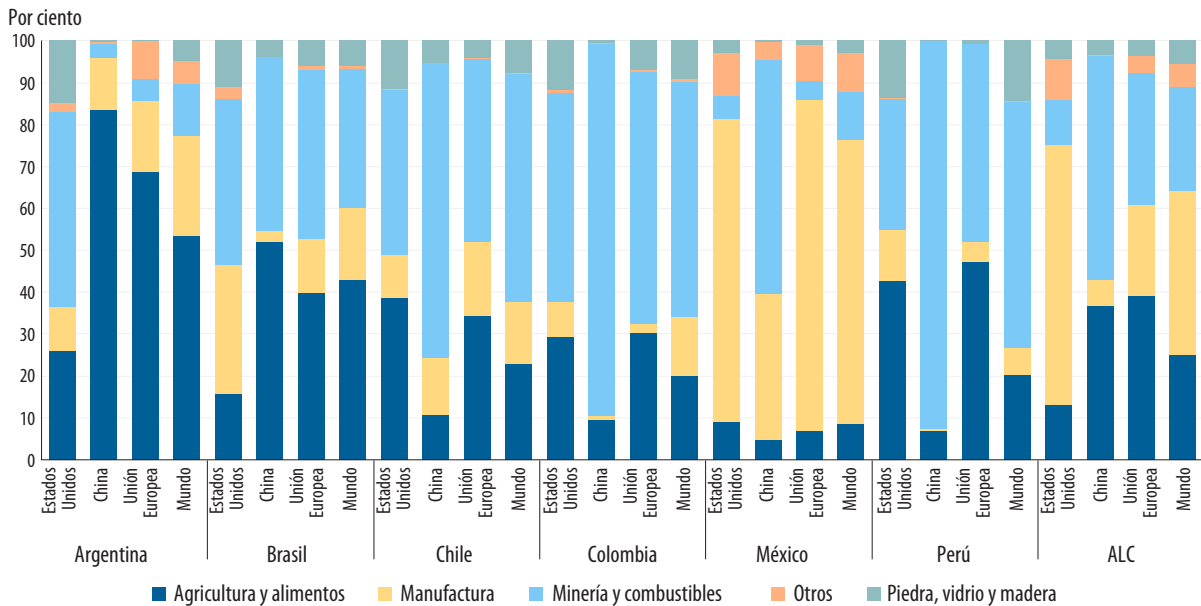


Fuente: personal del Banco Mundial utilizando datos de OCDE, base de datos Trade in Employment (<https://www.oecd.org/en/data/datasets/trade-in-employment.html>).
 Nota: la figura se centra en los países de ALC-6 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).

FIGURA 1.9.

Los patrones de las exportaciones de ALC varían según el socio comercial

Exportaciones por destino y sector en 2023



Fuente: personal del Banco Mundial utilizando la Solución Comercial Integrada Mundial (WITS).
 Nota: la categoría de manufacturas comprende maquinaria y productos eléctricos, caucho y productos químicos, textiles y derivados, transporte. La categoría de minería y combustibles incluye metales, minerales y combustibles. ALC = América Latina y el Caribe.

Es imposible saber dónde se asentará el nuevo régimen arancelario. Sin embargo, el comercio seguirá siendo un motor de crecimiento para ALC. Si bien Estados Unidos continuará siendo un importante mercado de exportación, su participación en las importaciones mundiales de bienes se ha reducido al 13 por ciento, mientras que América Latina y el Caribe se ha diversificado cada vez más hacia un mundo que sigue buscando acuerdos de libre comercio y una

mayor conexión. Tanto el Mercosur como México han firmado acuerdos con la UE, mientras que los presidentes de la región han visitado recientemente India y Japón. El proyecto de nearshoring no está necesariamente moribundo, aunque ciertamente es mucho más incierto. Con los principales competidores asiáticos bajo fuertes aranceles, México y ALC en general parecen más atractivos.

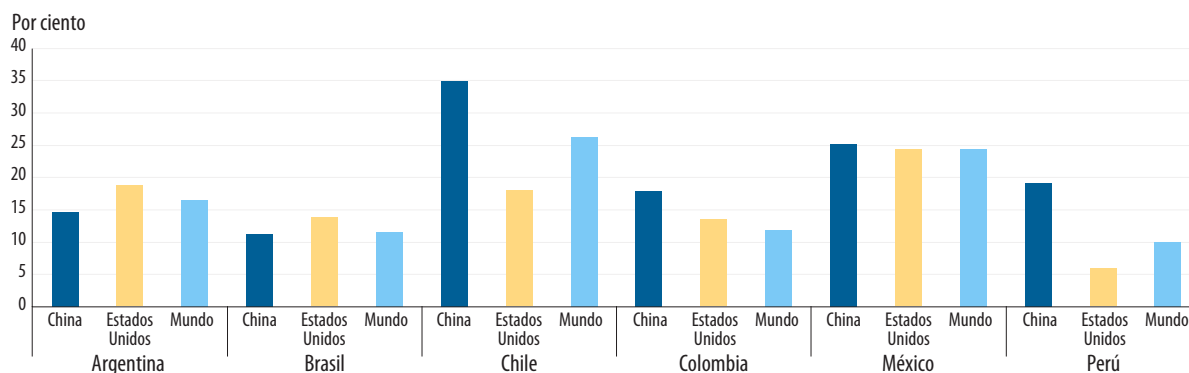
Además, el futuro está cada vez más en los servicios, que han crecido a medida que el comercio de manufacturas se ha desacelerado. Por ejemplo, India y China exportan servicios (de ingeniería) de baja y alta gama y esto será cada vez más factible con los avances en softwares de traducción y comunicación. ALC sigue estando subrepresentada aquí: el 14 por ciento de las exportaciones de ALC se realizan en servicios, en comparación con el 18 por ciento a nivel mundial y, de manera instructiva, el 44 por ciento en India. A un 4,4 por ciento promedio anual, ALC ha estado creciendo ligeramente por encima del promedio mundial en exportaciones de servicios, pero India nuevamente muestra las posibilidades, creciendo a un 13,4 por ciento.

Sin embargo, para aumentar la resiliencia frente a los cambios que se avecinan y aprovechar las nuevas oportunidades será necesario emprender reformas largamente postergadas en materia de educación, infraestructura, regulaciones domésticas y un entorno general que desincentiva la inversión y el comercio incluso antes de los cambios recientes en el panorama mundial. Entre el probable contramovimiento de los tipos de cambio y el hecho de que se ha demostrado que ciertas políticas, como los programas de extensión gerencial, logran aumentos en la productividad de las empresas del 10 por ciento en un año, el nivel básico de aranceles actualmente discutido no tiene por qué ser una barrera insuperable para el acceso. Este crecimiento de la productividad ha resultado difícil de alcanzar hasta ahora y, a pesar de la ventaja comparativa de ALC en la producción de bienes primarios, el sector exportador se ve afectado por la falta de competitividad de la región al igual que el resto de la economía. La productividad laboral incorporada en la canasta de exportación está significativamente rezagada con respecto a la de Estados Unidos (figura 1.10).

FIGURA 1.10.

La productividad de los exportadores en ALC está rezagada respecto de Estados Unidos

Índice de productividad relativa de las exportaciones en 2019 como porcentaje de la productividad de Estados Unidos en las exportaciones brutas



Fuentes: personal del Banco Mundial utilizando datos de OCDE, base de datos Trade in Employment (<https://www.oecd.org/en/data/datasets/trade-in-employment.html>); Trade in Value Added (TIVA) (<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/trade-in-value-added.html>), y The Conference Board (<https://data-central.conference-board.org>).

Nota: el índice de productividad relativa de las exportaciones mide el valor agregado por empleo de las exportaciones brutas para cada país de ALC-6 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), expresado como porcentaje del nivel de Estados Unidos.

Puede ser, como algunos han argumentado, que la globalización haya cambiado de tal manera que ALC no pueda seguir los caminos de los milagros asiáticos. Pero también es cierto que la región no se ha comprometido en la construcción de capital humano, universidades de calidad e institutos de investigación vinculados al sector privado, ni en general ha abrazado el objetivo de llegar a la frontera tecnológica que abarcaban los casos de éxito. Esto será esencial para aprovechar tanto los sectores modernos como los tradicionales, así como los servicios de alta gama. Lo que está claro es que el acceso a las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de las economías de escala requerirán mantener una postura abierta hacia el sistema que eventualmente emerja.

Además de las interrupciones en el comercio internacional, los recientes recortes en la asistencia externa para el desarrollo (AOD) por parte de algunas de las economías más grandes podrían tener consecuencias para la región, no solo porque algunas economías, como Haití, dependen en gran medida de ella, sino también porque desempeña un papel clave para enfrentar los principales desafíos en materia de política pública, como la conservación del Amazonas y la asistencia humanitaria a los migrantes de la República Bolivariana de Venezuela.

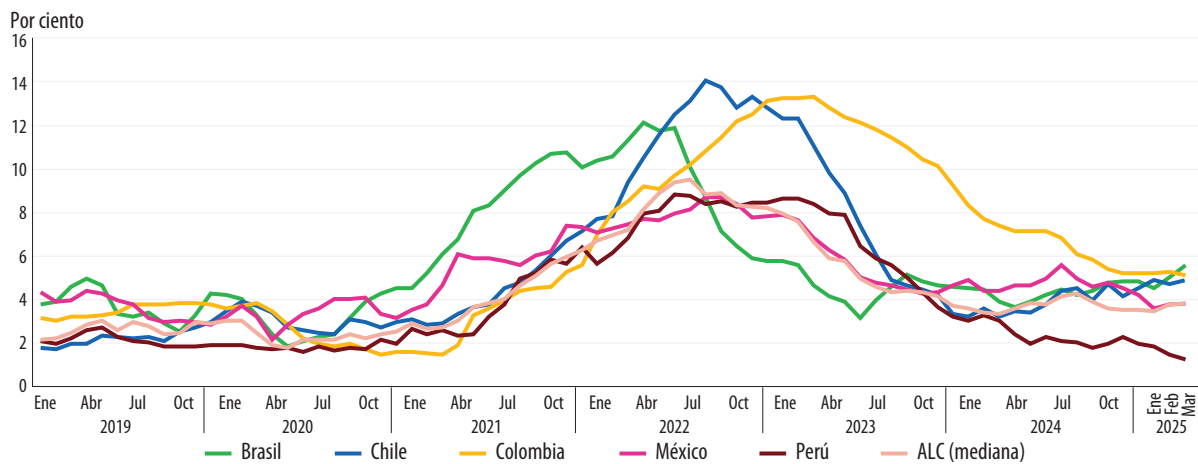
La inflación retrocede lentamente, mientras que la política monetaria se relaja

Tras la respuesta decisiva por parte de las autoridades monetarias y la normalización de las cadenas de suministro mundiales, la inflación retrocedió significativamente en toda la región desde su punto máximo en 2022. Sin embargo, durante 2024, el proceso de desinflación se desaceleró ya que la inflación subyacente se mantuvo alta, en gran parte debido al aumento de los costos laborales que afecta a los precios de los servicios y al alza de los precios internacionales de los alimentos (figura 1.11).

FIGURA 1.11.

La inflación se está desacelerando, pero a un ritmo más lento de lo previsto

a. Inflación general (porcentaje, interanual)



b. Inflación subyacente (porcentaje, interanual)

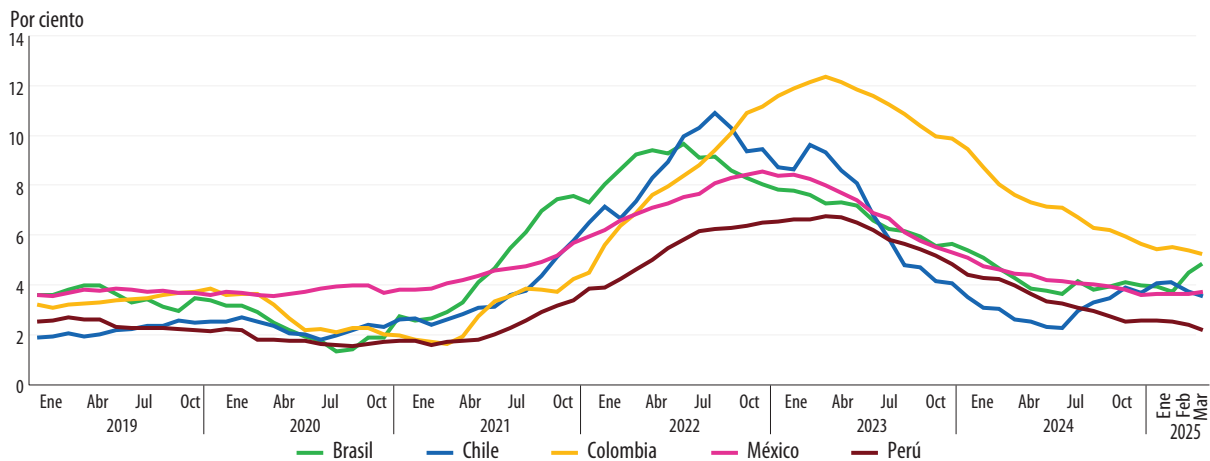
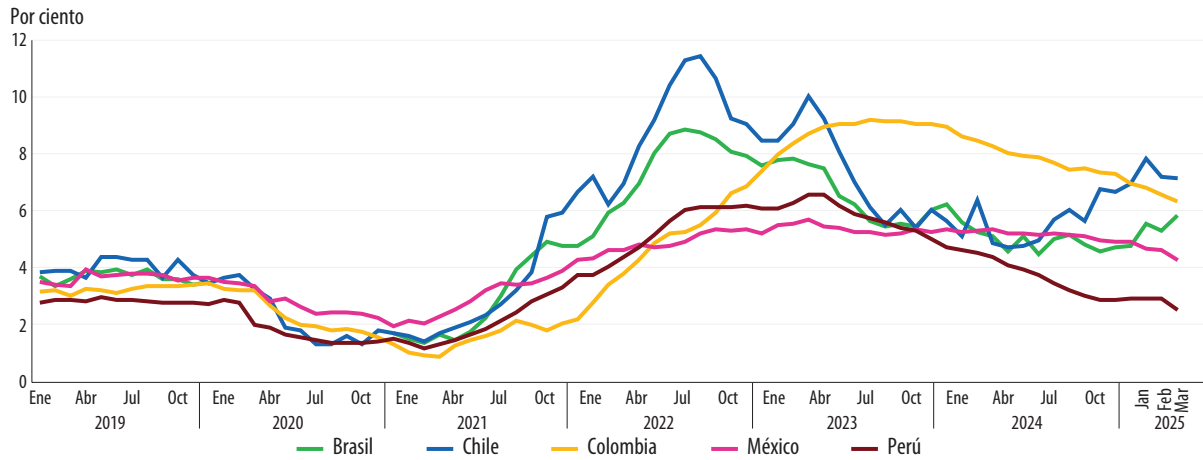


Figura 1.11. La inflación se está desacelerando, pero a un ritmo más lento de lo previsto (continuación)

c. Inflación de servicios (porcentaje, interanual)



Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.

Nota: ALC = América Latina y el Caribe. ALC (mediana) comprende Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Aun así, las expectativas de inflación siguen ancladas dado que los mercados esperan que la inflación caiga dentro de las metas de los bancos centrales para fines de 2026. Sin embargo, para lograr la convergencia hacia la meta se necesitarán mayores esfuerzos, que implicarán una disminución de las tasas de interés más lenta de lo que se había anticipado. El aumento de la inflación en Brasil a mediados de 2024, asociado al aumento de los precios de los alimentos y los costos laborales, condujo a la reversión de las reducciones anteriores en las tasas de interés (figura 1.12). En Chile, la inflación también aumentó durante 2024, debido a una combinación de factores en los costos: la depreciación del peso, el aumento de los salarios reales y de las tarifas eléctricas. Sin embargo, durante 2025, se prevé que la inflación se modere debido a que la demanda interna sigue siendo débil, lo que permitirá al Banco Central renunciar a posibles aumentos de las tasas de interés.

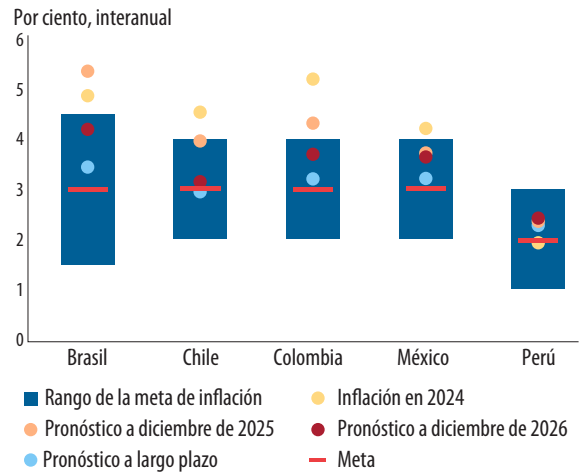
Teniendo en cuenta la rápida disminución inicial de la inflación, los principales bancos centrales de la región comenzaron a normalizar sus tasas de política monetaria de manera más agresiva que la mayoría de las economías avanzadas en 2024, tendencia que, según se prevé, continuará durante 2025 (figura 1.13, panel a). Sin embargo, las expectativas del mercado sugieren que, al menos en el corto y mediano plazo, las tasas de interés reales no alcanzarán los niveles relativamente bajos de la década de 2010 en la mayoría de los países, y se mantendrán 2,4 puntos porcentuales más altas en promedio, lo que refleja tasas neutrales más altas para la región y para las principales economías (figura 1.13, panel b).

Las principales monedas de la región se han depreciado frente al dólar durante 2024 debido a factores externos, como la fortaleza relativa del dólar, y a factores internos, como la disminución de los diferenciales de tasas de interés como consecuencia de la relajación monetaria (figura 1.14, panel b). La reducción más lenta de la política monetaria

FIGURA 1.12.

Las expectativas de inflación siguen ancladas

Pronósticos de inflación y metas de los bancos centrales

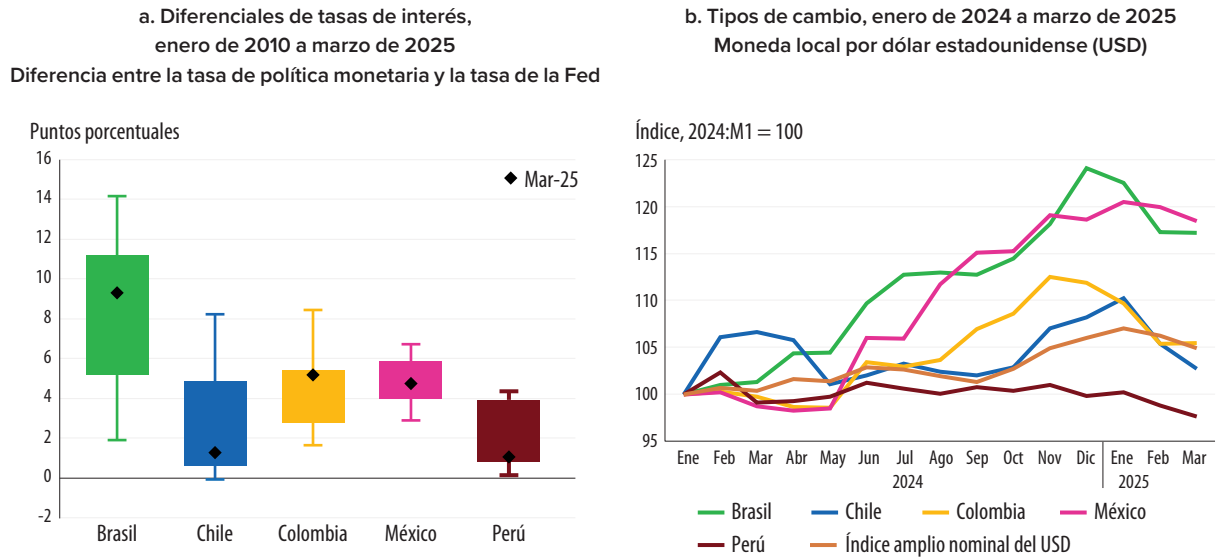


Fuente: Consensus Economics.

Nota: la fecha de la encuesta fue abril de 2025 para los pronósticos de diciembre de 2025 y diciembre de 2026, y abril de 2025 para los pronósticos a largo plazo. Los pronósticos a largo plazo son promedios para un horizonte de 6 a 10 años.

FIGURA 1.14.

Las principales monedas de la región se han depreciado debido a la fortaleza del dólar y a la relajación monetaria



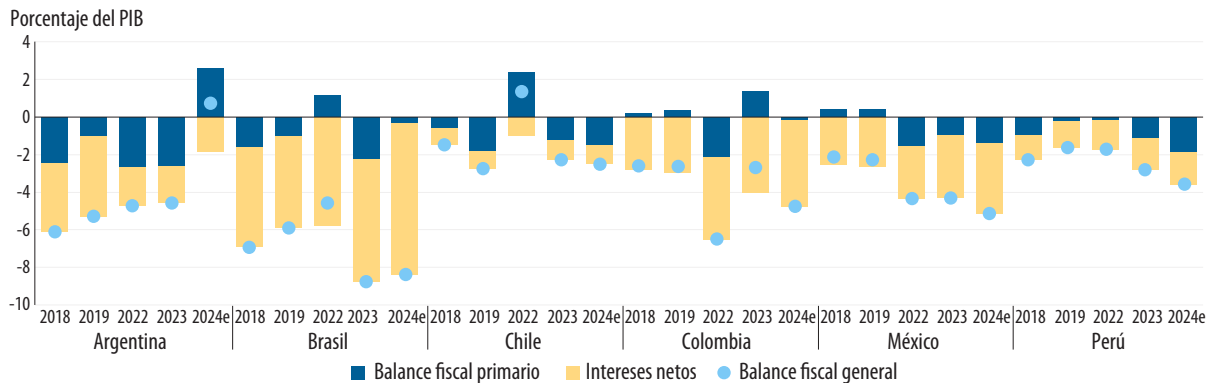
Fuentes: cálculos del personal del Banco Mundial en base a Haver Analytics y datos económicos de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Nota: en el panel a, cada diagrama de caja proporciona un resumen de la distribución de los diferenciales de las tasas de interés para el período 2010-25. El recuadro central representa el rango intercuartílico (RIC), que va desde el primer cuartil (Q1, percentil 25) hasta el tercer cuartil (Q3, percentil 75). Los "bigotes" se extienden hasta los valores mínimo y máximo. En el panel b, el índice amplio nominal del USD mide el valor del dólar estadounidense frente a una canasta de monedas extranjeras ponderada en función del comercio.

Sector fiscal: el déficit fiscal y la deuda siguen siendo elevados

El déficit fiscal sigue siendo persistentemente alto en las principales economías de América Latina. Si bien la mayoría de los países han tomado medidas para abordar el déficit primario, como la eliminación gradual de los estímulos de la era pandémica y las reformas tributarias para aumentar los ingresos fiscales, no han podido equilibrar completamente el presupuesto fiscal, ya que el servicio de la deuda requiere aún mayores recursos (figura 1.15).

FIGURA 1.15.

El déficit fiscal persiste más que nada debido al aumento del pago de intereses

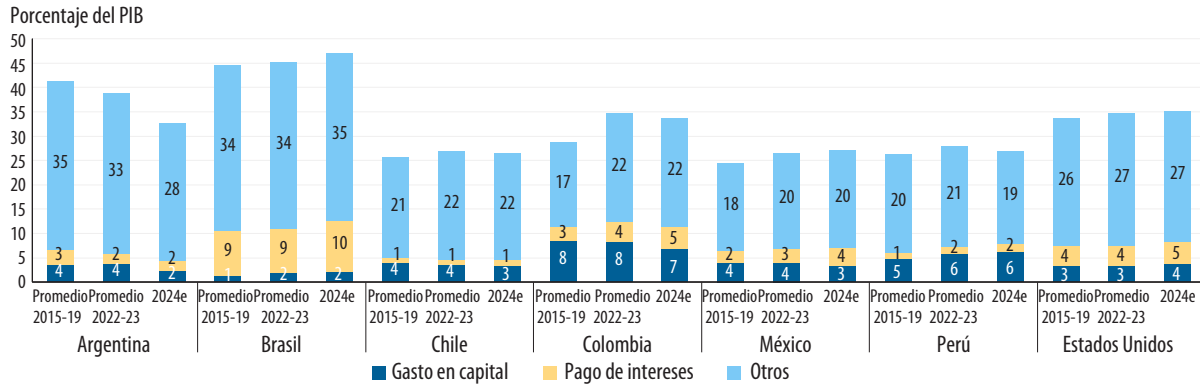


Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial. Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación; PIB = producto interno bruto.

Por lo tanto, si bien es poco probable que se produzca una crisis de deuda similar a las de los años ochenta y noventa en América Latina, la deuda pública relativamente elevada sigue resultando costosa. En la actualidad, el servicio de la deuda representa en promedio el 10,9 por ciento del gasto público en ALC-6, desplazando la inversión en componentes como la infraestructura para satisfacer las demandas de bienes públicos por parte de los ciudadanos y respaldar los pagos de pensiones (figura 1.16). Como se analiza en el informe del Banco Mundial *Public Spending Policies in Latin America and the Caribbean: When Cyclicity Meets Rigidities*,² las rigideces inherentes al gasto fiscal perjudican la capacidad de los países para lidiar con elementos cíclicos como el marcado aumento de las tasas de interés.

FIGURA 1.16.

El servicio de la deuda absorbe gran parte del gasto público, limitando la inversión



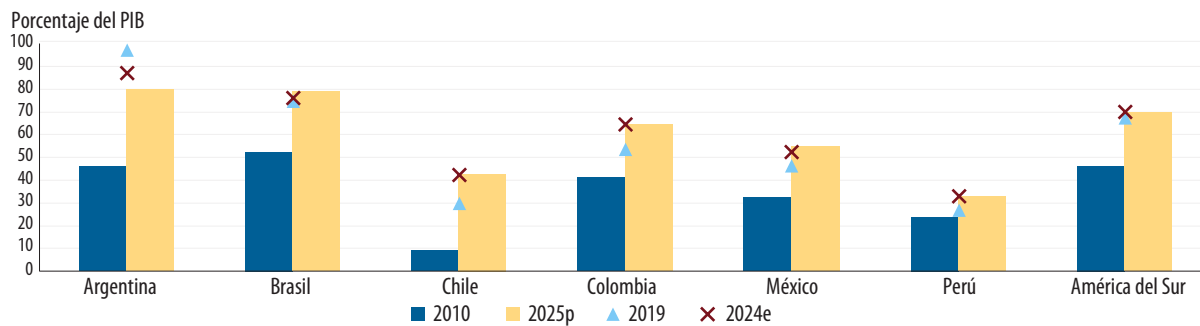
Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.
 Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación; PIB = producto interno bruto.

Si bien el aumento de las tasas de interés contribuye parcialmente a la expansión del servicio de deuda, no menos importante es el crecimiento persistente del stock de deuda pública observado en toda la región durante los últimos 15 años. Tras el repunte experimentado durante la pandemia, la relación deuda-PIB se ha estabilizado gracias a los menores déficits y al fuerte crecimiento del PIB durante la reapertura. Sin embargo, en ausencia de una mayor consolidación fiscal, no se prevé que vuelvan a los niveles registrados antes de la pandemia en la mayoría de los países (figura 1.17). En la edición de octubre de 2022 del LACER, *Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal*, se propone un marco para mejorar las cuentas fiscales aumentando la movilización de ingresos de manera favorable al crecimiento.³

FIGURA 1.17.

La deuda pública está estable en niveles altos

Stock de deuda pública



Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.
 Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación; PIB = producto interno bruto.

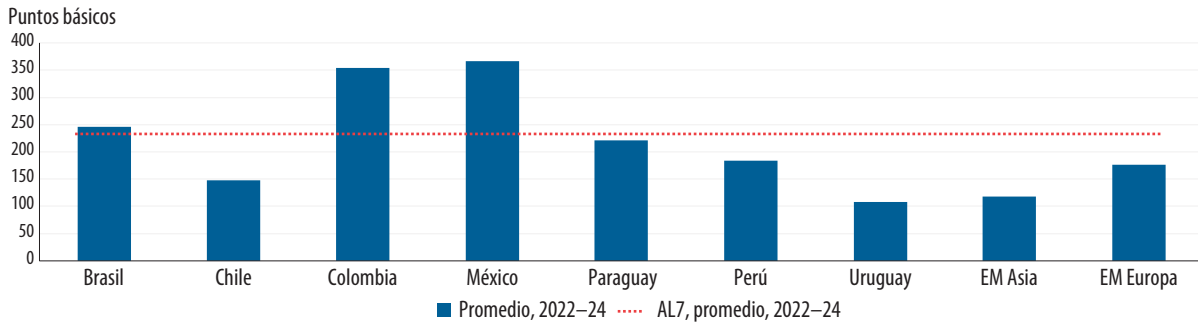
2 Riera-Crichton y Vuletin (2024).
 3 Banco Mundial (2022).

El último aumento de los stocks de deuda se produce en un contexto de tasas de interés relativamente altas para ALC, que históricamente ha enfrentado tasas de interés anormalmente altas sobre la deuda pública (figura 1.18, panel a). El ciclo de endurecimiento de la política monetaria incrementó los costos de endeudamiento para la mayoría de los gobiernos de ALC-5 (figura 1.18, paneles b y c). La normalización de las tasas de interés ayudará a aliviar este costo, pero es poco probable que vuelva a los niveles observados durante la última década. En el caso de Colombia y México, las primas de riesgo soberano también han contribuido a aumentar los costos de endeudamiento.

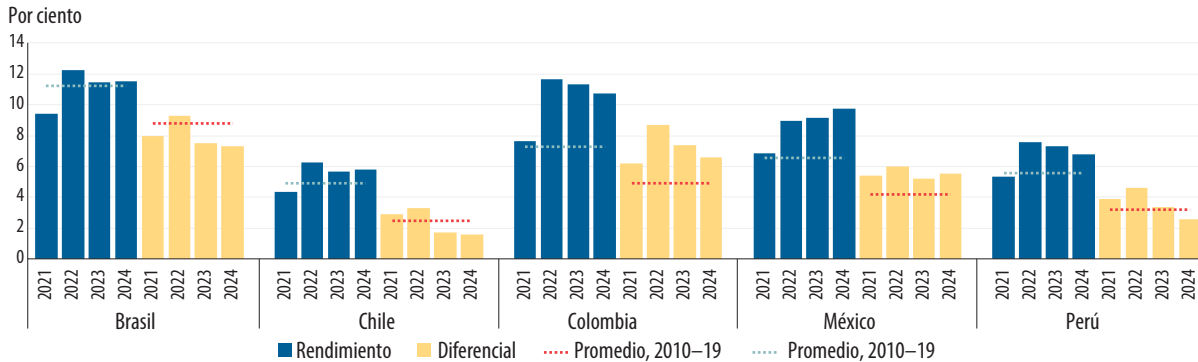
FIGURA 1.18.

Los costos de endeudamiento siguen siendo altos

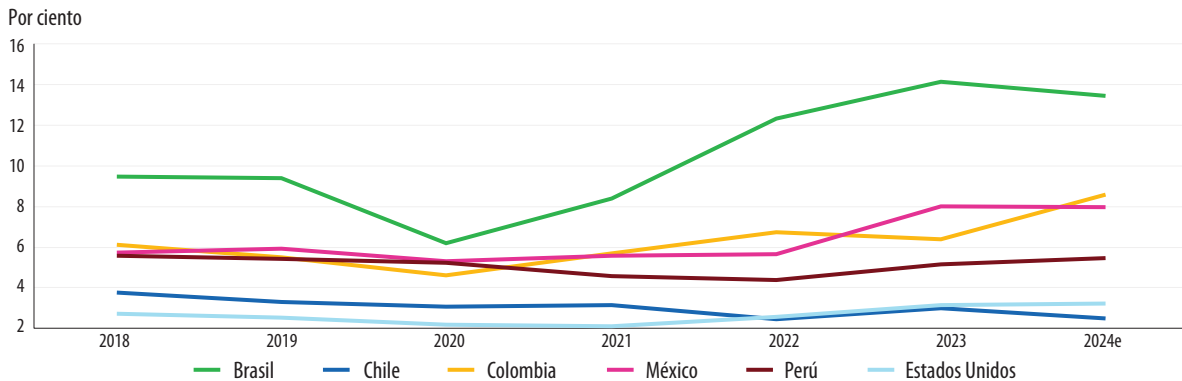
a. EMBI Global Diversified Subindexes, strip spread, regiones



b. Bonos gubernamentales a largo plazo: 10 años, ALC-5



c. Tasas de interés implícitas



Fuentes: para el panel a, cálculos del personal del Banco Mundial en base a J.P. Morgan; para el panel b, cálculos del personal del Banco Mundial en base a Haver Analytics, datos económicos del Banco Central del Perú y la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco de la Reserva Federal de St. Louis (FRED); para el panel c, cálculos del personal del Banco Mundial en base al Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.

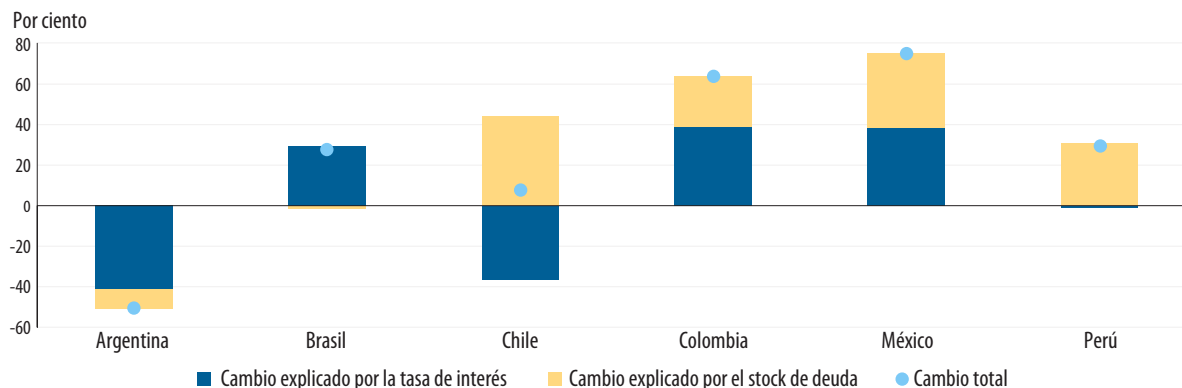
Nota: Para el panel a, el Índice EMBI Global Diversified de J.P. Morgan (EMBIGD) hace un seguimiento de los instrumentos de deuda líquidos, denominados en dólares estadounidenses, de mercados emergentes, a tasa fija y flotante emitidos por entidades soberanas y cuasosoberanas. El spread del EMBI refleja la diferencia entre el rendimiento de estos instrumentos y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento comparable. Los agregados son promedios simples. Los mercados emergentes de Asia (EM Asia) incluyen India, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia; los mercados emergentes de Europa (EM Europa) incluyen Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y Serbia; LA7 incluye Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Para el panel b, el spread que se muestra en la figura representa la diferencia entre el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años de los países de ALC-5 y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. En el panel c, la tasa de interés implícita se mide como el ratio entre pagos de intereses y stock de deuda del período anterior. Convertido a términos reales con el índice de precios al consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Los valores de las tasas de interés implícitas en 2024 se basan en estimaciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación. EMBI = Índice de Bonos de Mercados Emergentes. ALC-5 incluye a Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

La exposición a aumentos de las tasas de interés depende del nivel de endeudamiento de los países. Si bien la mayoría de las economías de ALC-6 ha incrementado los pagos de intereses, en el caso de los países menos endeudados, Chile y Perú, este aumento es el resultado de incrementos en el stock de deuda. En los demás países, el aumento de las tasas de interés desempeñó un papel importante (figura 1.19).

FIGURA 1.19.

Los países más endeudados son más sensibles a las subas de las tasas de interés

Variación en los pagos de intereses, 2018 contra 2024e



Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.

Nota: Convertido a términos reales con el índice de precios al consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación.

Foco en el Caribe

Las economías del Caribe tuvieron un desempeño superior al de los países latinoamericanos durante 2024, aunque con marcadas diferencias entre los países dependientes del turismo y los exportadores de materias primas (tabla 1.1). Los países que dependen del turismo han recuperado los niveles del PIB anteriores a la pandemia, impulsados por el repunte del sector turístico. Algunos países ya han alcanzado los niveles de llegada de turistas anteriores a la pandemia, lo que sugiere una moderación en las tasas de crecimiento del sector de servicios, mientras que otros aún tienen margen de mejora. Los esfuerzos adicionales para mejorar la conectividad y la capacidad hotelera contribuirían a mantener el impulso (figura 1.20, panel a).

De los países exportadores de materias primas, Trinidad y Tobago y Surinam se vieron gravemente afectados por la fuerte caída de los precios internacionales de dichos productos durante la pandemia, lo que provocó una disminución proporcional del producto. Dado que los precios se han recuperado desde 2021, incluso superando los niveles anteriores a la pandemia, el crecimiento del PIB se ha acelerado, pero aún no ha alcanzado el nivel de 2019 (figura 1.20, panel b). En Guyana, la explotación de yacimientos petrolíferos recientemente descubiertos ha dado lugar a una expansión impresionante y sostenida del PIB desde 2020.

TABLA 1.1.

Las perspectivas de crecimiento en el Caribe superan el promedio regional, pero varían

Estimaciones y proyecciones del crecimiento del PIB real

País	2024e	2025p
Exportadores de materias primas		
Trinidad y Tobago	1.7	2.8
Suriname	2.8	3.1
Guyana	43.4	10.0
Turismo-dependientes		
San Vicente y las Granadinas	4.5	4.9
Santa Lucía	3.7	2.8
Jamaica	-0.7	1.7
Granada	3.7	3.8
Dominica	4.6	4.3
Belice	8.2	2.8
Barbados	3.8	2.8

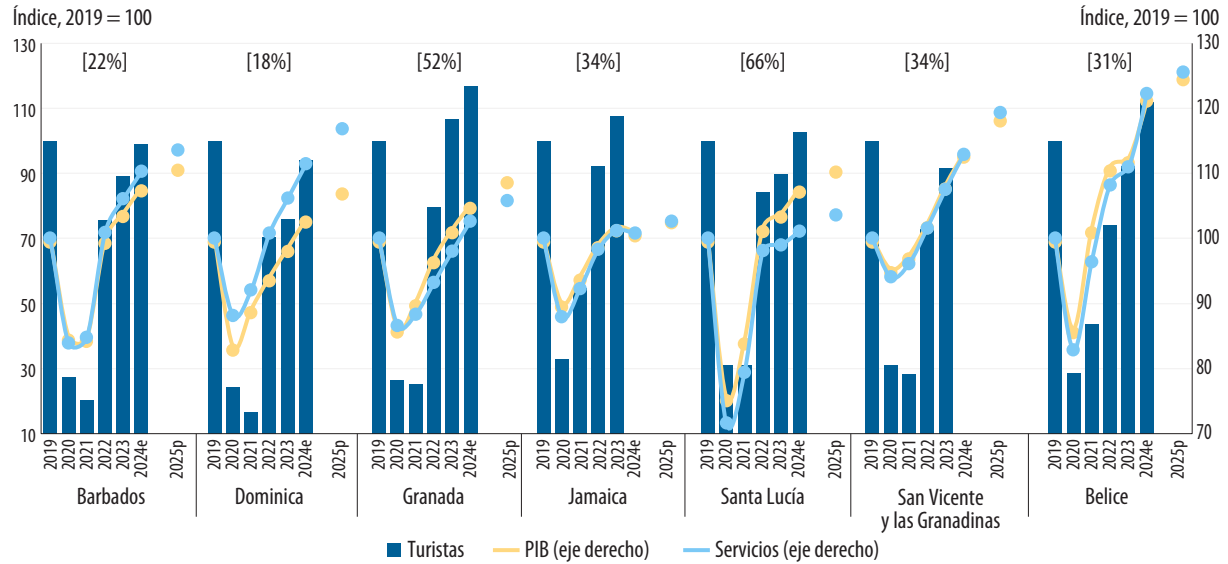
Fuente: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.

Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). e = estimación. p = pronóstico.

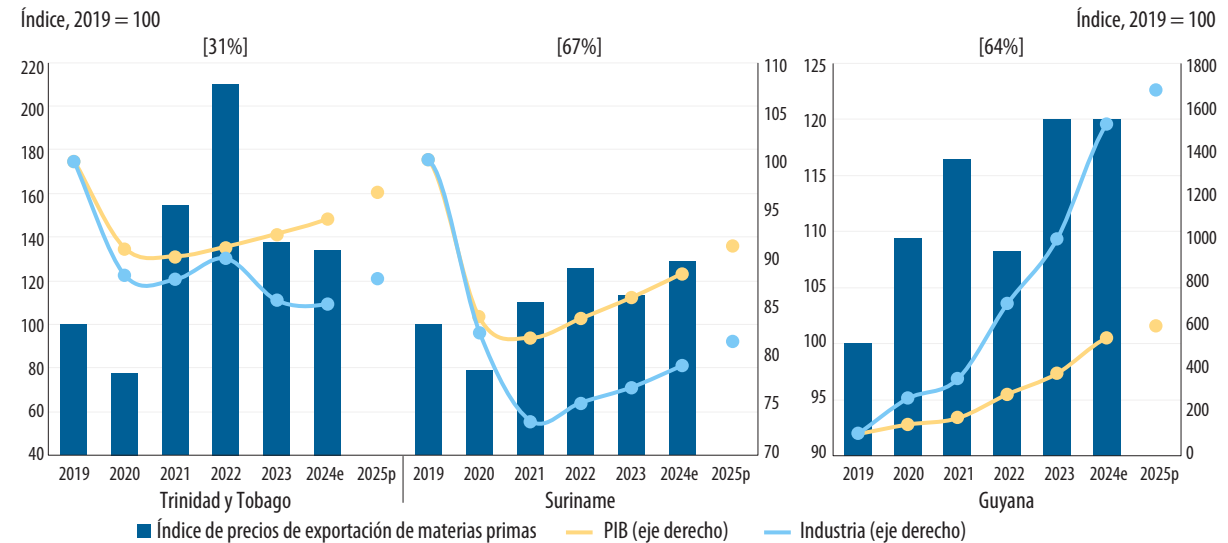
FIGURA 1.20.

Si bien los países dependientes del turismo han recuperado los niveles pre-pandemia, los exportadores de materias primas no lo han hecho

a. Países dependientes del turismo



b. Exportadores de materias primas



Fuentes: para el panel a, Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial; Tourism Analytics; Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC); y cálculos del personal del Banco Mundial; para el panel b, perspectivas macroeconómicas del Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial; UN Comtrade; y Fondo Monetario Internacional (FMI).

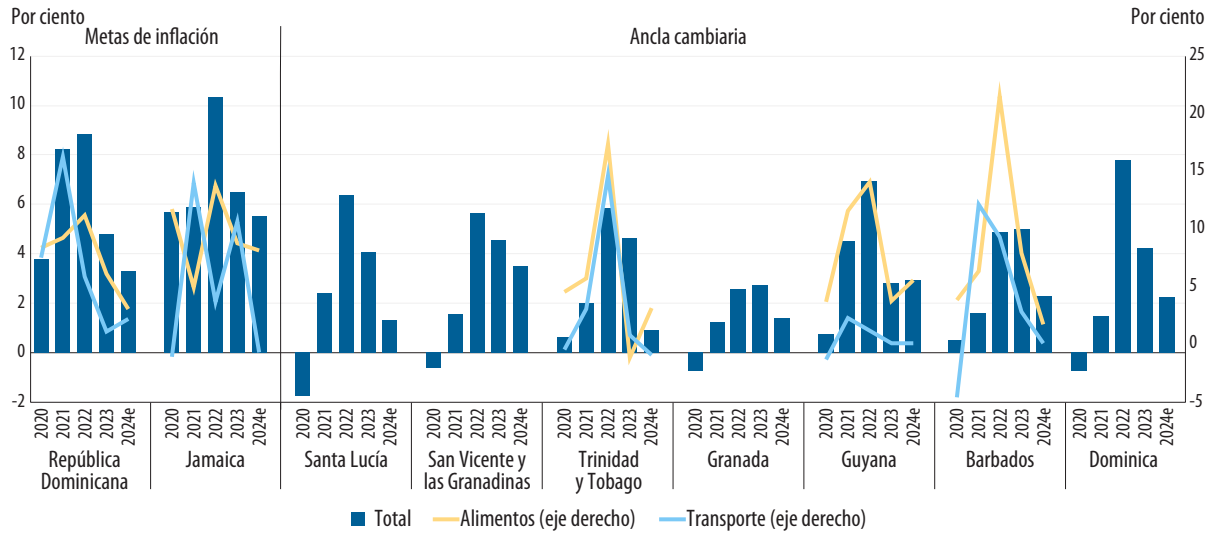
Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025). En el panel a, la relación turismo-PIB (2023) se muestra entre corchetes; en el panel b, la relación exportaciones de bienes-PIB (2023) se muestra entre corchetes. e = estimación; p = pronóstico; PIB = producto interno bruto.

Al igual que el resto de América Latina, los países del Caribe experimentaron un importante aumento de la inflación durante 2022, asociado a la dinámica de los alimentos y los combustibles en los mercados internacionales. Sin embargo, debido a que la mayor parte del Caribe sigue un régimen monetario de anclaje cambiario, el pico de inflación fue menos severo que en el resto de América Latina. Jamaica y República Dominicana, dos países con política monetaria de metas de inflación, experimentaron el mayor aumento, con considerable persistencia. La normalización de los precios desde 2023 ha contribuido a reducir la inflación en toda la región (figura 1.21).

FIGURA 1.21.

El alza de la inflación está retrocediendo

Inflación general anual



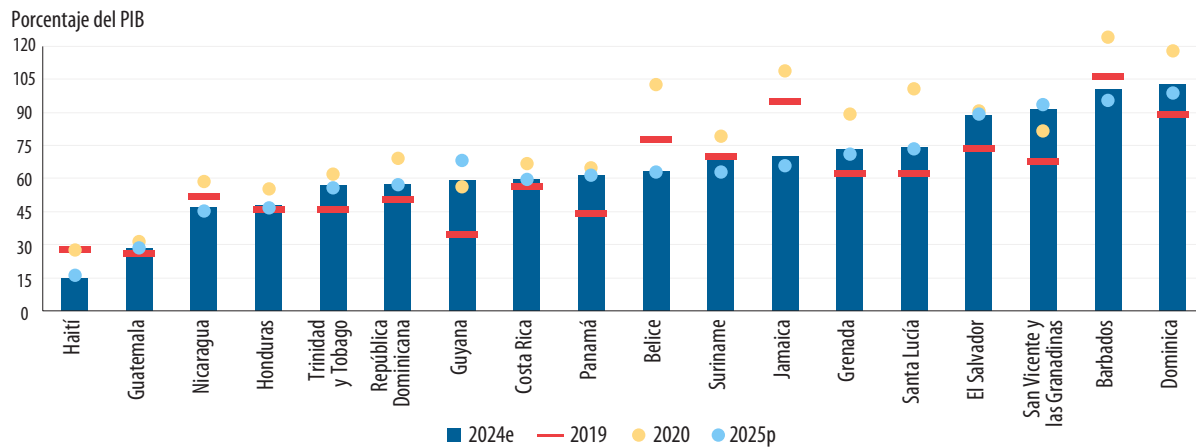
Fuentes: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial, la Oficina de Estadísticas de Guyana, el Servicio de Estadísticas de Barbados, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cálculos del personal del Banco Mundial.
 Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025), e = estimación.

La trayectoria de la deuda pública varía considerablemente entre las regiones del Caribe y América Central. El crecimiento económico y la disciplina fiscal han contribuido a que algunos países hayan logrado avances significativos en la reducción de la relación deuda-PIB, alcanzando niveles significativamente inferiores a los existentes antes de la pandemia. Como se señaló en la edición de octubre de 2023 del LACER,⁴ el uso por parte de Jamaica del Comité de Supervisión del Programa Económico (EPOC) para garantizar la transparencia y crear consenso social en torno a la disciplina fiscal sirve de modelo para la región de ALC. Del mismo modo, Barbados y Belice, que han tenido problemas con una elevada deuda durante la última década, han emprendido un ambicioso proceso de consolidación fiscal y han logrado reducir la relación deuda-PIB. Por el contrario, varios países caribeños altamente endeudados aún deben adoptar medidas para conducir la dinámica de la deuda pública a senderos más sostenibles (figura 1.22).

FIGURA 1.22.

La trayectoria de la deuda pública varía en las distintas regiones del Caribe y América Central

Stock de deuda pública



Fuentes: Macro-Poverty Outlook (Spring Meetings 2025), Banco Mundial.
 Nota: los valores se basan en proyecciones (al 10 de abril de 2025), e = estimación; p = pronóstico; PIB = producto interno bruto.

4 Banco Mundial (2023).

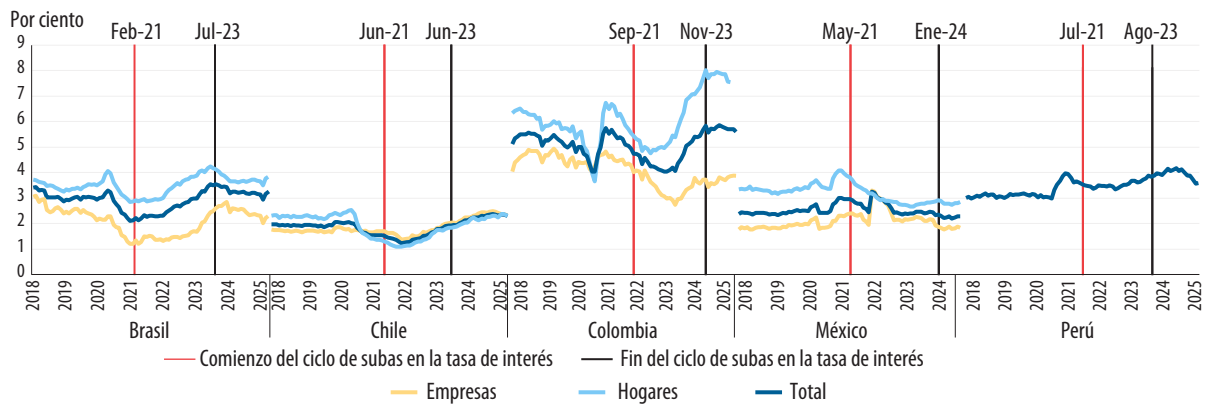
Sector financiero: los préstamos vencidos se moderan, mientras que el crecimiento del crédito difiere entre las distintas subregiones

El proceso de endurecimiento monetario que comenzó en 2022 ha aumentado los costos de los préstamos para los hogares y las empresas de toda la región, lo que ha provocado un aumento moderado de los préstamos vencidos. A medida que los bancos centrales relajen la política monetaria, se prevé que los costos de endeudamiento disminuirán, lo que conducirá a una moderación de los préstamos vencidos, una tendencia que ya se observa en Brasil, Colombia y México. Sin embargo, las reducciones más lentas de las tasas de interés en las economías avanzadas limitarán la trayectoria descendente de las tasas nacionales en ALC. Asimismo, en Chile, a pesar de la disminución de las tasas de interés, los préstamos vencidos han aumentado constantemente desde 2022, aunque habiendo partido de un nivel bajo.

FIGURA 1.23.

A pesar de la moderación de los préstamos vencidos, sigue siendo necesario estar atentos

Proporción de préstamos vencidos como porcentaje del total de préstamos brutos, ALC-5



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en estadísticas nacionales.

Nota: la deuda de los hogares está compuesta por hipotecas y préstamos al consumo. Los préstamos vencidos son préstamos en mora en los pagos contractuales, definidos como la tasa de mora de más de 90 días en el caso de Brasil, Chile, México y Perú, y de 30 días en el caso de Colombia.

El crecimiento del crédito sigue siendo divergente entre América del Sur y América Central y el Caribe. La mayoría de los países sudamericanos ha mostrado un crecimiento débil del crédito, ya que no han podido alcanzar la tendencia previa a la pandemia (figura 1.24, panel a). Una excepción digna de mencionar es Paraguay, donde el crecimiento del crédito se ha acelerado recientemente a más del 9 por ciento anual. Por el contrario, América Central y el Caribe han mostrado un crecimiento significativamente más rápido, en consonancia con su acelerado crecimiento económico (figura 1.24, panel b).

FIGURA 1.24.

Las diferencias en el crecimiento del crédito entre las economías de ALC

Crecimiento real del crédito (promedio móvil anual)

a. América del Sur y México

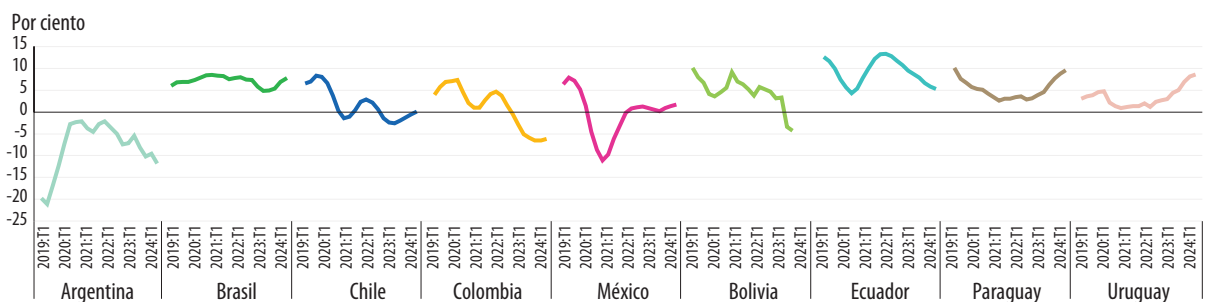
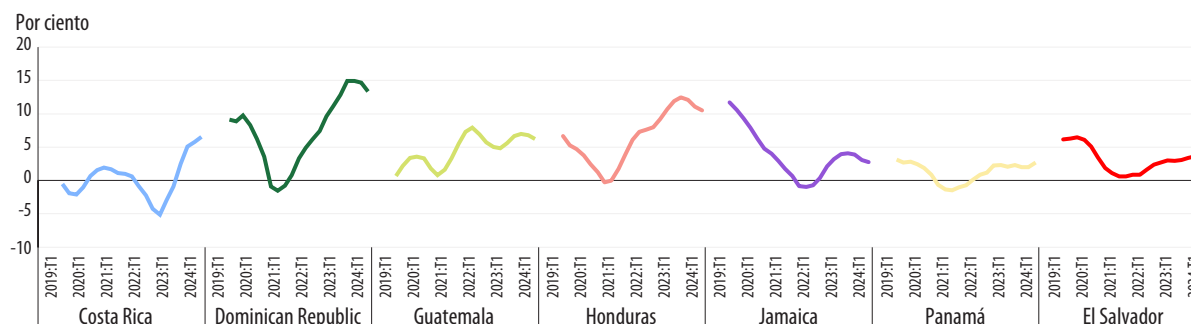


Figura 1.24. Las diferencias en el crecimiento del crédito entre las economías de ALC (continuación)

Crecimiento real del crédito (promedio móvil anual)

b. América Central y el Caribe



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en Haver Analytics.

Mercados de trabajo y condiciones sociales: Tendencias recientes y perspectivas futuras

El crecimiento económico y la reducción de la pobreza se han desacelerado

En las regiones emergentes, los avances sociales en variables clave, como la pobreza monetaria, han seguido de cerca el crecimiento de sus economías. En ALC, la tasa de pobreza disminuyó 17,4 puntos porcentuales durante la “década dorada” de 2003-13, caracterizada por altos precios de las materias primas y sólido crecimiento del PIB. Sin embargo, a medida que el crecimiento económico se desaceleró, la reducción de la pobreza también se moderó, con una disminución de 7,4 puntos porcentuales entre 2013 y 2024 (figura 1.25).

Por el contrario, las regiones con un crecimiento más sostenido del PIB y de la productividad laboral, como Asia oriental y el Pacífico, redujeron la pobreza de manera más drástica en ambos períodos (figura 1.26). La región de Asia oriental y el Pacífico, liderada por el sólido desempeño de China, alcanzó la tasa de pobreza de ALC.

Principales impulsores de la reducción de la pobreza

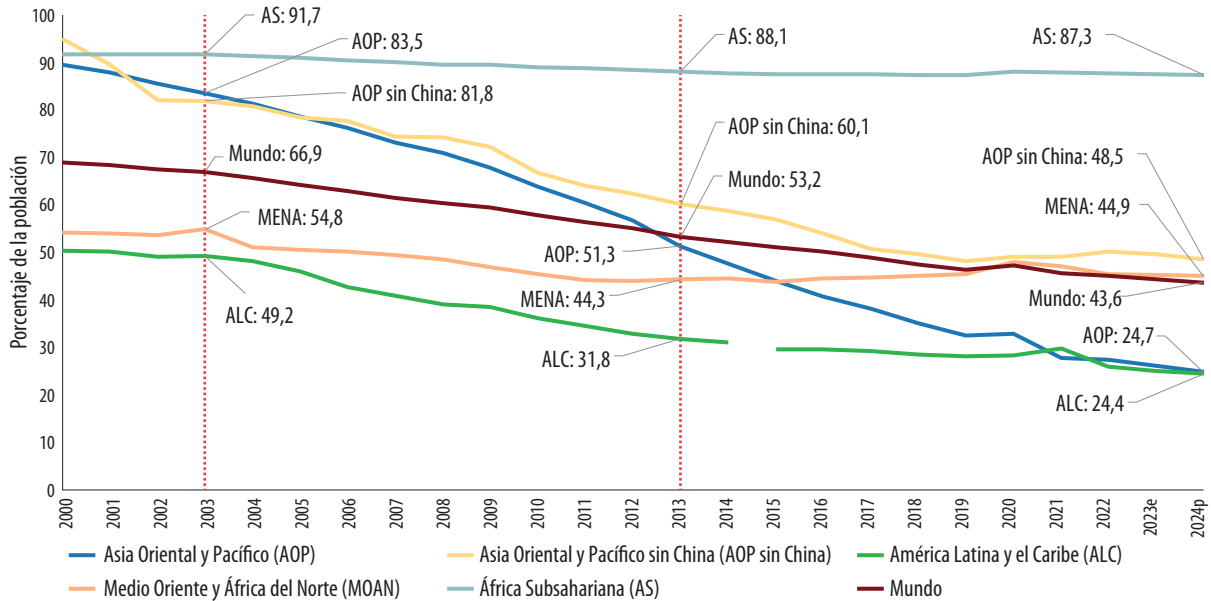
ALC presenta tendencias divergentes en cuanto a la reducción de la pobreza (figura 1.27). Si bien la mayoría de los países redujeron la pobreza a un ritmo más lento durante el período 2018-23 que durante el período 2013-18, en Brasil, Colombia y México la reducción de la pobreza se aceleró, en gran parte como resultado de la mejora de los mercados laborales.

La dinámica de los mercados laborales y las transferencias públicas explican la mayor parte de la reducción de la pobreza en ALC (más del 65 por ciento) durante este período. El desempeño de los ingresos reales —determinado, en particular, por la capacidad de los ingresos laborales nominales para seguir el ritmo de la inflación— fue el factor más determinante, ya que superó el impacto de los niveles de empleo. Las transferencias públicas también desempeñaron un papel fundamental, tanto para aumentar los avances (como sucedió en Brasil, a través del programa Bolsa Família) como para amortiguar los retrocesos en la reducción de la pobreza en ciertos países. A medida que las transferencias públicas de la era de la pandemia regresen, aunque de manera incompleta, a los niveles anteriores a 2020 (figura 1.28) y los gobiernos aborden las inquietudes fiscales, se prevé que en los próximos años la reducción de la pobreza dependerá aún menos de este canal. Por lo tanto, de cara al futuro, la evolución de los mercados laborales será cada vez más decisiva para la lucha contra la pobreza.

FIGURA 1.25.

El ritmo de reducción de la pobreza sigue al crecimiento económico en todas las regiones emergentes

Tasas de pobreza por región del mundo, 2000-24

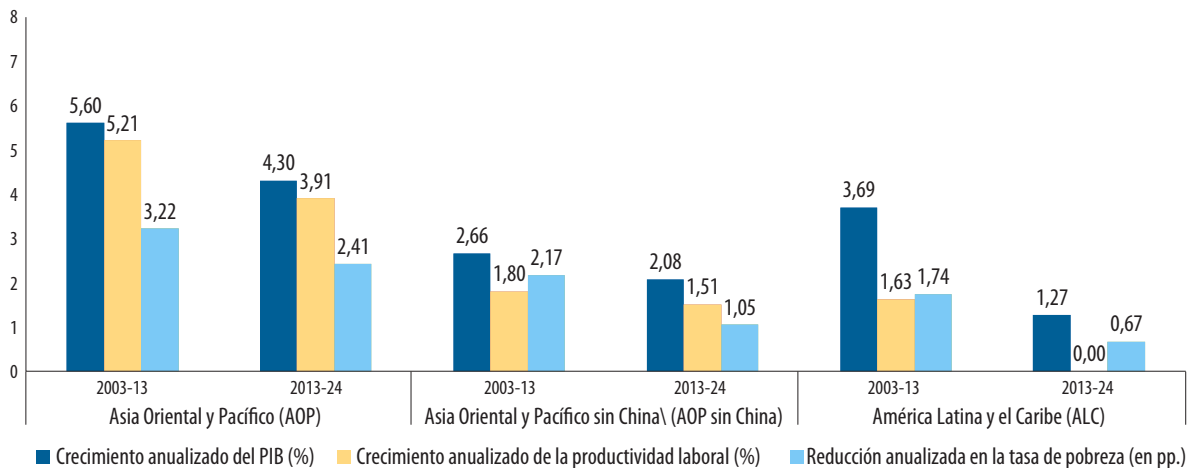


Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en "Regional Poverty and Inequality Update, Latin America and the Caribbean, October 2024" (Práctica Global de Pobreza y Equidad del Grupo Banco Mundial). Los datos para la región de ALC se extrajeron de la base de datos del Laboratorio de Equidad para ALC del Grupo Banco Mundial, mientras que los datos para otras regiones se obtuvieron de la Plataforma de Pobreza y Desigualdad (PiP) del Grupo Banco Mundial. Los datos sobre China se obtuvieron del informe Macro Poverty Outlook (Fall 2024) del Grupo Banco Mundial (última actualización: 10 de abril de 2025).
 Nota: en el gráfico se utiliza una línea de pobreza para los países de ingreso medio alto de USD 6,85 por día en términos de PPA de 2017. El agregado regional de ALC se basa en 18 países de la región respecto de los cuales había microdatos disponibles a nivel nacional. En los casos en que no había datos disponibles, los valores se estimaron utilizando una combinación de métodos, incluidas microsimulaciones, y luego se agruparon para crear estimaciones regionales. Debido a importantes revisiones metodológicas realizadas en la encuesta oficial de hogares de México de 2016, que dieron lugar a una discontinuidad en las series de pobreza, a partir de 2015 se interrumpió la serie de ALC-18. En el caso de otras regiones, los valores de 2023 y 2024 se estimaron mediante el modelo de previsión inmediata implementado por PiP. La estimación para Asia oriental y el Pacífico (sin incluir a China) se deriva restando los datos de China sobre la población pobre y la población total de los agregados de Asia oriental y el Pacífico publicados por PiP. e = estimación; p = pronóstico; PPA = paridad del poder adquisitivo.

FIGURA 1.26.

La reducción de la pobreza en ALC se desaceleró en la última década y fue superada por regiones con un crecimiento más sólido

Crecimiento económico, aumento de la productividad laboral y reducción de la pobreza, de 2000 a 2024

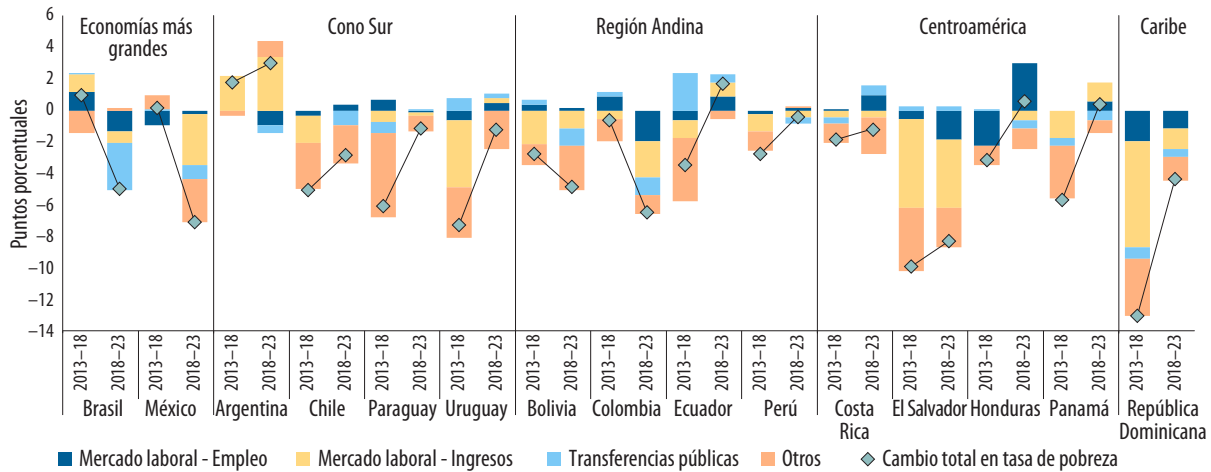


Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en datos de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS-Banco Mundial), Macro Poverty Outlook, Plataforma de Pobreza y Desigualdad (PiP) y World Development Indicators (WDI).
 Nota: el PIB se mide en términos reales. La productividad laboral es el PIB (en dólares internacionales [PPA] constantes de 2021) por persona empleada. En el gráfico se utiliza una línea de pobreza para los países de ingreso medio alto de USD 6,85 por día en términos de PPA de 2017. pp = puntos porcentuales; PPA = paridad del poder adquisitivo.

FIGURA 1.27.

Las tendencias de reducción de la pobreza de ALC mejoraron en Brasil y México, mientras que la mayoría de los demás países experimentaron retrocesos en el período 2018-23

Contribución de las fuentes de ingresos de los hogares a los cambios en la tasa de pobreza



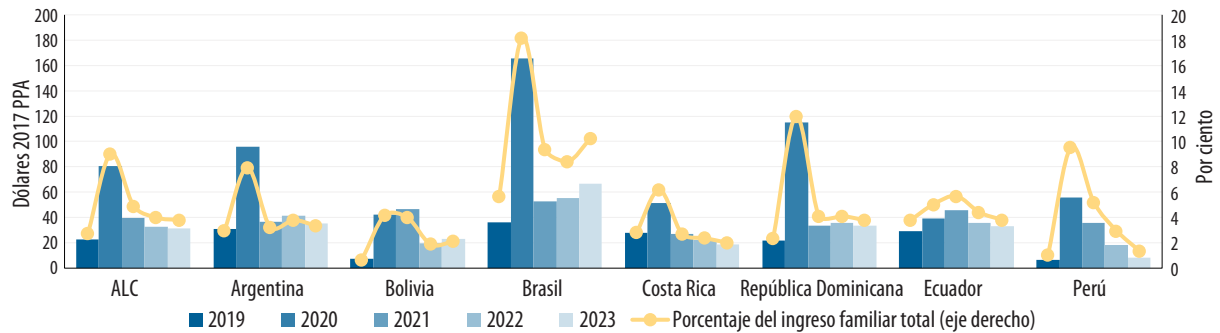
Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial basados en la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS-Banco Mundial) (última actualización: 24 de marzo de 2025).

Nota: en el gráfico se utiliza una línea de pobreza para los países de ingreso medio alto de USD 6,85 por día en términos de paridad del poder adquisitivo (PPA) de 2017. La categoría «Otros» incluye remesas, jubilaciones y pensiones, datos demográficos (proporción de personas de entre 15 y 64 años) y otros ingresos no laborales.

FIGURA 1.28.

En su mayoría, las transferencias públicas han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia en un contexto de espacio fiscal limitado

Monto promedio de las transferencias públicas por hogar y proporción promedio de las transferencias públicas en el ingreso total de las familias.



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en datos de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS-Banco Mundial).

Nota: las barras de ALC presentan un promedio simple/no ponderado de siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominicana. ALC = América Latina y el Caribe; PPA = paridad del poder adquisitivo.

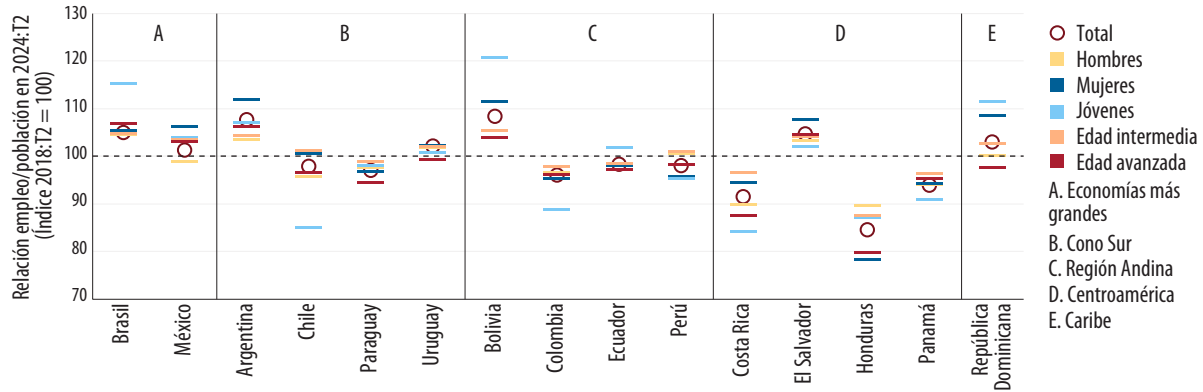
Tendencias del empleo y de los ingresos laborales

Para mediados de 2024, las tasas de empleo han regresado en gran medida a los niveles anteriores a la pandemia, con algunas excepciones entre grupos específicos (figura 1.29). Además, las tres principales economías de la región (Brasil, México y Argentina) ya mostraban tasas de desempleo históricamente bajas a mediados de 2024 (figura 1.30). Esto hace poco probable que se logren avances sociales sustanciales, al menos en el corto plazo, mediante el aumento del empleo. En consecuencia, las políticas sociales deberían centrarse en la calidad del empleo y no en su cantidad.

FIGURA 1.29.

A mediados de 2024, las tasas de empleo volvieron en su mayoría a los niveles anteriores a la pandemia, con algunas excepciones

Relación empleo/población



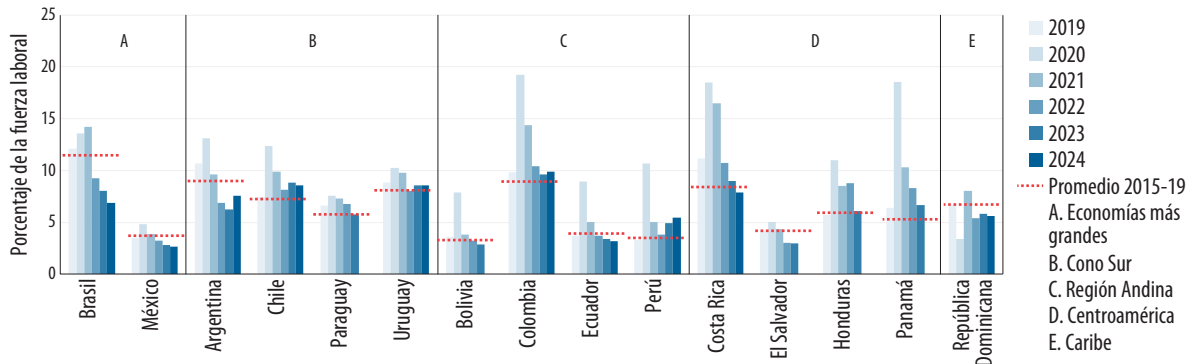
Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial utilizando la base de datos de estimaciones modeladas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ILOSTAT [base de datos] (<https://ilostat.ilo.org/data/>).

Nota: la relación empleo/población es el total de empleos dividido por la población en edad de trabajar. Debido a la disponibilidad de datos, para Bolivia, los períodos comparados son 2023:T4 y 2018:T4; en el caso de El Salvador, Honduras y Panamá, son 2023 y 2018.

FIGURA 1.30.

Las tres economías más grandes de la región (Brasil, México y Argentina) ya operaban con tasas de desempleo históricamente bajas a mediados de 2024

Tasa de desempleo, de 2019 a 2024



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial utilizando la base de datos de estimaciones modeladas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ILOSTAT [base de datos] (<https://ilostat.ilo.org/data/>). Los datos del diagrama corresponden principalmente al segundo trimestre de cada año. Sin embargo, en el caso de Bolivia, los datos corresponden al cuarto trimestre. En el caso de El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay, los datos se informan anualmente.

Nota: la tasa de desempleo es el desempleo total dividido por la población activa.

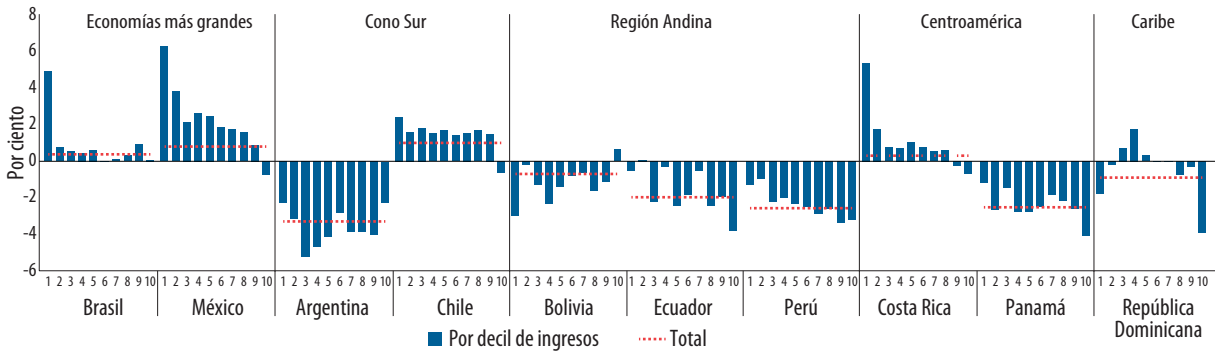
El ingreso laboral presenta un panorama heterogéneo. Hasta 2023, el ingreso laboral individual promedio, en términos reales, se encontraba en su mayoría estancado o disminuyendo en toda la región (véanse las líneas de puntos en la figura 1.31). Esta tendencia fue particularmente evidente entre la clase media en varios países, donde los ingresos laborales tuvieron dificultades para seguir el ritmo de la inflación. Sin embargo, en Brasil y México, el mejor desempeño en los deciles de ingresos más bajos permitió a estos países reducir la pobreza de todos modos. Además, la relativa estrechez de los mercados laborales después de la pandemia ha acelerado el ritmo de crecimiento del salario real en la mayoría de los países, sobre todo en México, Colombia y Brasil.

Uno de los principales canales a través de los cuales se pueden extender los avances en materia de pobreza de la década anterior es aumentar la disponibilidad de empleos en empresas de mayor productividad y mejor remunerados. Sin embargo, los puestos de trabajo disponibles en ALC se han estancado en gran medida desde 2018 en dimensiones como el tamaño de los empleadores y la informalidad (figuras 1.32 y 1.33), lo que sugiere que, de conformidad con el

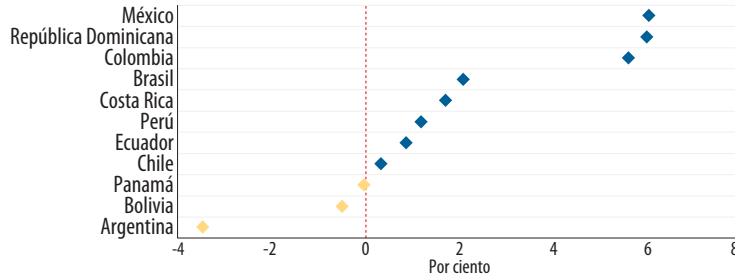
FIGURA 1.31.

El ingreso laboral se estancó en la mayoría de los países, con aumentos en los deciles de ingresos más bajos en Brasil y México

a. Crecimiento anualizado del ingreso laboral individual, en términos reales, por decil, 2018-23



b. Crecimiento anualizado del salario real, 2021-23



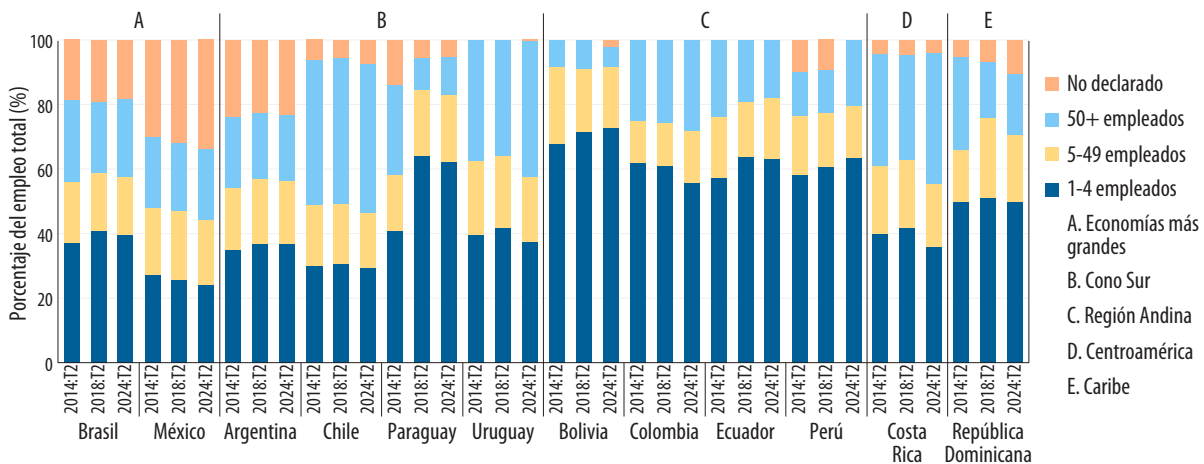
Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en datos de la Base de Datos Socioeconómicos para América Latina y el Caribe (CEDLAS-Banco Mundial).
 Nota: en el caso de Argentina, los datos abarcan únicamente la cobertura urbana. En el panel a, en el caso de Chile, se utiliza el valor de 2017 para 2019 y el de 2022 para 2023. En el caso de México, se utiliza el valor de 2018 para 2019 y el de 2022 para 2023. En el panel b, para Chile y México, se utiliza el valor de 2020 para 2021 y el de 2022 para 2023.

bajo crecimiento de la productividad, los empleos no ofrecen mejores oportunidades hoy que en 2018. Las tendencias mundiales recientes en materia de inteligencia artificial y transición verde ofrecen oportunidades para crear empleos de alta productividad y bien remunerados (recuadros B1.1 y B1.2).

FIGURA 1.32.

En la mayoría de los países de ALC, el empleo se concentra en gran medida en pequeñas empresas de 1 a 4 trabajadores

Composición del empleo por tamaño de la empresa

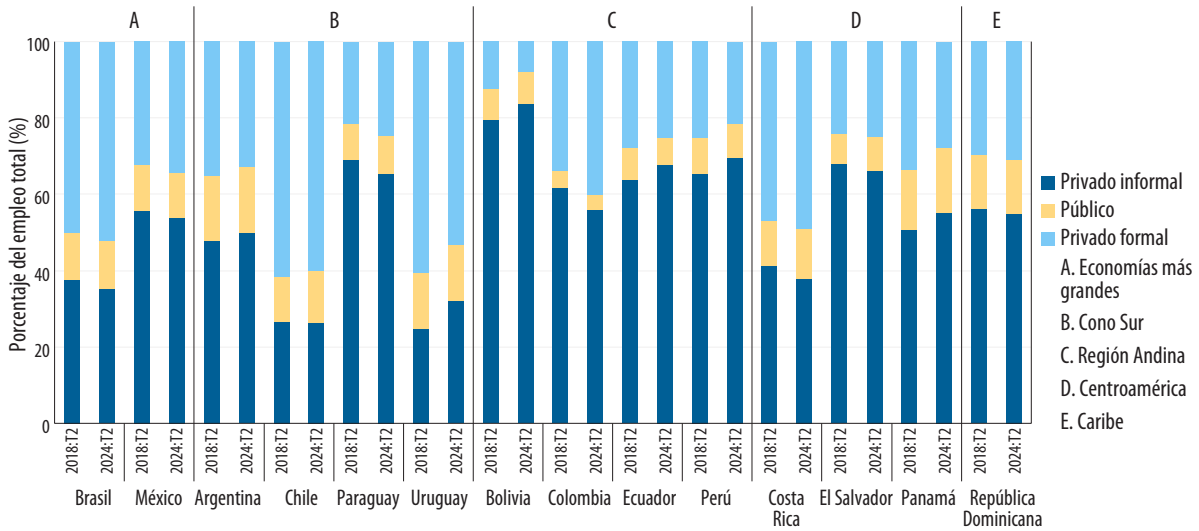


Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial utilizando la base de datos de estimaciones modeladas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ILOSTAT [base de datos] (<https://ilostat.ilo.org/data>).
 Nota: debido a la disponibilidad de datos, para Bolivia, los períodos comparados son 2023:T4, 2017:T4 y 2015:T4. para Uruguay, son 2014:T2, 2018:T2 y 2021:T2.

FIGURA 1.33.

El bajo crecimiento de ALC, la falta de habilidades y las estrictas normas laborales perpetúan el amplio sector informal

Desglose del empleo por sector institucional y formalidad



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial utilizando la base de datos de estimaciones modeladas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ILOSTAT [base de datos] (<https://ilostat.ilo.org/data>).

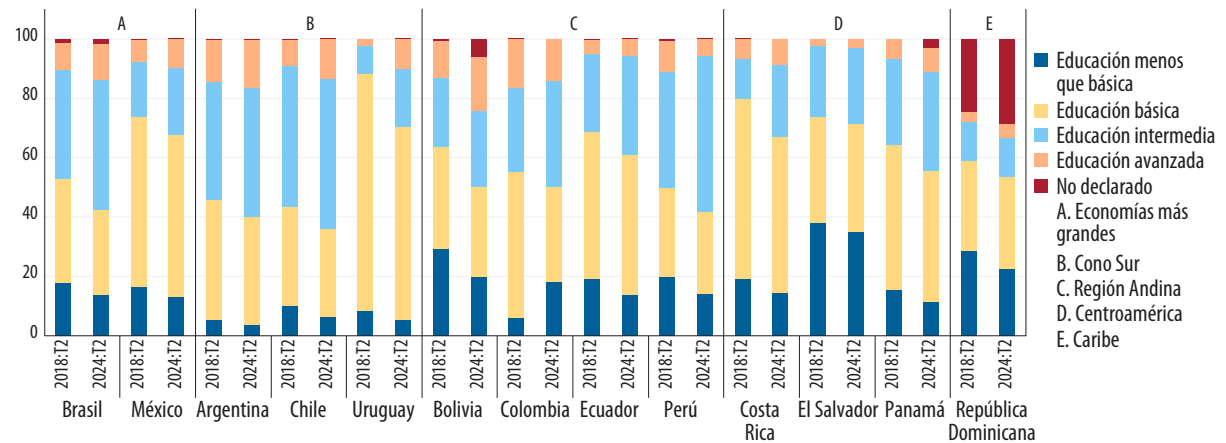
Nota: debido a la disponibilidad de datos, para Bolivia los períodos comparados son 2023:T4 y 2018:T4; en el caso de El Salvador y Panamá, son 2023 y 2018.

Una gran cantidad de bibliografía señala que el trabajo independiente informal a menudo emerge como una alternativa deseable (y mejor remunerada) a los empleos formales de baja productividad a los que pueden acceder los trabajadores con bajo nivel educativo.⁵ En el caso de ALC, las tasas de informalidad persistentemente altas se deben a la interacción entre el bajo crecimiento del sector formal, las costosas regulaciones del mercado laboral y la falta de habilidades (figura 1.34), que limitan la oferta de alternativas atractivas en el sector formal.

FIGURA 1.34.

La mayor parte de la fuerza laboral informal tiene educación básica o inferior a la básica

Desglose del empleo informal por nivel educativo



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial utilizando la base de datos de estimaciones modeladas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ILOSTAT [base de datos] (<https://ilostat.ilo.org/data>).

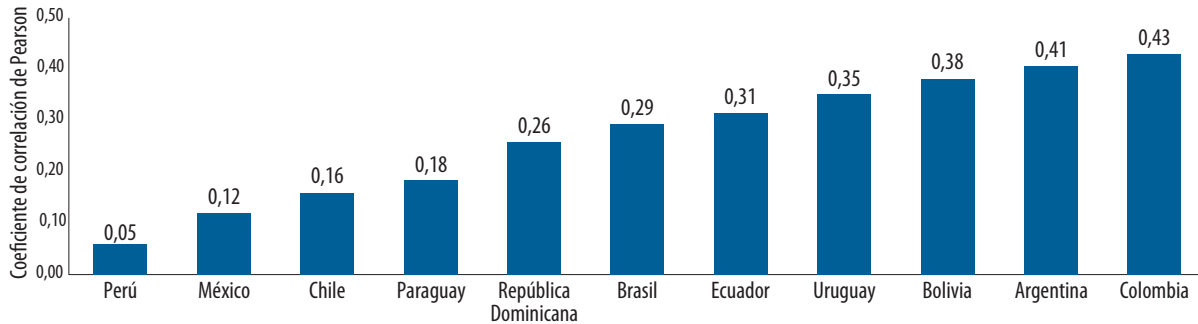
Nota: debido a la disponibilidad de datos, para Bolivia los períodos comparados son 2023:T4 y 2018:T4; en el caso de El Salvador y Panamá, son 2023 y 2018.

5 Perry et al. (2007).

FIGURA 1.35.

El aumento de la productividad laboral genera un aumento de los ingresos laborales reales en toda la región

Correlación entre las tasas de crecimiento anual de los ingresos mensuales reales de los empleados y la productividad laboral, de 2000 a 2022



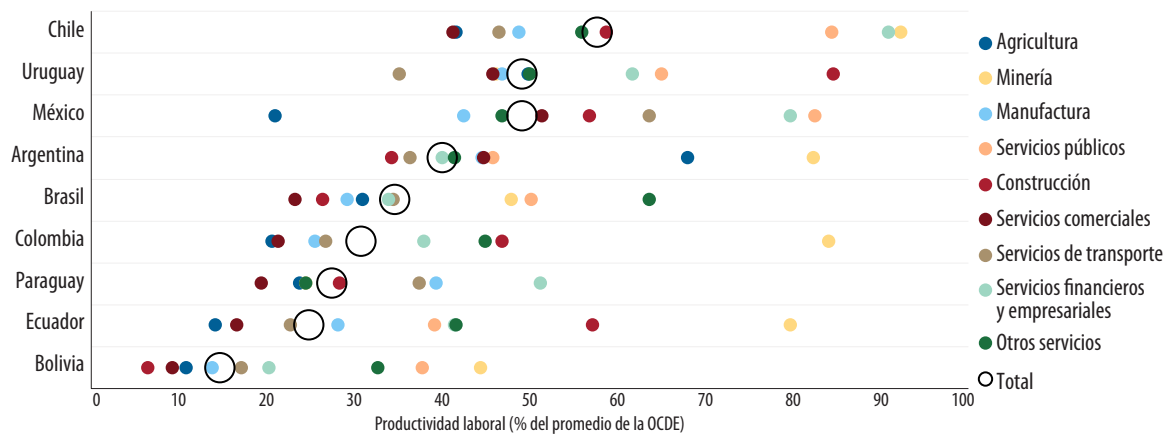
Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial utilizando la base de datos de estimaciones modeladas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). ILOSTAT (<https://ilostat ilo.org/data/>); base de datos de cuentas nacionales; análisis de los principales agregados (AMA); base de datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (<https://unstats.un.org/unsd/snaama/>); y Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Nota: la productividad laboral se mide en función del PIB real por trabajador. Los ingresos mensuales se han ajustado según la inflación utilizando el índice de precios al consumidor (IPC). En el gráfico se ilustra la correlación "contemporánea", que no tiene en cuenta los efectos dinámicos de traslado que podrían dar lugar a una transmisión diferida de los aumentos de productividad laboral a los aumentos reales de los ingresos de los empleados.

Las reformas que promueven el crecimiento y aumentan la productividad laboral son el principal canal a largo plazo para revitalizar los ingresos laborales reales. Como bien se ha establecido en la literatura y se ha demostrado en toda la región, existe una asociación positiva entre el aumento de la productividad laboral, el empleo y el aumento de los ingresos laborales reales (figura 1.35). Además, existe un potencial significativo para mejorar la productividad laboral en la región. Según las estimaciones anteriores a la pandemia por sector económico, la productividad laboral se ubicaba entre el 20 por ciento y el 60 por ciento de los niveles de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una variación considerable entre sectores (figura 1.36). A pesar de la asociación positiva entre la productividad y los ingresos laborales, aún no se sabe si existen instituciones del mercado laboral que impidan que el traslado sea mayor, y qué reformas podrían aumentarlo.

FIGURA 1.36.

El potencial de mejora de la productividad laboral es significativo

Productividad laboral como porcentaje del promedio de la OCDE, 2018



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de series armonizadas extraídas de la Base de Datos de Productividad Agregada y Sectorial del GBM [base de datos] (<https://prosperitydata360.worldbank.org/en/dataset/WB+ASPD>) (última actualización: 27 de marzo de 2024).
Nota: la productividad laboral se mide como PIB real por trabajador (en dólares internacionales de 2011 ajustados según la PPA). En promedio, los países de la OCDE no incluyen a los países de América Latina y el Caribe. OCDE = Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; PPA = paridad del poder adquisitivo.

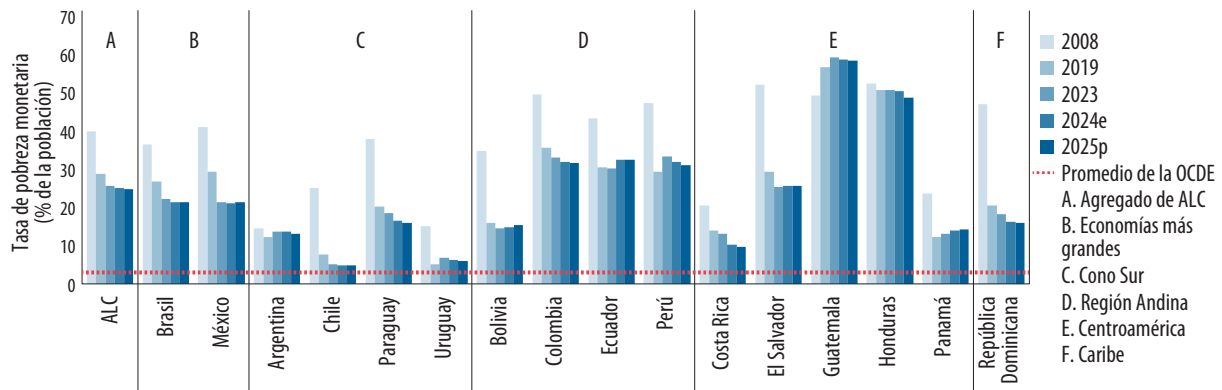
Reconocimiento del progreso social y los desafíos futuros

En general, es importante reconocer los impresionantes avances en la reducción de la pobreza en ALC durante las últimas dos décadas, considerando al mismo tiempo que el ritmo de este progreso se ha desacelerado significativamente y que, para la mayoría de los países de la región, aún queda mucho por hacer, especialmente en comparación con la tasa promedio de pobreza de los países de la OCDE (figura 1.37). En cuanto a la reducción de la desigualdad de ingresos, se han logrado avances más moderados en la reducción del coeficiente de Gini. Sin embargo, a fines de 2024, la mayor parte de la región se mantenía por encima del umbral de desigualdad alta establecido por el Banco Mundial, definido por un coeficiente de Gini superior a 40 (figura 1.38).

FIGURA 1.37.

Los avances en materia de reducción de la pobreza en ALC durante las últimas dos décadas han sido impresionantes

Evolución de las tasas de pobreza



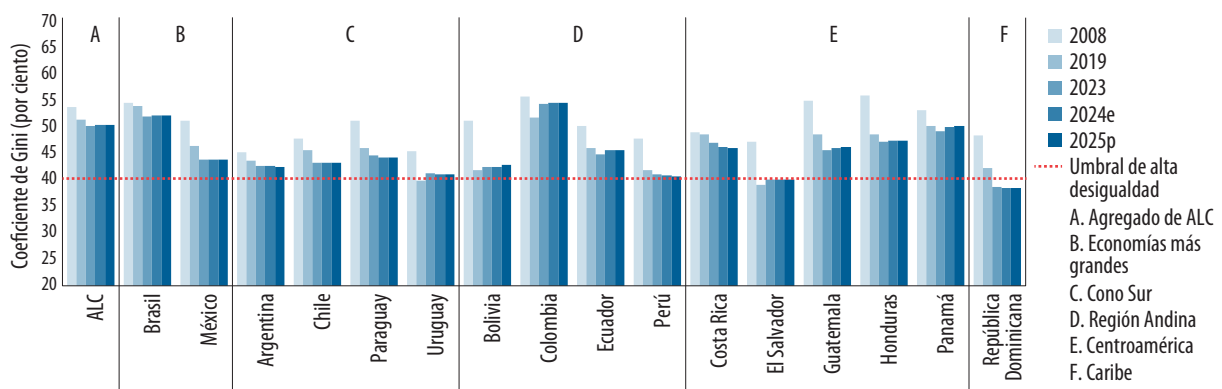
Fuente: Macro Poverty Outlook (Spring Meetings 2025) (de próxima aparición), Banco Mundial.

Nota: en el gráfico se utiliza una línea de pobreza para los países de ingreso medio alto de USD 6,85 por día en términos de PPA de 2017. En el caso de Argentina, los datos solo abarcan la cobertura urbana. Para Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, México y el agregado de ALC, debido a cambios en encuestas y metodología, el valor de 2008 no es enteramente comparable con el resto de la serie. Para Colombia, Paraguay y Uruguay, debido a cambios en encuestas y metodología, los valores de 2023 en adelante no son enteramente comparables con el resto de la serie. En el caso de Chile, se utiliza el valor de 2009 para 2008 y el de 2017 para 2019. En el caso de Guatemala, se utiliza el valor de 2006 para 2008 y el de 2014 para 2019. Para México, se utiliza el valor de 2018 para 2019. Las cifras de México de 2023, 2024 y 2025 son una proyección en la que se utiliza una distribución neutra (2022) con traslado = 0,87, basado en el PIB per cápita en unidades constantes de moneda local. El agregado regional de ALC se basa en 18 países de la región respecto de los cuales había microdatos disponibles a nivel nacional. En los casos en que no había datos disponibles, los valores se estimaron utilizando una combinación de métodos, incluidas microsimulaciones, y luego se agruparon para crear estimaciones regionales. Actualizado el 10 de abril de 2025. 2024e = estimación de 2024. 2025p = pronóstico para 2025. ALC = América Latina y el Caribe; PPA = paridad del poder adquisitivo.

FIGURA 1.38.

Los avances en la reducción de la desigualdad de ingresos han sido moderados

Evolución del coeficiente de Gini



Fuente: Macro Poverty Outlook (Spring Meetings 2025) (de próxima aparición), Banco Mundial.

Nota: en el caso de Argentina, los datos solo abarcan la cobertura urbana. Para Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, México y el agregado de ALC, debido a cambios en encuestas y metodología, el valor de 2008 no es enteramente comparable con el resto de la serie. Para Colombia, Paraguay y Uruguay, debido a cambios en encuestas y metodología, los valores de 2023 en adelante no son enteramente comparables con el resto de la serie. En el caso de Chile, se utiliza el valor de 2009 para 2008 y el de 2017 para 2019. En el caso de Guatemala, se utiliza el valor de 2006 para 2008 y el de 2014 para 2019. Para México, se utiliza el valor de 2018 para 2019. Las cifras de México de 2023, 2024 y 2025 son una proyección en la que se utiliza una distribución neutra (2022) con traslado = 0,87, basado en el PIB per cápita en unidades constantes de moneda local. El agregado regional de ALC se basa en 18 países de la región respecto de los cuales había microdatos disponibles a nivel nacional. En los casos en que no había datos disponibles, los valores se estimaron utilizando una combinación de métodos, incluidas microsimulaciones, y luego se agruparon para crear estimaciones regionales. Actualizado el 10 de abril de 2025. 2024e = estimación de 2024. 2025p = pronóstico para 2025. ALC = América Latina y el Caribe.

Desviación de la migración

Así como han endurecido sus políticas comerciales, en los últimos años varias economías avanzadas han comenzado a adoptar regímenes migratorios más restrictivos. Este cambio es especialmente relevante para ALC, dado que el 7,3 por ciento de todos los ciudadanos de la región son migrantes, y el flujo de migrantes ha aumentado constantemente en los últimos 15 años (figura 1.39). Además, varios países de América Central y el Caribe dependen en gran medida de las remesas que envían sus expatriados a sus países de origen, que en algunos casos superan el 20 por ciento del PIB.

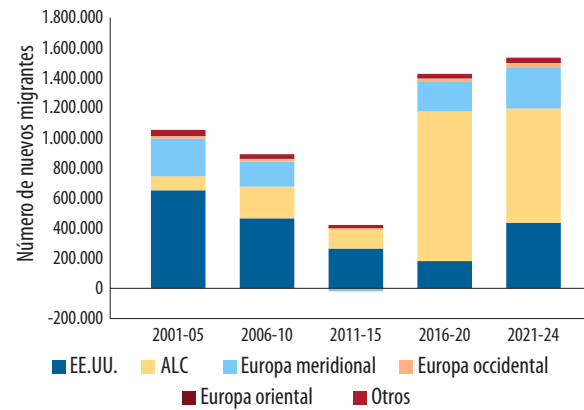
Las normas migratorias más estrictas en Estados Unidos han generado un desplazamiento de los flujos migratorios de Estados Unidos a ALC y, aunque con menor gravedad, a Europa meridional (principalmente a España, Italia y Portugal). Mientras que entre 2006 y 2015 la mayoría de los nuevos migrantes se trasladó a Estados Unidos (56 por ciento) y solo el 26 por ciento, a otros países de ALC, en la última década la migración dentro de la región representó el 61 por ciento de todos los nuevos migrantes, y la migración hacia Estados Unidos, el 20 por ciento (figura 1.40). Sin embargo, el mayor número de migrantes de ALC sigue estando en Estados Unidos (55 por ciento) (figura 1.41), aunque la proporción es significativamente menor que hace una década (68 por ciento). Durante el mismo período, la proporción en otros países de ALC ha aumentado del 17 por ciento al 29 por ciento.

El cambio de destinos ha ido acompañado de un cambio en los países de origen. La crisis humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela ha fomentado una diáspora entre sus ciudadanos, lo que, sumado al crecimiento relativamente alto de las economías de México y el Caribe, ha disminuido los incentivos de la población local para

FIGURA 1.39.

Los flujos migratorios netos de ALC continúan aumentando

Flujo migratorio neto de ALC, anualizado, por destino

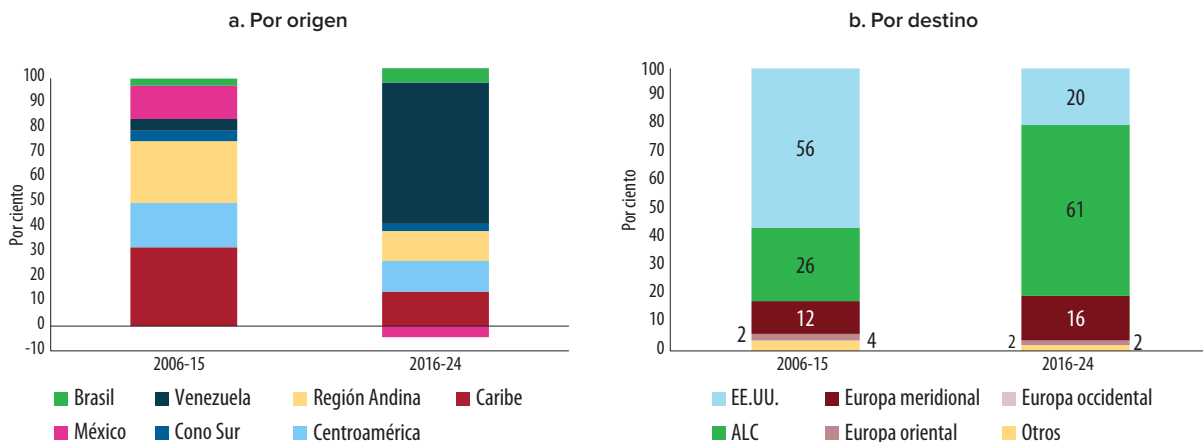


Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de la base de datos de poblaciones internacionales de migrantes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, 2024).
Nota: ALC = América Latina y el Caribe; EE.UU. = Estados Unidos de América.

FIGURA 1.40.

Otros países de ALC se han convertido en el principal destino de los migrantes venezolanos

Composición del flujo migratorio neto de ALC



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de la base de datos de poblaciones internacionales de migrantes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, 2024).
Nota: ALC = América Latina y el Caribe.

Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de la base de datos de poblaciones internacionales de migrantes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, 2024).
Nota: ALC = América Latina y el Caribe; EE.UU. = Estados Unidos de América.

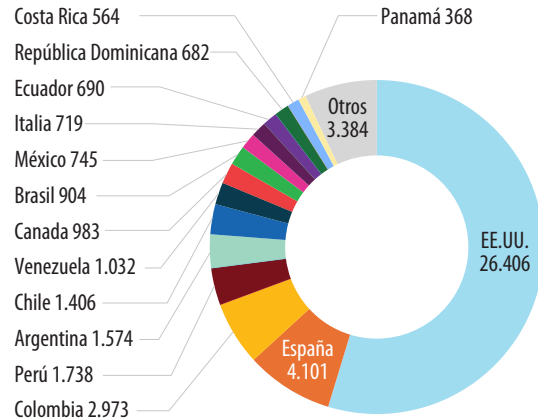
emigrar. Países como Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador han sido especialmente blanco de los emigrados de la República Bolivariana de Venezuela debido a su proximidad cultural y geográfica, además de sus leyes migratorias (figura 1.41).

Las deportaciones a países de ALC desde Estados Unidos han aumentado en los últimos años y se espera que se aceleren a partir de 2025. Además, la región ha accedido a recibir repatriaciones de Estados Unidos y flujos extrarregionales. Antes de 2025, México, Guatemala y Haití registraban las cifras más altas de retornados, pero los aumentos más drásticos se han registrado en Colombia y Ecuador, con un crecimiento del 369,5 por ciento y del 366,1 por ciento en los flujos de repatriados desde 2019, respectivamente. Sin embargo, si bien las deportaciones se dirigen a un número significativo de migrantes, en el período 2019-24 la migración neta a Estados Unidos sigue siendo positiva porque la proporción de recién llegados fue mayor que la de deportados (figura 1.42).

FIGURA 1.41.

La mayoría de los que emigran de los países de ALC vive en Estados Unidos

Población migrante de ALC (miles de migrantes), por destino, 2024

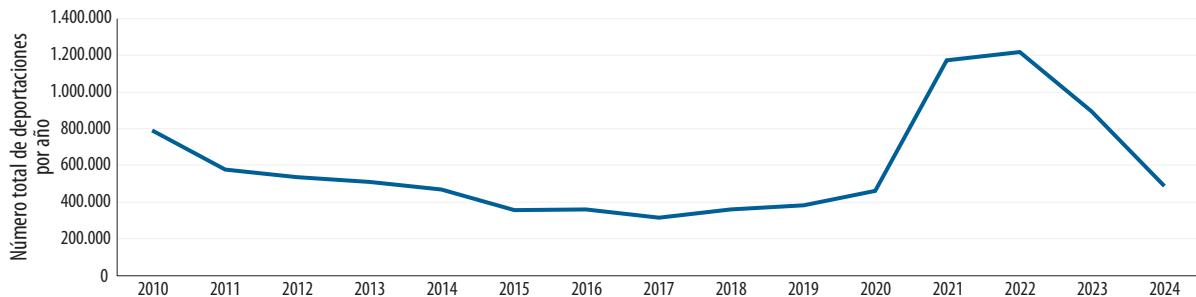


Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de la base de datos de poblaciones internacionales de migrantes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, 2024).
Nota: EE.UU. = Estados Unidos de América.

FIGURA 1.42.

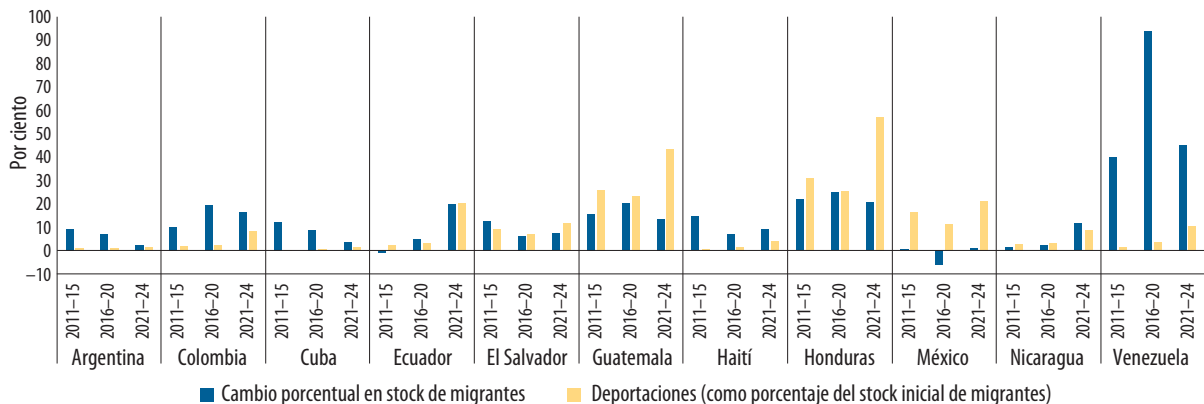
A medida que aumentan las deportaciones, la migración neta hacia Estados Unidos sigue siendo positiva para la mayoría de los países de ALC

a. Total de deportaciones desde Estados Unidos



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de la base de datos de poblaciones internacionales de migrantes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, 2024) y estadísticas sobre la cantidad de deportados, procesadas por la Práctica Global de Desarrollo Social del Banco Mundial.
Nota: incluye retornos de migrantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, Rep. Bol. de.

b. Evolución de los migrantes retornados y el total de migrantes que viven en Estados Unidos, por país de origen

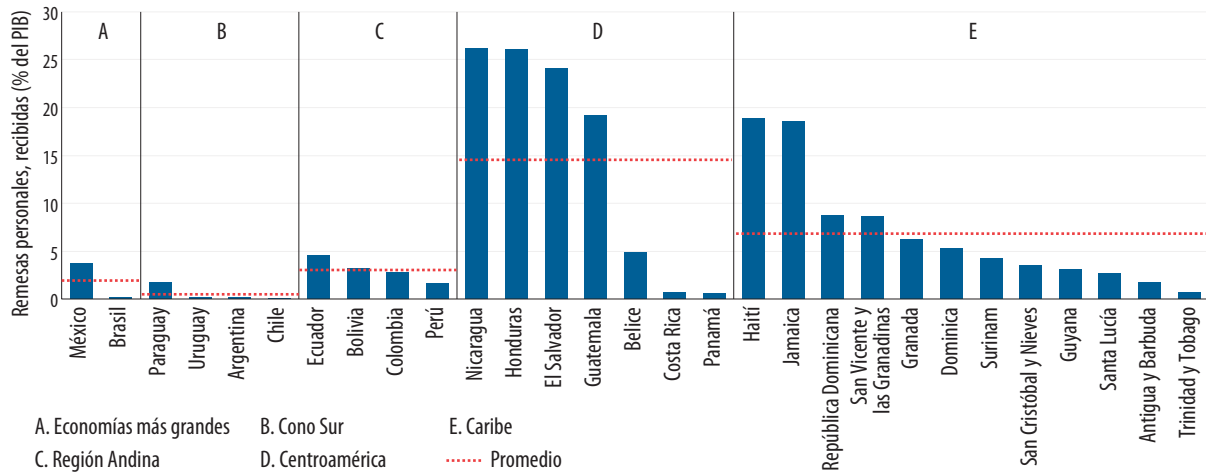


Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial a partir de la base de datos de poblaciones internacionales de migrantes (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población, 2024) y estadísticas sobre la cantidad de retornados, procesadas por la Práctica Global de Desarrollo Social del Banco Mundial.

FIGURA 1.43.

Los países de América Central y el Caribe dependen en gran medida de las remesas

Remesas personales recibidas, 2023 (porcentaje del PIB)



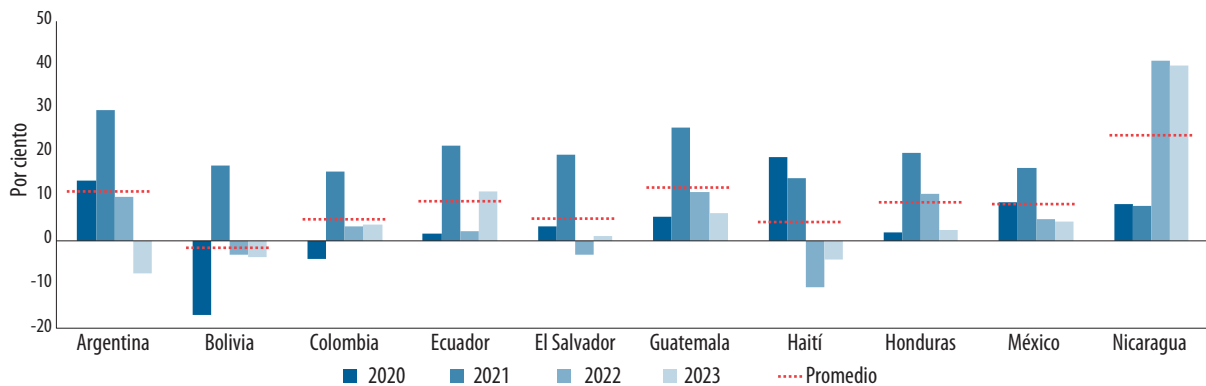
Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en WDI (Indicadores del Desarrollo Mundial).

Este aumento en los flujos de repatriados es un desafío en diferentes dimensiones. En primer lugar, se ha visto acompañado de una mayor vulnerabilidad. Varios países de ALC informan que una proporción significativa de los deportados son menores de edad y/o necesitan servicios estatales. Además, es probable que la reintegración de los deportados sea difícil. Estos migrantes retornan a países sin arraigo, trabajo o redes sociales. Por lo tanto, es probable que vuelvan a migrar (migración secundaria) a lugares como Chile, Brasil y Europa, y su integración en los mercados laborales locales probablemente sea costosa. Por ejemplo, un número considerable de niños y adolescentes requeriría educación y capacitación para integrarse efectivamente.⁶ En segundo lugar, varios países de América Central y el Caribe dependen en gran medida de las remesas (figura 1.43), que probablemente disminuirán si las deportaciones aumentaran lo suficiente como para disminuir el número de migrantes en Estados Unidos

FIGURA 1.44.

El reciente aumento de las deportaciones ha ayudado a reducir el crecimiento de las remesas

Tasa de crecimiento anual de las remesas personales reales recibidas



Fuente: cálculos del personal del Banco Mundial basados en los Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI) y la publicación Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nota: las remesas personales reales recibidas se calculan como remesas nominales (en millones de dólares de los Estados Unidos), ajustadas por inflación utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) de los Estados Unidos.

6 Para un análisis exhaustivo de los desafíos que plantea la migración retornada, consulte *Latin America and the Caribbean Regional Strategy for Human Mobility* (Banco Mundial, de próxima aparición).

(figuras 1.43 y 1.44). Asimismo, noticias recientes sobre planes del gobierno de los Estados Unidos de revocar el estatus legal de un número importante de migrantes de varios países de ALC implicarían efectos significativos, ya que en algunas de estas economías, las remesas recibidas representan un porcentaje alto del PIB.

Aumento de las fuentes de inseguridad social

A pesar de los continuos avances —aunque cada vez más lentos— en los frentes de pobreza y desigualdad, el delito y la violencia han aumentado hasta convertirse en la principal preocupación en muchas encuestas de opinión pública. De hecho, tanto el número de incidentes (cantidad bruta) de delitos como la naturaleza de los delitos se han intensificado, asociándose cada vez más con la delincuencia organizada que no se había registrado antes en muchas partes de la región. Esta nueva fuente de inseguridad social no sólo disminuye la calidad de vida, sino que también amenaza el dinamismo del crecimiento necesario para el progreso en todos los frentes sociales. Este es el tema del próximo capítulo.

RECUADRO 1.1.

¿La inteligencia artificial puede ser el remedio largamente esperado para la desigualdad de ingresos en América Latina?

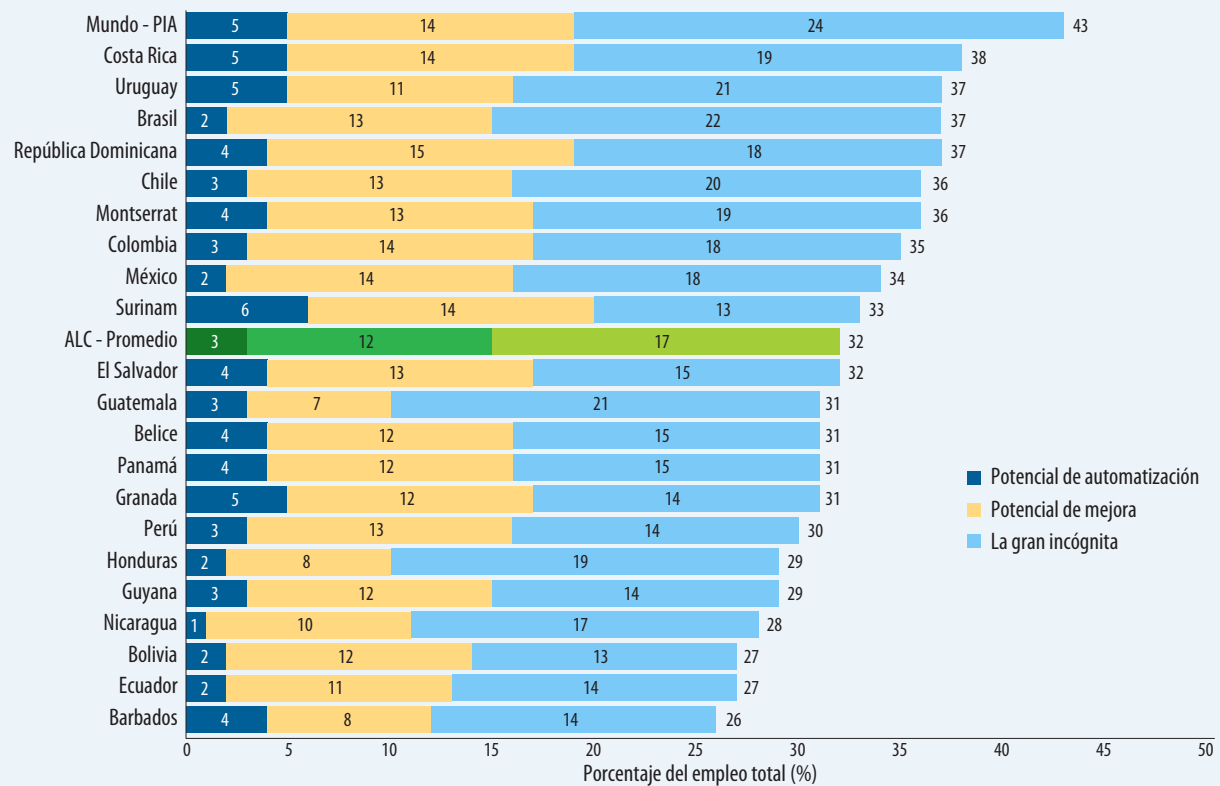
El interés del público en la inteligencia artificial generativa (GenAI) ha aumentado significativamente en los últimos años. La aparición de modelos conversacionales como ChatGPT ha generado preocupación en varios ámbitos, en particular en lo que respecta al impacto en el empleo. La mayoría de los adultos estadounidenses están más preocupados que entusiasmados con la IA en la vida diaria, principalmente por temor a perder el empleo (Rutgers, 2024).

La adopción generalizada de esta nueva tecnología aún está pendiente, por lo que es prematuro medir sus impactos en el empleo. Sin embargo, podemos evaluar en qué medida los empleos están expuestos a la GenAI. Cuando un empleo está expuesto a la GenAI, significa que es probable que la GenAI automatice muchas tareas dentro de ese trabajo. Sin embargo, la automatización de algunas tareas no significa que se reemplazará todo el trabajo. De hecho, la exposición a la GenAI podría hacer que algunos empleos sean más productivos si los trabajadores pueden delegar tareas a la tecnología y concentrarse en otras funciones.

En ALC, entre el 26 por ciento y el 38 por ciento del empleo está expuesto a la GenAI. La exposición es mayor en países más desarrollados, como Costa Rica y Uruguay, y menor en Bolivia, Ecuador y Barbados (figura R1.1.1). Este nivel general de exposición a la GenAI puede dividirse en tres categorías. En primer lugar, algunos empleos corren el riesgo de ser automatizados por la GenAI, que representa entre el 1 por ciento y el 6 por ciento del empleo en los países de la región.

FIGURA R1.1.1.

La exposición laboral a la GenAI es mayor en los países más desarrollados de ALC



Fuente: Gmyrek, Winkler y Garganta 2024.

Nota: "La gran incógnita" se refiere a los empleos para los que no queda claro cuál es más alto: el riesgo de automatización o el potencial de mejora. PIA = países de ingreso alto; ALC = América Latina y el Caribe.

Algunos ejemplos de estas ocupaciones son los agentes de atención al cliente e ingreso de datos. En segundo lugar, algunos empleos pueden mejorarse o volverse más productivos a través de la GenAI. Entre el 7 por ciento y el 14 por ciento del empleo en los países de ALC se ubica en esta categoría. En otras palabras, la fracción de empleos que podrían beneficiarse de la GenAI es mayor que la fracción que enfrenta el riesgo de automatización. Entre las ocupaciones expuestas a la mejora mediante GenAI se incluyen las de docentes, profesionales de la salud y entrenadores. Por último, en una parte significativa de los empleos (entre el 13 por ciento y el 22 por ciento), aún no está claro si enfrentan el riesgo de automatización o si podrían mejorarse.

Para comprender los impactos de la GenAI en la desigualdad de ingresos, debemos identificar el perfil de los trabajadores expuestos. En ALC, quienes corren el riesgo de automatización suelen ser mujeres, habitantes urbanos, jóvenes, con buen nivel educativo, con altos ingresos y que tienen empleos formales en la banca, las finanzas, los seguros o el sector público. El perfil para la mejora de empleos mediante GenAI es similar, pero está menos definido por edad y género, con una mayor exposición en educación, salud y servicios personales. Estas tendencias sugieren que, si bien los riesgos de automatización podrían aumentar la desigualdad entre géneros y grupos etarios, los beneficios de la GenAI, que favorecen a los hogares con ingresos más altos y buen nivel educativo, también pueden conducir a una mayor desigualdad de ingresos.

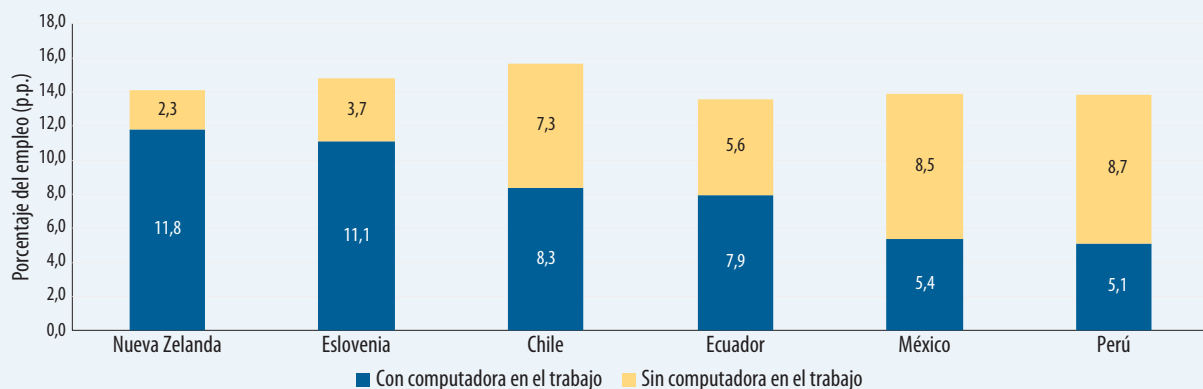
En estas estimaciones de la exposición, no se tiene en cuenta que la tasa de adopción de la GenAI en ALC puede diferir de la de las regiones más ricas. Esto significa que, si bien la misma ocupación podría tener un potencial similar de ampliación tanto en Nueva Zelanda como en Perú, el ritmo de adopción de la GenAI podría ser más lento en Perú. En consecuencia, las ventajas de esta tecnología pueden tardar más en materializarse en las regiones en desarrollo.

Si se considera la distancia a la frontera tecnológica, el potencial de mejora del empleo muestra una disparidad significativa entre los países más pobres y los más ricos (figura R1.1.2). Específicamente, aunque la proporción de empleos que podrían beneficiarse de la GenAI es similar (alrededor del 14 por ciento) en países ricos como Nueva Zelanda y Eslovenia, así como en algunos países de ALC, la fracción que no puede utilizar la GenAI debido a limitaciones tecnológicas es notablemente mayor en estos últimos. Por ejemplo, solo el 5,1 por ciento de los trabajadores peruanos tienen cargos expuestos a la mejora mediante GenAI y utilizan simultáneamente tecnologías digitales en el trabajo, en comparación con más del 11 por ciento en las naciones más ricas.

Se observan patrones similares cuando se evalúa la proporción de empleos expuestos a la GenAI en los diferentes niveles de ingreso dentro de los países. Tanto en Brasil como en México, el porcentaje de trabajadores que pueden beneficiarse de la GenAI aumenta significativamente según sus niveles de ingreso (figura R1.1.3). Las personas del quintil de ingresos

FIGURA R1.1.2.

Actualmente, los países de ALC utilizan menos tecnologías digitales en los empleos con potencial de mejora mediante GenAI en comparación con sus contrapartes avanzadas

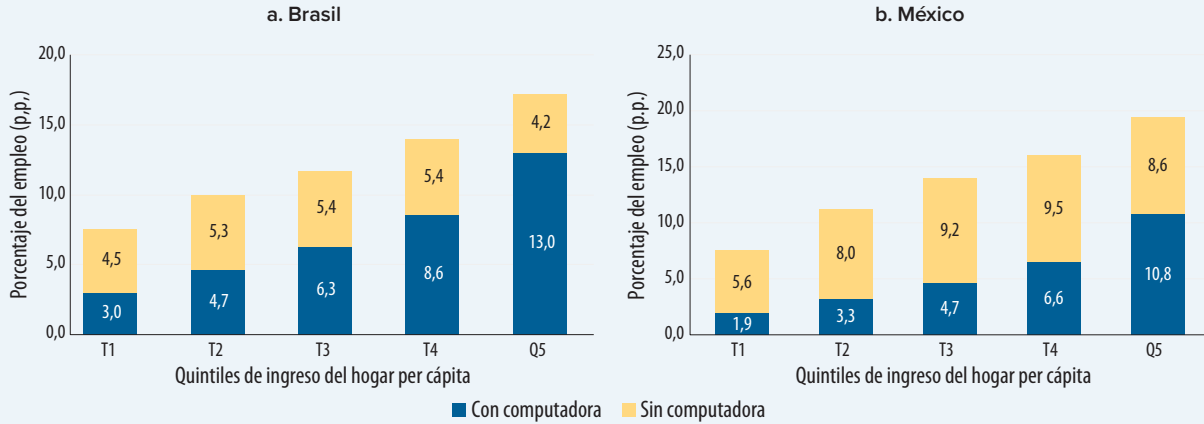


Fuente: Gmyrek, Winkler y Garganta, 2024, a partir de datos del PIAAC.

Nota: los datos del PIAAC se refieren a los microdatos del Programa para la evaluación internacional de las competencias de los adultos (PIAAC) recopilados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). ALC = América Latina y el Caribe.

FIGURA R1.1.3.

Los hogares de los quintiles de ingresos más altos tienen una mayor proporción de trabajadores expuestos al aumento de la GenAI y que utilizan una computadora en el trabajo



Fuente: Gmyrek, Winkler y Garganta 2024.
 Nota: p.p. = puntos porcentuales.

más alto tienen al menos el doble de probabilidades de tener acceso a esos puestos en comparación con las del quintil más bajo. Esta disparidad se amplía aún más cuando se considera el acceso a las tecnologías digitales. En México, por ejemplo, los trabajadores del quintil de ingresos superior tienen 5,6 veces más probabilidades de ocupar empleos que impliquen la mejora mediante GenAI y utilizar computadoras que los del quintil inferior. En toda la región de ALC, hay aproximadamente 17 millones de empleos que podrían beneficiarse de la GenAI, pero que se ven obstaculizados por un acceso inadecuado a las tecnologías digitales. Estas oportunidades perdidas afectan de manera desproporcionada a los países de ingreso bajo y a los segmentos más pobres de la fuerza laboral.

En resumen, si bien la GenAI puede beneficiar a muchos trabajadores de la región, se necesitan políticas complementarias para garantizar estos beneficios. Esto incluye desarrollar infraestructura digital, ofrecer apoyo a los ingresos de los trabajadores desplazados y proporcionar habilidades básicas para adaptarse a los cambios laborales. Estas políticas deben tener como objetivo ayudar a todos los trabajadores, no solo a los que están en los niveles superiores, a utilizar la GenAI de manera eficaz y así mitigar un posible aumento de la desigualdad.

Notas

a. Este recuadro se basa en Gmyrek, Winkler y Garganta (2024).

RECUADRO 1.2.

¿Están listos los trabajadores latinoamericanos para una transición energética?

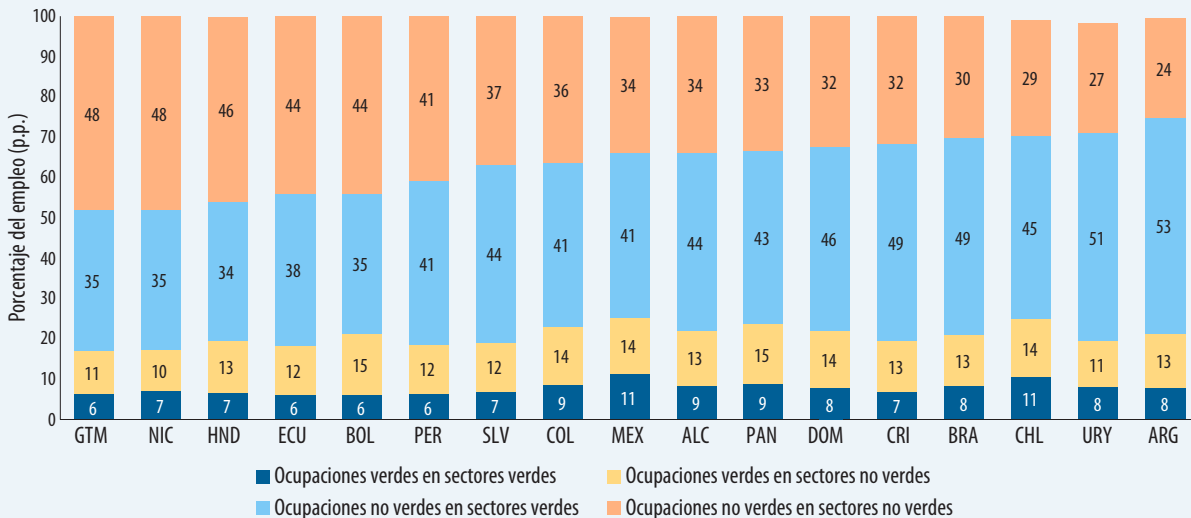
Si bien las tecnologías “verdes” pueden promover un planeta más saludable, su adopción puede tener consecuencias no deseadas. Estas tecnologías tienen el potencial de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aumentar la eficiencia energética y aumentar las energías renovables. Su adopción transforma los procesos de producción, modifica los tipos y las cantidades de insumos y, al mismo tiempo, mitiga los impactos negativos en el medio ambiente. Y lo que es más importante, afectan la demanda laboral, haciendo que algunas habilidades sean esenciales y otras queden obsoletas, lo que puede conducir a una mayor desigualdad de ingresos. El impacto de las tecnologías verdes en los trabajadores dependerá del equilibrio entre la oferta y la demanda de habilidades. El crecimiento inclusivo es más probable cuando las habilidades necesarias son abundantes, ya que los trabajadores desplazados pueden encontrar empleo más fácilmente y los salarios de estos trabajadores pueden aumentar.

¿Cuáles son los impactos esperados de la transición verde en los trabajadores de la región de ALC?

La concentración del empleo en ocupaciones y sectores verdes es relativamente pequeña en varios países de ALC (figura R1.2.1). Las ocupaciones verdes incluyen diversos empleos, como los intensivos en habilidades verdes específicas (puras) (por ejemplo, especialistas en cambio climático); las que tal vez requieran algún tipo de cambio profesional (por ejemplo, un arquitecto que necesite capacitación para usar materiales verdes); y las ocupaciones existentes cuya demanda puede aumentar, aunque no sean claramente verdes (por ejemplo, carpinteros). Los sectores verdes se caracterizan por tener emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relativamente bajas por trabajador. Los trabajadores de estos sectores enfrentan un menor riesgo de desplazamiento durante la transición verde en comparación con sus contrapartes de sectores no verdes. Aproximadamente el 90 por ciento de los trabajadores de cada país de la región pertenece a sectores no verdes o a ocupaciones no verdes. Los sectores no verdes representan una parte importante de los puestos de trabajo, que oscilan entre el 37 por ciento en Argentina y el 59 por ciento en Guatemala. Esta proporción está influenciada por el tamaño del sector agrícola, que tiene uno de los niveles más altos de GEI por trabajador y emplea predominantemente a personas en ocupaciones no verdes: alrededor del 90 % o más en la mayoría de los países.

FIGURA R1.2.1.

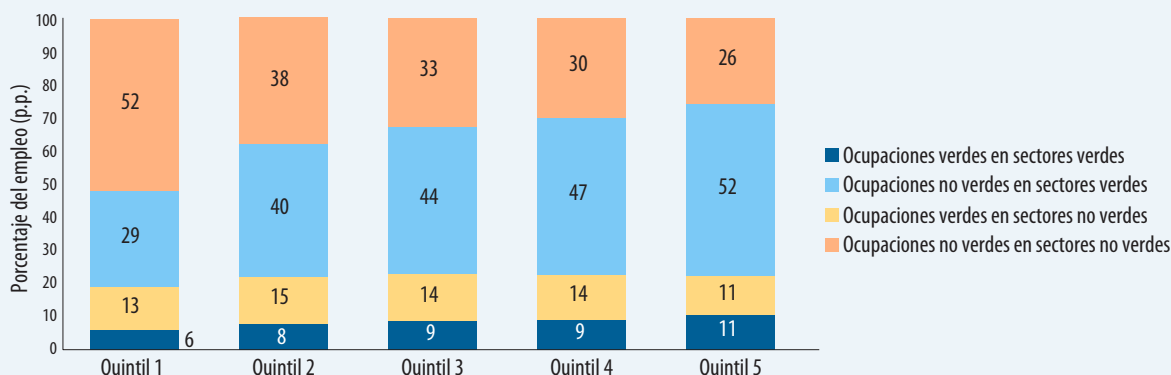
Las ocupaciones y los sectores verdes se encuentran en niveles relativamente bajos en ALC



Fuente: Winkler et al. 2024.
Nota: los datos corresponden a 2019. ALC = América Latina y el Caribe.

FIGURA R1.2.2.

Los quintiles más pobres de ALC son los más vulnerables a la pérdida de empleo durante la transición verde



Fuente: Winkler et al. 2024.
Nota: los datos corresponden a 2019.

El perfil de los trabajadores con empleos verdes dentro de los países pone de relieve los posibles impactos distributivos de la transición verde. En la región de ALC, los hombres y los trabajadores urbanos predominan en las ocupaciones verdes y tienen mejores perspectivas de reemplazo en caso de ser desplazados. Sin embargo, el empleo general en los sectores verdes es mayor entre las mujeres y las personas con niveles de educación más altos, que enfrentan un menor riesgo de desplazamiento. Este sesgo de género en las ocupaciones verdes refleja el predominio de los hombres en puestos como los de director ejecutivo, electricistas y trabajadores de la construcción. Por el contrario, la mayor presencia de las mujeres en los sectores verdes se debe a su concentración en servicios como la economía del cuidado y el comercio minorista. Las diferencias en la proporción de ocupaciones verdes entre los quintiles de ingresos de los hogares no son particularmente grandes (figura R1.2.2), pero la proporción de trabajadores más vulnerables durante una transición verde (es decir, trabajadores en ocupaciones no verdes y en sectores no verdes) es significativamente mayor en los quintiles más pobres.

En conclusión, estos resultados subrayan la necesidad de políticas complementarias que aborden los posibles impactos de las transiciones verdes en la desigualdad de ingresos. Los países con una menor proporción de ocupaciones verdes a menudo enfrentan desafíos como niveles más bajos de capital humano y tasas más altas de informalidad en el mercado laboral. Estos factores generan inquietudes con respecto a la preparación de la fuerza laboral para adquirir las habilidades necesarias para una economía verde y protegerse contra el riesgo de desplazamiento laboral durante esta transición.

Notas

- a. Este recuadro se basa en Winkler et al. (2024).

Referencias

- Gmyrek, P., H. Winkler y S. Garganta. (2024), “Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Gap in Latin America”, World Bank Policy Research Working Paper 10863. Banco Mundial, Washington, DC.
- Perry, G. E., W. F. Maloney, O. S. Arias, P. Fajnzylber, A. D. Mason y J. Saavedra-Chanduvi 2007. *Informality: Exit and Exclusion*. World Bank Latin American and Caribbean Studies. Banco Mundial, Washington, DC.
- Riera-Crichton, D. y G. Vuletin 2024. “Public Spending Policies in Latin America and the Caribbean: When Cyclical Meets Rigidities”. Latin American Development Forum Series. Banco Mundial, Washington, DC.
- Rutgers. 2024. “U.S. Workers Assess the Impacts of Artificial Intelligence on Jobs: Topline Survey Results”. New Brunswick, NJ: Heldrich Center for Workforce Development.
- Winkler, H., V. Di Maro, K. Montoya, S. Olivieri y E. Vázquez (2024), “Measuring Green Jobs: A New Database for Latin America and Other Regions”, Policy Research Working Paper 10794. Banco Mundial, Washington, DC.
- Banco Mundial. 2022. “Latin America and the Caribbean Economic Review”, October 2022. *Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal*. Banco Mundial, Washington, DC.
- Banco Mundial. 2023. “Latin America and the Caribbean Economic Review”, October 2023. *Wired: Digital Connectivity for Inclusion and Growth*. Banco Mundial, Washington, DC.
- Banco Mundial (2024a). *Latin America and the Caribbean Economic Review, October 2024. Taxing Wealth for Equity and Growth*. Banco Mundial, Washington, DC.
- Banco Mundial (2024b), *Regional Poverty and Inequality Update, Latin America and the Caribbean, October 2024*. Banco Mundial, Washington, DC.
- Banco Mundial. 2025. “Macro-Poverty Outlook” (Spring Meetings 2025). Banco Mundial, Washington, DC.
- Banco Mundial. Próximo. *Latin America and the Caribbean Regional Strategy for Human Mobility*. Banco Mundial, Washington, DC.



CAPÍTULO 2.

Crimen organizado y violencia en ALC

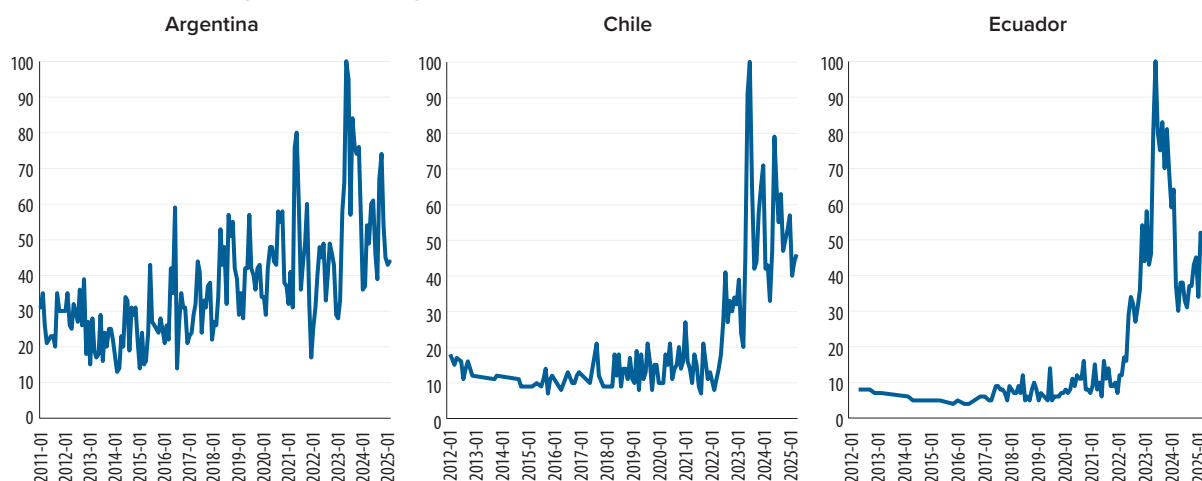
ALC debe priorizar la lucha contra el crimen organizado

Los desafíos del desarrollo en ALC se multiplican con la expansión del crimen organizado en la región. Los noticieros locales no solo documentan tasas de homicidio en aumento, sino también crímenes ordenados desde las cárceles, a veces involucrando población civil; políticos y funcionarios amenazados; candidatos a cargos públicos asesinados, alterando las elecciones; homicidios asociados con personas con alias y kilos de cocaína perdidos; empresas que deben pagar tarifas de extorsión para operar y partes del territorio —barrios, ciudades y municipios rurales— bajo control criminal.⁷ El dominio del crimen organizado ha aumentado no solo en países como Colombia, Brasil o México, donde el narcotráfico y los grupos criminales, de una u otra forma, han estado presentes durante décadas, sino también en nuevos países. Cada año, un nuevo país está siendo afectado.⁸ La creciente expansión e intensidad del crimen tiene correspondencia con el aumento de búsquedas en Google Trends, una fuente informativa sobre temas que no estaban en la mente local hace unos años, pero que han ganado prominencia recientemente (figura 2.1). La frecuencia con que los países de ALC aparecen entre aquellos con más consultas sobre «crimen organizado» ha aumentado de 3 entre los primeros 20 en 2005 a 13 entre los primeros 20 en 2024 y 2025.

FIGURA 2.1.

En ALC, cada vez hay más búsquedas sobre “crimen organizado” en Google

Búsquedas de “crimen organizado” en Google, países seleccionados, 2011/12-2025



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de Google Trends.

Nota: Los números representan el interés de búsqueda en relación con el punto de interés más alto en cada país. 100 es el pico de popularidad del tema. Un valor de 50 significa que el tema es la mitad de popular de lo que es en el pico. ALC=América Latina y el Caribe.

Este capítulo argumenta que el crimen organizado es uno de los problemas más urgentes de la región y que debe estar en el centro de cualquier conversación sobre desarrollo. Si bien es un problema presente en muchos países y regiones del mundo, y su erradicación requerirá colaboración internacional y soluciones coordinadas más allá de las fronteras nacionales, la forma particular que toma en la región exige una acción urgente. En ALC, el crimen organizado tiende a ser más violento que en otros lugares. También florece localmente a través del control territorial, la coerción y la extorsión, la captura de las instituciones del Estado, y la gobernanza criminal— a veces con reglas que limitan las libertades individuales, incluyendo el derecho a circular, trabajar y votar libremente.

Los impedimentos que plantea para el desarrollo de la región son múltiples: la incertidumbre sobre los derechos de propiedad reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los costos de transacción de los negocios y reducen la competitividad; los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos que podrían destinarse a salud, educación e infraestructura, mejorando la vida de las personas; las víctimas de violencia

7 Abi-Habib, Correal y Nicas (2024); Economist (2024b); Freeman (2024); Rodríguez Mega (2024).

8 Abi-Habib (2024); Nicas, Bonnefoy y Bartlett (2025).

ven disminuida su capacidad para acumular capital humano; las comunidades que viven bajo las reglas del crimen organizado ven comprometidas sus libertades básicas; y el control de las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos. Los canales a través de los cuales el crimen organizado contribuye a la baja productividad, el bajo crecimiento, la pobreza y la alta desigualdad en ALC son innumerables.

El crimen organizado se alimenta de la falta de oportunidades, la insuficiente presencia del Estado y la debilidad institucional. En el mediano y largo plazo, la mejor política de seguridad pública es construir estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad. Sin embargo, en el corto plazo, ALC debe priorizar el fortalecimiento estratégico de la capacidad en cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia para mitigar las expresiones más dañinas del crimen organizado y controlar su expansión. También debe dar prioridad a intervenciones de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales. Ambos esfuerzos requieren mejores datos y estudios para orientar el diseño de las políticas públicas. Por último, la coordinación interinstitucional, así como la colaboración y coordinación entre distintos niveles de gobierno y a nivel internacional, serán fundamentales para gestionar un problema que ningún país puede resolver de manera unilateral.

El crimen organizado es un fenómeno global que se extiende por ALC

La creciente presencia del crimen organizado no es un problema exclusivo de la región. Por el contrario, los grupos criminales que operan en ALC forman parte de una extensa red internacional en la que grupos transnacionales de crimen organizado participan en una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas de fuego, la extorsión, la minería ilegal y los crímenes cibernéticos. Estas organizaciones interactúan entre sí en distintos niveles y capacidades.

Hay una ausencia total de datos que midan la actividad del crimen organizado de un modo comparable entre países, en parte por su naturaleza ilícita. La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por su sigla en inglés) creó recientemente un índice de crimen organizado basado en datos cuantitativos y evaluaciones cualitativas que busca, así sea de manera imperfecta, ofrecer medidas internacionalmente comparables. El índice se compone de dos puntajes, uno sobre criminalidad y otro sobre resiliencia. El primero evalúa “la escala, el alcance y el impacto” de 15 mercados criminales y “evalúa la estructura y la influencia” de cinco tipos de actores criminales.⁹ El segundo mide la preparación de los países para enfrentar el crimen organizado.

El puntaje de criminalidad muestra que el crimen organizado es un problema grave en ALC, pero no es exclusivo de esta región (figura 2.2). En 2023, 12 países de ALC se encontraban entre los 50 primeros en esta puntuación, junto con países como Myanmar, la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica, Rusia e Italia.¹⁰ Notablemente, aunque el crimen organizado es un problema significativo en varios países de ALC, incluidas algunas de las economías más grandes de la región, no todos los países se ven afectados de la misma manera. Aquellos donde las señales de presencia del crimen organizado son aún incipientes, pueden tener una ventaja para protegerse.

Los componentes del puntaje por separado dan información sobre los mercados criminales en los que participa cada país. En general, los ordenamientos indican diversos patrones de especialización entre países y a lo largo de las cadenas verticales de producción de los diferentes negocios criminales (tanto en ALC como en otras regiones). Por ejemplo, no todos los países que se encuentran entre los 50 primeros por tráfico de cocaína (producción, distribución y venta) aparecen entre los primeros 50 por delitos financieros. ALC tiene una presencia dominante en el tráfico de cocaína, con 17 países de la región (de los 33 presentes en la base de datos) entre los 20 primeros según los puntajes de GI-TOC.

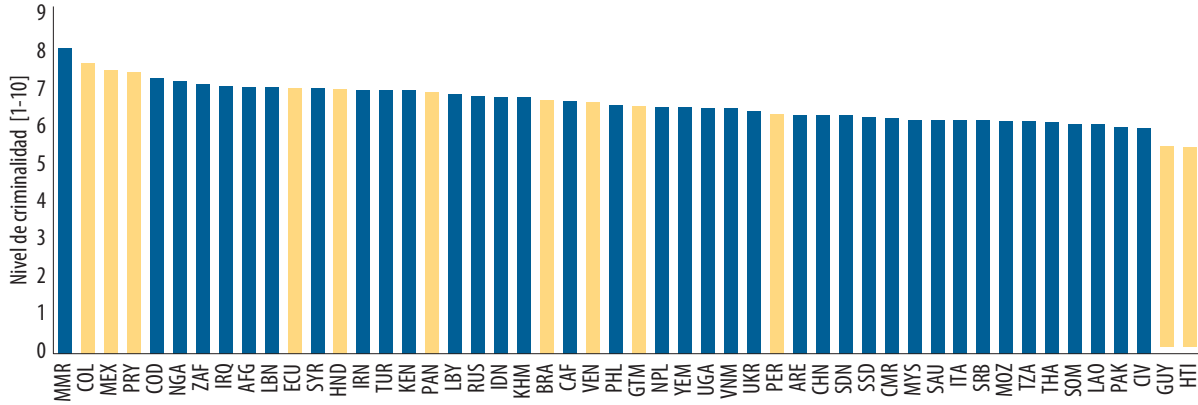
9 Los mercados criminales son la trata de personas, el tráfico de migrantes, la extorsión y los cobros por protección, el tráfico de armas, el comercio de productos falsificados, el comercio ilícito de bienes sujetos a impuestos especiales, los delitos contra la flora y la fauna, los delitos relacionados con los recursos no renovables, el tráfico de heroína, el tráfico de cocaína, el comercio de cannabis, el comercio de drogas sintéticas, los delitos cibernéticos y los delitos financieros. Los actores criminales incluyen grupos mafiosos, redes criminales, actores estatales, actores extranjeros y actores del sector privado.

10 Estos son, en orden, Colombia, México, Paraguay, Ecuador, Honduras, Panamá, Brasil, Venezuela, Guatemala, Perú, Guyana y Haití.

FIGURA 2.2.

Doce países de ALC se encuentran entre los 50 primeros (de 193) por crimen organizado

Puntaje de criminalidad, 50 más altos, 2023



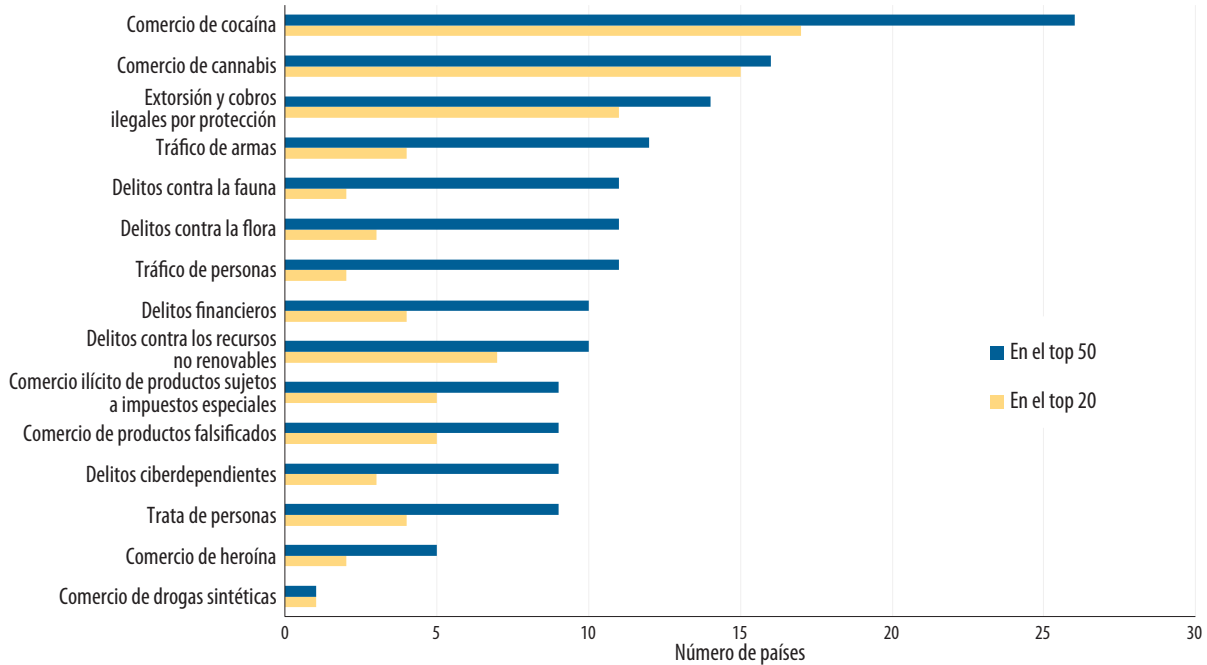
Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de GI-TOC.
 Nota: Los países de ALC están resaltados en amarillo. El puntaje de criminalidad mide el alcance y el impacto del crimen organizado en un país en una escala de 0 a 10; los puntajes más altos indican más actividad criminal. En la figura se utilizan los códigos de país de la Organización Internacional de Normalización (ISO). ALC = América Latina y el Caribe.

Aunque el número de países entre los 20 primeros en otros mercados criminales es menor, hay también países de ALC en ese grupo por comercio de cannabis (15), extorsión y cobros por protección (11), tráfico de armas (4), y delitos financieros (4), entre otros. México es el país con más apariciones (13 de 15 mercados ilícitos) entre los primeros 20, seguido de Brasil y Colombia, cada uno con 8 (figura 2.3).

FIGURA 2.3.

La presencia de ALC es significativa en muchos mercados ilícitos

Número de países de ALC entre los 50 primeros y los 20 primeros por mercado ilícito, 2023



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de GI-TOC.
 Nota: Varios países pueden tener la misma puntuación y quedar empatados con otros dentro de los 20 o 50 primeros. En consecuencia, el grupo superior puede incluir a más de 20 o 50 países. ALC = América Latina y el Caribe.

Poco se sabe acerca de dónde y precisamente cómo se materializan estas actividades, cómo están estructurados e interconectados estos grupos, hasta qué punto se especializan o diversifican en múltiples mercados, o cómo fluyen entre distintas manos las altas sumas de dinero involucradas en estas actividades. Gran parte de esta actividad es invisible. Los homicidios y la corrupción relacionada con el crimen organizado, cuando se descubre, se pueden observar, pero otras actividades criminales son más difíciles de detectar. Sin embargo, lo que se sabe a partir de casos explorados por periodistas, investigadores y unidades de investigación de organismos estatales es suficiente para entender que enfrentar el crimen organizado es una prioridad urgente para el desarrollo.

Hay cuatro características centrales del crimen organizado en ALC

Control territorial. El control territorial es un elemento característico de la forma en la que operan los grupos de crimen organizado en la región. Estos grupos controlan territorios que van desde algunas mazanas en zonas urbanas, hasta grandes áreas rurales, donde monopolizan mercados ilícitos (y a veces lícitos) a través de la coerción y la violencia. Grandes partes del territorio están bajo el control de grupos criminales en varios países de ALC. Notablemente en Colombia, México, Brasil, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, pero no exclusivamente. De hecho, 17 países de ALC se encuentran entre los 50 primeros en el índice de GI-TOC por tener grupos de “estilo mafioso” que se caracterizan, entre otras cosas, por el control que ejercen sobre el territorio donde operan.

En muchos casos, conseguir control territorial implica altos niveles iniciales de violencia letal. Este tipo de violencia suele estar relacionado con disputas entre grupos por territorios o mercados, por lo que, una vez consolidado el control, tiende a disminuir. La violencia remanente es focalizada y se utiliza para castigar incumplimientos de los acuerdos o para disuadir a potenciales competidores. Hay lugares en que las mujeres y sus cuerpos son atacados estratégicamente como una forma de controlar a las comunidades.¹¹ En Colombia, el cese al fuego y el desarme del grupo insurgente de las FARC bajo el acuerdo de paz del 2016, combinado con la falta de presencia del Estado en los antiguos territorios de las FARC, resultó en nuevas luchas entre grupos criminales por estos territorios. Esto llevó a asesinatos sistemáticos de líderes sociales en zonas en disputa, una práctica que persiste hasta hoy.¹²

Gobernanza criminal. En los territorios que controlan, las organizaciones criminales dictan las reglas del juego. Proveen servicios a la comunidad, sustituyendo al Gobierno, especialmente en la provisión de seguridad y justicia, a menudo en respuesta a demandas de la ciudadanía. Algunas veces, limitan la libertad de las personas, sometiendo su comportamiento y movilidad a sus propias reglas. Por ejemplo, en Puerto Leguízamo, un pequeño puerto fluvial en el río Putumayo, en la triple frontera de Colombia, Ecuador y Perú, el grupo Comandos de la Frontera (Colombia), aliado del Comando Vermelho (Brasil) y de grupos ecuatorianos en el tráfico de cocaína, dicta los horarios en que los civiles pueden transitar por el río y a quiénes pueden transportar en sus embarcaciones, prohíbe el consumo de alcohol y castiga el incumplimiento con sanciones que van desde palear tierra hasta tortura y asesinato. Bajo la gobernanza de este grupo, ya no hay drogadictos en Puerto Leguízamo ni robos de lanchas rápidas.¹³

El crimen organizado es un “competidor” del Estado en muchos lugares. En otros, sin embargo, la gobernanza criminal coexiste con el Estado en un equilibrio mutuamente conveniente (a veces estable, a veces no). Por ejemplo, no es raro que la policía delegue indirectamente el control de ciertas actividades criminales a estos grupos o les permita dominar ciertos territorios. Esto ocurre en algunos barrios de Medellín (Colombia), donde la policía aconseja a los residentes que acudan al grupo criminal local en caso de robo.¹⁴ Otro ejemplo es Lara (Venezuela), donde Los Colectivos controlan el transporte público, las tuberías de agua y las estaciones de gasolina que operan con precios subsidiados por el gobierno. Cobran una tarifa a los autobuses públicos para entrar a los proyectos de vivienda social a recoger pasajeros, deciden qué calles y casas reciben agua, y cobran a los conductores por permitirles saltarse largas filas en estas estaciones de gasolina.¹⁵

11 Insight Crime (2023).

12 Prem et al. (2021).

13 Vélez (2025).

14 Blattman et al. (2024c).

15 Unidad Investigativa de Venezuela (2023).

Extorsión. El cobro de “impuestos” a empresas es una práctica común de los grupos de crimen organizado en los territorios bajo su control. La extorsión a menudo se presenta como una venta de servicios de protección, justicia local o incluso asistencia social. Pero en realidad se trata de una protección contra la amenaza de violencia que los propios grupos pueden ejercer contra aquellos que no pagan por sus servicios. La extorsión se suma a los impuestos establecidos por los gobiernos, por lo que muchos negocios que pagan impuestos formales están expuestos a una doble tributación (en detrimento de su capacidad para competir e invertir). La extorsión afecta más a las pequeñas empresas que a las grandes. Un caso destacado es El Salvador, donde las maras (MS-13 y Barrio 18) estuvieron involucradas en extorsión y cobros de tarifas de protección en todo el país durante décadas. Aproximadamente el 79 por ciento de los negocios, incluidos los restaurantes y centros comerciales, pagaban tarifas de extorsión. El proceso a menudo comenzaba cuando un joven de la zona conectaba al dueño del negocio con un líder criminal, quien llamaba desde la cárcel para hablar de “la renta” —una tarifa de protección—. El costo total de la extorsión en El Salvador, incluyendo los ingresos perdidos en gastos en seguridad de los hogares y las personas imposibilitadas para trabajar, se estimó en 16 por ciento del PIB en 2014.¹⁶ En Ecuador, los casos de extorsión aumentaron más del 65 por ciento de 2022 a 2023 y casi un 400 por ciento desde 2021. Las empresas están siendo forzadas a pagar cuotas de extorsión en zonas controladas por tres grandes grupos narcotraficantes: Choneros, Lobos y Tiguerones.¹⁷ En 2023, una granada fue lanzada a una escuela en Guayaquil tras una demanda de extorsión de 10.000 dólares, y una pequeña farmacia en Pascuales fue bombardeada después de que el propietario se negara a pagar una tarifa de protección de 5.000 dólares.¹⁸

Captura del Estado. La actividad criminal es posible gracias a la habilidad de los grupos criminales para manipular actores estatales tanto a nivel nacional como subnacional. Esto lo hacen mediante una combinación de coerción y sobornos, infiltración directa en las instituciones estatales y, en algunos casos, control de los procesos electorales a través del financiamiento de campañas o la eliminación de candidatos mediante asesinatos o presiones para que abandonen la contienda. Hay casos destacados de criminales que han ocupado altos cargos gubernamentales y, quizás aún más preocupante para la democracia y el estado de derecho, está la larga cadena de asesinatos de candidatos a cargos públicos, que van desde el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023, días antes de las elecciones, hasta los diez candidatos a cargos locales en Chiapas y Michoacán durante las elecciones de 2024 en México. El crimen organizado se ha convertido en un poder paralelo en partes de Brasil, Colombia, México y Ecuador.

Estas cuatro características aplican en diferente grado a los distintos grupos de crimen organizado de la región. Estos grupos varían en su capacidad militar, el grado en que gobiernan los territorios bajo su control y la forma de su gobernanza criminal.¹⁹ No todos los grupos criminales prestan servicios, regulan el comportamiento de los ciudadanos o controlan las elecciones en los territorios bajo su control. También varían en sofisticación de acuerdo con el nivel de diversificación de sus portafolios de negocios, la rentabilidad de sus actividades y el grado interconexión con redes criminales nacionales y transnacionales. Por ejemplo, en comparación con las bandas criminales de Medellín (Colombia) o Río de Janeiro (Brasil), las “maras” salvadoreñas estaban menos organizadas, no eran tan lucrativas, controlaban menos la violencia local y tenían menos conexiones con redes internacionales de crimen organizado.²⁰

El crimen organizado y la violencia obstaculizan el camino hacia el desarrollo

Durante mucho tiempo, ALC ha cojeado por un crecimiento económico anual mediocre, baja productividad y una dinámica de productividad deficiente, altos niveles de desigualdad y un gran número de personas que luchan por salir de la pobreza. Este informe argumenta que la región permanecerá atrapada en este pobre equilibrio hasta que encuentre la manera de contener las peores expresiones del crimen organizado, incluida la violencia que trae consigo.

¹⁶ Economist (2016).

¹⁷ Austin (2023); Economist (2024a).

¹⁸ Austin (2023); El Universo (2021).

¹⁹ Magaloni, Franco-Vivanco y Melo (2020).

²⁰ Blattman (2024).

Hay varios canales a través de los cuales el crimen organizado afecta el desarrollo.

Reducción y distorsión de la inversión privada. La incertidumbre sobre los derechos de propiedad asociados con la violencia criminal y la extorsión reduce y distorsiona la inversión. Las inversiones privadas —nacionales y extranjeras— no se llevan a cabo o se realizan de manera subóptima, por tipo y ubicación, cuando existe la posibilidad de que la actividad criminal impida a los inversionistas o a los negocios recuperar el retorno sobre sus inversiones.²¹ Los impuestos criminales y los gastos en seguridad y en aseguramiento aumentan los costos de transacción de los negocios, lo que reduce su competitividad y su capacidad de inversión futura.²² En algunos países, hay segmentos del territorio que están completamente fuera del alcance de las empresas legales debido a la presencia de organizaciones criminales, lo que implica enormes costos en términos de ganancias perdidas. La extorsión y el pago de tarifas por protección también pueden obstaculizar el cumplimiento con el pago de los impuestos formales, especialmente para los negocios más pequeños que tienen menos margen para absorber estos cobros. La corrupción puede alterar la composición de la inversión extranjera, ya que los inversionistas evitan colocar recursos en países donde esta práctica es generalizada, o eligen asociarse con locales para gestionar la burocracia, si la corrupción es prohibitiva.²³

Desvío de recursos públicos hacia usos improductivos. Una parte grande de los presupuestos nacionales y locales deben destinarse a gastos improductivos en seguridad y defensa para combatir el crimen y la violencia. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó recientemente el costo fiscal asociado con los gastos en seguridad pública en 1,9 por ciento del PIB, en promedio, para siete países de ALC entre 2018 y 2022, contando solo los gastos de los gobiernos nacionales.²⁴ En ausencia de crimen y violencia, una parte de estos recursos podría destinarse a inversiones en desarrollo—educación, salud, infraestructura y otros servicios del estado.

Destrucción de capital humano, físico y natural. La gobernanza criminal y la violencia afectan la formación de capital humano y la productividad. Con frecuencia, las víctimas ven comprometidas su capacidad de generar ingresos, su habilidad de aprendizaje o su productividad laboral.²⁵ Esto puede ocurrir tanto por la victimización directa como por el impacto en las oportunidades y decisiones de educación. La violencia también puede aumentar las tasas de mortalidad y discapacidad al interrumpir los servicios de salud. Los crímenes que afectan activos o propiedades representan el caso más evidente de destrucción de capital físico. Finalmente, el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y la fauna son responsables de la destrucción del capital natural a través de la deforestación y la contaminación del agua, a un gran costo para las generaciones futuras (recuadro 2.1).

Debilitamiento de las instituciones y la calidad del gobierno. El crimen organizado también erosiona el capital social, amenaza las instituciones democráticas y obstaculiza la provisión de bienes públicos en las comunidades afectadas.²⁶ Bajo la gobernanza criminal, las personas pueden perder su derecho a la participación política.²⁷ Los grupos criminales menoscaban la representación política, las instituciones democráticas y el estado de derecho en las zonas bajo su control.²⁸ La interferencia en los procesos electorales reduce la competencia política y conduce a la captura del estado, la corrupción y el debilitamiento de los gobiernos locales.²⁹

Profundización de las desigualdades. El crimen organizado y la violencia criminal afectan desproporcionadamente a los segmentos de la población que ya se están en desventaja—aquellos que viven en los barrios urbanos más pobres, las zonas rurales con presencia estatal limitada y economías ilícitas fuertes, y las comunidades fronterizas.³⁰ Si bien las personas más adineradas pueden ser objeto de extorsión y secuestro, tienen más recursos para protegerse. Las

21 Bernal et al. (2024).

22 Detotto y Otranto (2010).

23 Arcia (2012); Gaviria (2002).

24 Bisca et al. (2024).

25 Justino (2016); Prem, Vargas y Namen (2023).

26 Arjona (2021); PNUD (2013).

27 En algunos contextos, los grupos criminales establecen un orden que puede facilitar ciertas formas de participación ciudadana, transformando la naturaleza de la participación política en lugar de eliminarla.

28 Arias y Barnes (2017); Arjona (2016); Arjona, Kasfir y Mampilly (2015); Lessing (2021); Mampilly (2012).

29 Albarracín (2018); Arjona, Chacón y García-Montoya (2025); Blanco y Ruiz (2013); Carreras (2013); Ceobanu, Wood y Ribeiro (2011); Gallego (2018); Krause (2014); Malone (2010); Pérez (2003); Ponce (2019); Visconti (2020).

30 Arjona y Kalyvas (2012); GMH (2013); Gómez Gallego, Herrera Vergara y Pinilla Pinilla (2010); Yashar (2018).

RECUADRO 2.1.**Mirada a los delitos ambientales en la Amazonía brasileña^a**

La selva amazónica enfrenta una crisis creciente de crímenes ambientales, que incluyen la deforestación, la minería y la tala ilegales, el tráfico de vida silvestre, la apropiación de tierras y la biopiratería. Estas actividades ilícitas amenazan la rica biodiversidad del ecosistema y ponen en riesgo la supervivencia de las poblaciones tradicionales que dependen de él. Datos de 2024 revelan un alarmante aumento en los crímenes ambientales dentro de la Amazonía Legal. Entre principios de agosto de 2023 y finales de septiembre de 2024, la Policía Rodoviaria Federal brasileña (PRF) registró un incremento del 88 por ciento en la ocurrencia de crímenes ambientales en la región, en comparación con los 14 meses anteriores.^b El Instituto Amazónico ha señalado que la degradación forestal en los nueve estados que conforman la región ha alcanzado su nivel más alto en los últimos 15 años. Estudios del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) y el Banco Mundial destacan la necesidad urgente de implementar intervenciones efectivas contra la deforestación.

Las operaciones de minería ilegal contaminan fuentes de agua vitales y suelos con metales pesados tóxicos, poniendo en grave riesgo la salud humana y la vida acuática. La apropiación ilegal de tierras y la explotación de recursos impulsan conflictos entre comunidades tradicionales, colonos ilegales y poderosos intereses madereros y mineros, desestabilizando la región. La expansión de organizaciones criminales sofisticadas, en particular Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, en la Amazonia añade una nueva y preocupante dimensión al panorama de los delitos ambientales.^c Estas facciones aprovechan la inmensidad del territorio, la escasa vigilancia y la débil presencia de las fuerzas del orden y la ley para financiar sus operaciones a través de crímenes ambientales.

La estrecha conexión entre el narcotráfico y los crímenes ambientales es cada vez más evidente, ya que estas organizaciones utilizan rutas e infraestructura establecidas para transportar tanto narcóticos como recursos naturales extraídos ilegalmente.^d

El Banco Mundial reconoce el enorme desafío que representan los crímenes ambientales en la Amazonía. Actualmente, está evaluando sus posibles contribuciones mientras avanza en acciones iniciales, como el mapeo de los esfuerzos de diversas agencias en la región, comenzando por el Estado brasileño de Amazonas. El objetivo principal es identificar las amenazas existentes, las deficiencias operativas y las debilidades sistémicas que dificultan la aplicación efectiva de las leyes ambientales. La implementación de la metodología del Banco Mundial de Evaluación de Riesgo de Crímenes Ambientales y de Recursos Naturales, junto con el fortalecimiento de la cooperación con organizaciones clave como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Instituto Igarapé, así como la integración de estos esfuerzos con los programas existentes del Banco Mundial, son componentes fundamentales de esta estrategia.

Notas

- a. Este recuadro se basa en un texto aportado por Erwin De Nys, gerente de la Unidad de Movilización de Financiamiento Climático del Banco Mundial.
- b. Agência Brasil (2024).
- c. O Globo (2024).
- d. Amazon Watch et al. (2023).

personas que viven en la pobreza, aquellas con menores niveles de escolaridad y las minorías étnicas y de género son más propensas a ser víctimas de homicidios y de crímenes no letales que impactan sus derechos, su salud física y mental, y su capacidad para acumular capital humano.³¹ Cuando la violencia ocurre en contextos de alta desigualdad, contribuye a exacerbarla y perpetuarla.³²

Todos estos canales sumados representan costos significativos, muchos de los cuales son difíciles de cuantificar. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que las pérdidas directas de capital humano y los gastos de seguridad pública y privada en ALC en 2022 ascendieron al 3,4 por ciento del PIB.³³ Estas son las estimaciones más recientes disponibles de los costos directos del crimen. En 2010, el Banco Mundial reportó una cifra superior de 7,7 por ciento del PIB solo para Centroamérica, teniendo en cuenta los costos materiales y de salud, además de los costos en seguridad.³⁴

¿ Por qué está creciendo el crimen organizado en ALC?

No es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región. Sin embargo, una serie de factores superpuestos podrían estar contribuyendo.

- Durante la década de 2010, la demanda global de cocaína, oro ilegal y tráfico de migrantes se disparó.³⁵ Las mejoras en la calidad de la cocaína, junto con la estabilidad de los precios internacionales de esta droga (al menos desde 2015), resultaron en una reducción de los precios reales.³⁶ El auge de la demanda atrajo nuevos actores al negocio. Por ejemplo, el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, cuya fuente inicial de ingresos fue el microtráfico de drogas en cárceles y luego en São Paulo, ahora participa en el envío de cargamentos de cocaína al extranjero, principalmente a Europa, y se ha convertido en un distribuidor internacional a gran escala.³⁷ El aumento en los precios de las materias primas impulsó el crecimiento de la minería ilegal.³⁸ Las rentas generadas por el tráfico de migrantes, alimentadas por la migración global hacia Estados Unidos a través de la frontera mexicana, proporcionaron a los grupos criminales mayores ingresos para invertir en otros negocios.³⁹
- Las represiones gubernamentales después de 2005 provocaron una reorganización de los grupos criminales en ALC, creando un nuevo panorama de actores que compiten por influencia.⁴⁰ Esto, combinado con niveles récord de producción y tráfico de drogas, alteró la geografía de la violencia letal, ya que los grupos criminales recurrieron a la fuerza para proteger plantaciones, rutas de tránsito y puntos de venta.⁴¹ Existe evidencia de que la violencia en México se intensificó significativamente como consecuencia de las operaciones contra el narcotráfico y las incautaciones de drogas en Colombia entre 2006 y 2009.⁴²
- La pandemia del COVID-19 generó nuevas oportunidades y desafíos para el crimen organizado en todo el mundo.⁴³ En Colombia y México, la crisis permitió que las organizaciones criminales ganaran legitimidad y poder al brindar apoyo social y gobernanza, en algunos casos reemplazando al Estado en zonas de marcada pobreza y desigualdad.⁴⁴ En respuesta al cierre de fronteras durante la pandemia, el Tren de Aragua (Venezuela) pasó de cobrar tarifas para facilitar el paso de los migrantes, a establecer su propia operación, que incluye la propiedad de empresas de transporte y alojamiento, lo que le permite obtener enormes ganancias mediante la

31 Doran (2017); Soares (2006).

32 Amnistía Internacional (2016); Cerqueira et al. (2019); CEPAL (2018); González (2019); CIDH (2015); International Crisis Group (2020); Wallace (2020).

33 Pérez-Vincent et al. (2024).

34 Banco Mundial (2010) basado en Acevedo (2008).

35 Economist (2023b); OIM (2021); UNODC (2024).

36 UNODC (2024).

37 International Institute for Strategic Studies (2024).

38 Idrobo, Mejía y Tribin (2014).

39 Financial Times (2024).

40 Calderón, Robles y Magaloni (2015); Dell (2015); Guerrero (2011).

41 UNODC (2023a).

42 Castillo, Mejía y Restrepo (2020).

43 Aziani et al. (2023).

44 Tamayo Gómez (2020).

explotación de migrantes en todo el continente.⁴⁵ La caída repentina de los ingresos facilita el reclutamiento de personas para el crimen, lo que también pudo haber jugado un rol en la expansión del crimen organizado después de la pandemia.⁴⁶

- La mayor producción y disponibilidad de armas han facilitado la expansión del crimen organizado hacia nuevas áreas y mercados.⁴⁷ En 2023, más de dos tercios de los homicidios en América Latina involucraron armas de fuego, y en el Caribe, la proporción alcanzó el 78 por ciento, la más alta a nivel global.⁴⁸ A pesar de los estrictos controles de armas en ALC, cada año aproximadamente 253.000 armas de fuego son introducidas de manera ilícita en la región.⁴⁹ Los expertos advierten que los esfuerzos nacionales para reducir el crimen organizado serán insuficientes a menos que se aborden estos flujos.⁵⁰
- Los grupos de crimen organizado se han vuelto cada vez más transnacionales. Quedaron atrás los días en que un solo grupo—el Cartel de Medellín—controlaba la producción y distribución de cocaína refinada en el mercado estadounidense. Hoy en día, múltiples redes criminales colaboran a nivel global para manejar cadenas de suministro complejas y millones de dólares, y su éxito depende de trabajar con otras organizaciones criminales y funcionarios estatales corruptos a través de las fronteras. Un hecho relacionado es la presencia creciente de actores criminales extranjeros en los países de ALC. En 2023, once países de la región estuvieron entre los 50 primeros por el puntaje de GI-TOC que mide la presencia de actores criminales extranjeros, una medida que apunta precisamente a la creciente interconexión internacional de los negocios del crimen organizado. No es raro escuchar sobre asesinatos o capturas de miembros de grupos criminales europeos reconocidos en ciudades latinoamericanas.⁵¹
- Los grupos criminales están diversificando cada vez más sus portafolios de negocios. Esta diversificación les permite absorber pérdidas. La capacidad de lavado de dinero y la penetración en la economía legal forman parte de esta estrategia.⁵²
- La innovación tecnológica, especialmente en tecnologías digitales, ha ampliado el portafolio de negocios criminales y ha contribuido a mejorar la eficiencia de las operaciones criminales. Por ejemplo, las tecnologías de navegación avanzada permiten a las organizaciones criminales diseñar rutas marítimas más eficientes.⁵³ Los avances tecnológicos también han dado paso al cibercrimen y a la aparición de grupos criminales híbridos, en los que humanos y máquinas colaboran estrechamente.⁵⁴ El uso creciente de criptomonedas para el lavado de dinero, debido a la dificultad de rastrearlas, cae también en esta categoría de la innovación tecnológica.

45 Economist (2023c).

46 Blattman (2023); Chassang y i Miquel (2009).

47 Aguirre y Muggah (2020); Pérez Ricart (2024); Solmirano (2023).

48 Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la UNODC. En el caso de algunos países, los datos disponibles más recientes corresponden a 2021 o 2022.

49 Dube, Dube y García-Ponce (2013); McDougal et al. (2013); Pérez Esparza y Weigend (2015); Pérez Ricart (2021); Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (2023); Weigend Vargas et al. (2023); Pérez Ricart (2024).

50 La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) de Estados Unidos informa que alrededor del 68 por ciento de las armas en las escenas del crimen mexicano provienen de los Estados Unidos. En América Central, el 55 por ciento de las armas de fuego rastreadas provienen de Estados Unidos; en algunos países del Caribe, esta cifra puede llegar hasta el 99 por ciento, como en Bahamas (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos, 2022a y 2022b).

51 GI-TOC (sin fecha); Saiz (2024).

52 McDermott (2020).

53 UNODC (2023b).

54 Chatterjee (2005); Di Nicola (2022); Grabosky (2007).

El crimen organizado es mucho más letal en ALC que en otras regiones

En homicidios, ALC sufre los niveles más altos de violencia del mundo

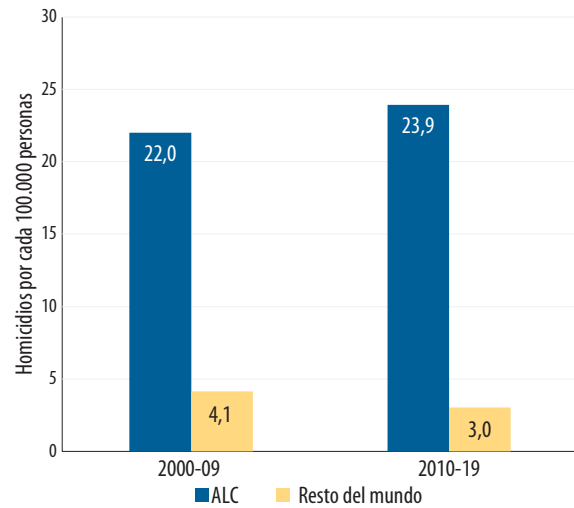
Los homicidios no son la única manifestación de la violencia. Sin embargo, la tasa de homicidios es la estadística más confiable comparable a nivel internacional.⁵⁵ Por esta medida, la violencia en ALC es incomparablemente alta. Aunque la población de la región representa aproximadamente el 9 por ciento del total del mundo, ALC registra un tercio del total de los homicidios.⁵⁶ Más aún, la brecha entre la tasa de homicidios en ALC y el resto del mundo se ha ampliado en los últimos 20 años. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en ALC fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1); en la segunda década, fue 8 veces mayor (23,9 frente a 3,0) (figura 2.4). El promedio de ALC refleja una tendencia regional generalizada: todas las subregiones de ALC sufren altos niveles de violencia. Las tasas de homicidio en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo.

Las tasas de homicidio en la región durante el último período quinquenal disponible (2018-2022) superan lo que predeciría el nivel de desarrollo de los países. Son significativamente altas en comparación con países de ingresos per cápita similares (figura 2.5, panel a) y con niveles de desigualdad equivalentes (figura 2.5, panel b).

FIGURA 2.4.

ALC tiene la tasa promedio de homicidios más alta del mundo

Homicidios por cada 100.000 personas, ALC, y el resto del mundo, 2000-09 y 2010-19



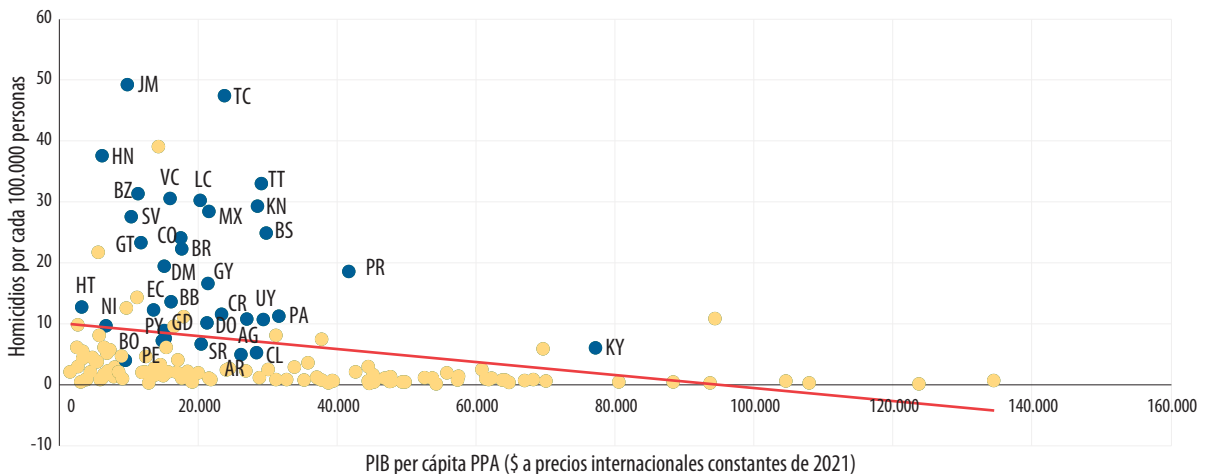
Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nota: Los agregados regionales se calculan como promedios simples entre países. Para evitar comparar conjuntos de países diferentes, los datos faltantes fueron interpolados por un máximo de cinco años consecutivos. Los países con más de cinco años consecutivos de datos faltantes (Bolivia, Perú y Haití) fueron excluidos de los promedios de ALC. ALC = América Latina y el Caribe.

FIGURA 2.5.

Los países de ALC sufren más violencia letal que otros con niveles de desarrollo y desigualdad similares

a. Homicidios por cada 100.000 personas versus PIB per cápita, promedio de 2018-22

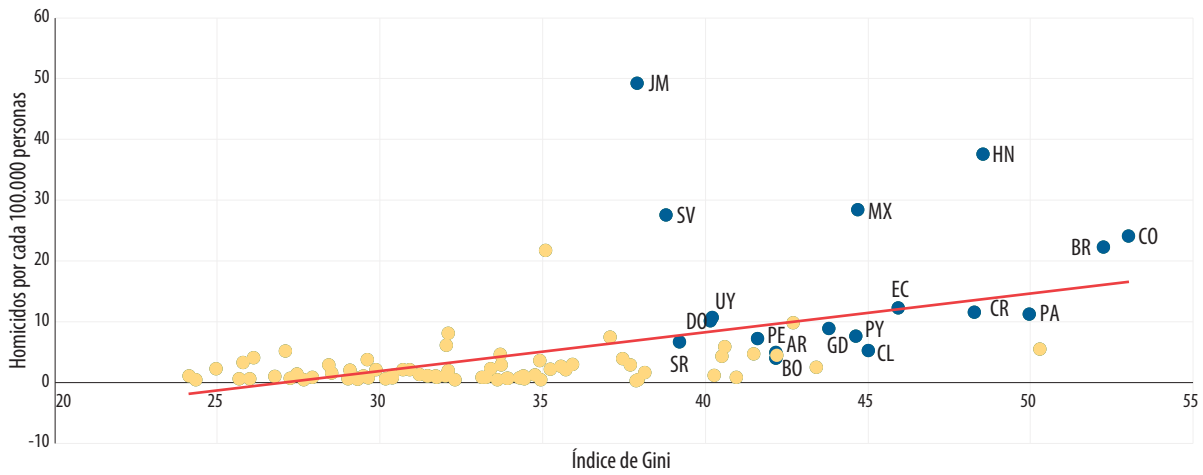


55 Las tasas de homicidios miden el número de homicidios en relación con la población de una unidad geográfica durante un período específico.

56 Las tasas de denuncia de delitos violentos que no son homicidios (como robos, asaltos y violaciones) suelen ser bajas y varían significativamente según el tipo de crimen y las características individuales (Soares, 2004).

Figura 2.5. Los países de ALC sufren más violencia letal que otros con niveles de desarrollo y desigualdad similares

b. Homicidios por cada 100.000 personas versus desigualdad de ingresos, promedio de 2018-22



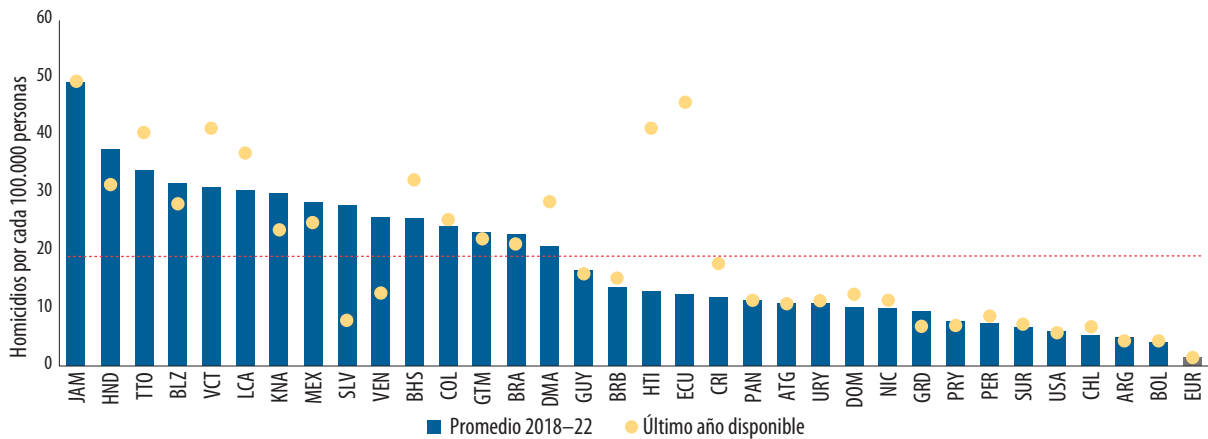
Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en los Indicadores del Desarrollo Mundial y datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
 Nota: Los países de ALC se muestran en azul. Las etiquetas de los datos utilizan los códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés). ALC = América Latina y el Caribe; PPP = Paridad de poder adquisitivo.

El promedio de ALC oculta una variación sustancial entre países en cuanto a la intensidad de la violencia medida por homicidios.⁵⁷ Las tasas promedio de homicidio en 2018-2022 varían desde 49 homicidios por cada 100.000 habitantes en Jamaica y 38 en Honduras (las más altas) hasta 5 en Argentina y 4 en Bolivia (las más bajas) (figura 2.6). Las tendencias de la violencia letal también difieren significativamente entre países. La tasa de homicidios más reciente disponible para cada país (punto amarillo en la figura 2.6) muestra una mejora significativa en algunos países en los últimos años, en particular El Salvador y Venezuela. En contraste, el problema se ha agravado considerablemente en otros, especialmente en Ecuador y Haití.

FIGURA 2.6.

Las tasas de homicidio varían significativamente entre países en ALC

Tasa promedio de homicidios, ALC y comparadores, 2018-22 y último año disponible



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
 Nota: La línea discontinua representa el promedio simple de homicidios en ALC entre 2018-22. Los puntos amarillos muestran el dato más reciente disponible para cada país. La figura utiliza los códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés). ALC = América Latina y el Caribe.

57 La violencia es, de hecho, un fenómeno localizado que varía drásticamente dentro de los países, las ciudades, los barrios e incluso segmentos de la calle.

La victimización está distribuida de manera más uniforme entre países que los homicidios

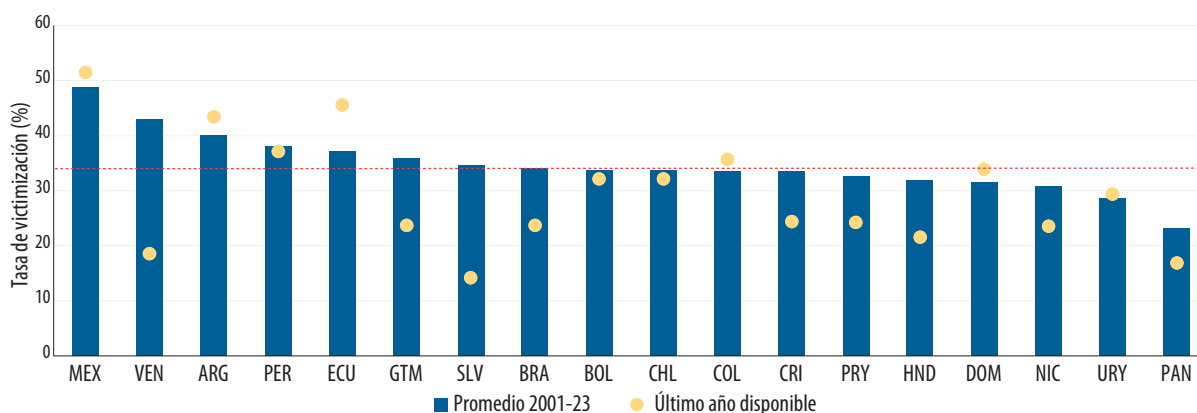
Las encuestas armonizadas ofrecen una aproximación alternativa para medir el crimen y la violencia de manera comparable entre países. Según la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por su sigla en inglés), un tercio de los encuestados en ALC afirma que ellos o un miembro de su familia fueron víctimas de un crimen en el último año. Esta cifra es tres veces mayor que el promedio del resto del mundo. Estos niveles (y la brecha implícita) han permanecido prácticamente inalterados en los últimos 15 años.⁵⁸ Las tasas de victimización basadas en encuestas capturan crímenes violentos letales y no letales y crímenes contra la propiedad, de modo que informativas sobre los patrones generales del crimen.

La Encuesta Mundial de Valores (WVS, por su sigla en inglés) no permite comparar tasas de victimización entre los países de ALC en los mismos años, ya que solo un subconjunto de países participa en cada ola de la encuesta. Sin embargo, otra encuesta de opinión pública, Latinobarómetro, incluye una pregunta similar sobre victimización, lo que permite comparar de manera consistente un mayor número de países de ALC en el tiempo (figura 2.7). Los niveles de victimización están más uniformemente distribuidos en la región en comparación con los homicidios, excepto por niveles muy altos en México y más bajos en Panamá. Esto significa que la victimización es elevada incluso en países con tasas de homicidio relativamente bajas, como Argentina y Perú.

FIGURA 2.7.

La victimización se distribuye de manera más uniforme que los homicidios en ALC

Tasas de victimización, países de ALC, promedio 2000-23 y último año disponible



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en Latinobarómetro.

Nota: La línea discontinua representa el promedio simple de todos los países de ALC. El último año disponible es 2023, excepto para Nicaragua, cuyo último dato corresponde a 2020. La figura utiliza los códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés). ALC = América Latina y el Caribe.

La violencia letal del crimen organizado predomina hoy en ALC

La mayoría de los países no pertenecientes a ALC que se encuentran entre los 50 primeros por su puntaje de criminalidad tienen tasas de homicidio inferiores a 10 por cada 100.000 personas. Las excepciones son Nigeria, Sudáfrica y Sudán del Sur. En contraste, todos los países de ALC en este grupo, excepto Paraguay y Perú, tienen tasas de homicidio superiores a 10 por cada 100.000 personas, y siete países tienen tasas de homicidio por encima de 20 por cada 100.000. Estas cifras sugieren que el crimen organizado es más letal en ALC que en la mayoría de otros lugares, lo que plantea la pregunta de qué más hace diferente a la región.

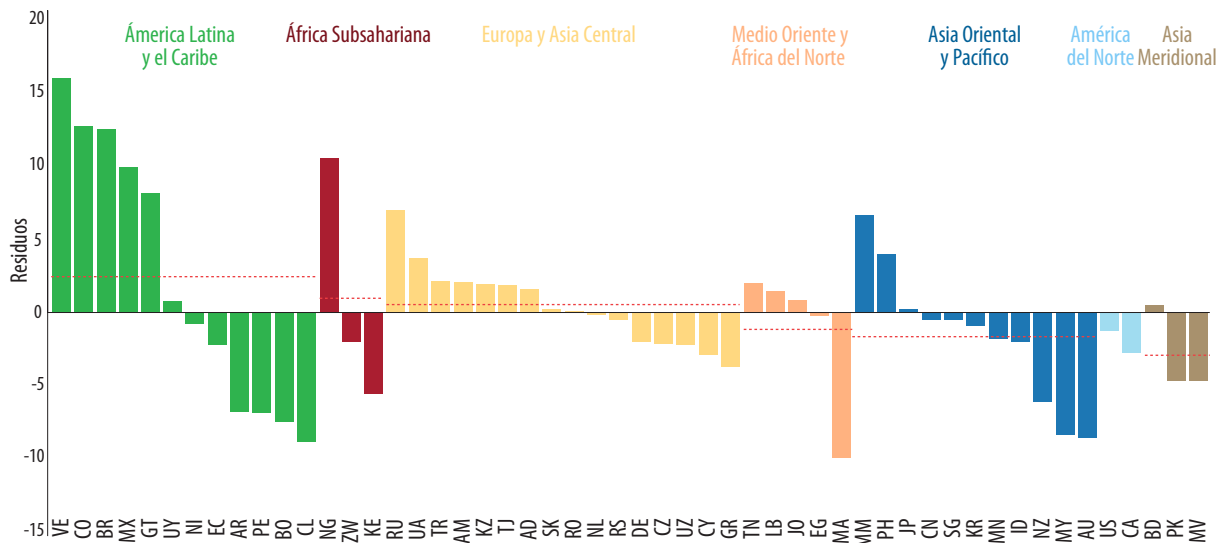
58 Debido a que no todos los países de la WVS aparecen en todas las olas, las tasas promedio de victimización en estos cálculos se basan en una muestra reducida de los países que aparecen en ambos períodos. Específicamente, comparamos el período de 2010 a 2014 con el período de 2017 a 2023. Cada país de la muestra aparece en ambos períodos al menos una vez.

La figura 2.8 muestra el nivel de “exceso” de homicidios, es decir, la diferencia entre la tasa de homicidios observada y la que se predeciría con base en el nivel de victimización reportado en la muestra de países de la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por su sigla en inglés).⁵⁹ ALC tiene, por mucho, los niveles más altos de exceso de violencia letal (líneas horizontales), seguida por África Subsahariana y Europa y Asia Central. Dentro de ALC, los países con mayor exceso de violencia letal son Venezuela, Colombia, Brasil, México y Guatemala. En contraste, países como Chile, Bolivia, Perú y Argentina reportan tasas de homicidio relativamente bajas en relación con sus niveles generales de crimen. Este indicador de exceso de violencia letal está altamente correlacionado con el puntaje de criminalidad del (GI-TOC, por su sigla en inglés) en ALC (0,63). A nivel global, la correlación es menor (0,34), lo que confirma que hay algo particular sobre el crimen organizado y la violencia en ALC.

FIGURA 2.8.

ALC es la región del mundo con el mayor exceso de violencia criminal letal

Residuos de la tasa de homicidios frente a la tasa de victimización (promedio 2017-22)



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por su sigla en inglés).
 Nota: La figura utiliza los códigos de países de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés). ALC = América Latina y el Caribe.

La debilidad institucional en áreas clave agrava el problema en lugar de mitigarlo

El hecho de que el crimen organizado en ALC genere más violencia letal que en otras regiones puede explicarse, en parte, por disputas persistentes entre organizaciones criminales por el control del territorio y los mercados. Pero, también indica debilidad del Estado en la capacidad de respuesta. Erradicar por completo el crimen organizado es poco probable. Pero una mejor acción del Estado puede ayudar a “gestionar” su presencia y reducir sus manifestaciones más dañinas, como probablemente ha sido el caso en otras regiones donde la presencia del crimen organizado no tiene una correlación tan alta con la violencia letal y parece tener un menor impacto sobre el desarrollo económico.

59 La tasa de homicidios a nivel nacional (promediada durante el período 2017-22) se usa en una regresión como variable dependiente con respecto al promedio de victimización registrado durante el mismo período por la WVS. Los residuos de esta regresión pueden interpretarse como la fracción de homicidios que no puede explicarse por el crimen en general (según se muestra en las tasas de victimización de las encuestas): es decir, el exceso de violencia letal de un país para un determinado nivel de criminalidad. Los valores positivos de los residuales indican que las tasas de victimización predicen tasas de homicidios más bajas que las observadas; es decir, que la criminalidad es más letal. Los resultados son muy similares si, en lugar de los residuos de regresión, se computa el cociente entre homicidios y tasas de victimización. La correlación de las clasificaciones de los países entre las dos mediciones es de 0,79.

Los países de ALC se caracterizan por tener mercados laborales que funcionan mal y amplios segmentos de la población que no tienen oportunidades para construir vidas dignas. También se caracterizan por debilidades en los tres pilares de la política de seguridad: cárceles, fuerzas de policía y sistemas de justicia. La discusión a continuación muestra que la región tiene serios problemas en las tres dimensiones y destaca intervenciones urgentes de política pública que los gobiernos deben realizar para mejorar su capacidad de hacer cumplir la ley en la lucha contra el crimen organizado.

Las cárceles de ALC deben ser transformadas para cumplir sus objetivos⁶⁰

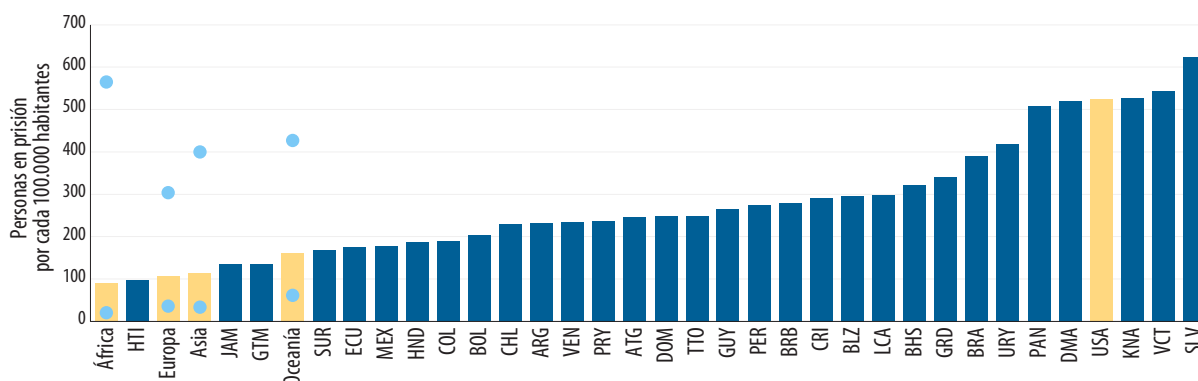
Las cárceles deberían contribuir a la reducción del crimen a través de la incapacitación, la disuasión y la resocialización.⁶¹ La incapacitación se refiere a aislar a los criminales de la sociedad para que no puedan delinquir mientras están encarcelados. La disuasión busca desalentar el comportamiento criminal potencial con la amenaza de encarcelamiento. La resocialización tiene como objetivo mejorar los resultados de los reclusos tras su liberación. Los sistemas penitenciarios de ALC fracasan en los tres frentes.

Los niveles de encarcelamiento en la región superan los de la mayoría del mundo (figura 2.9). Una excepción entre los países de altos ingresos es Estados Unidos, donde las tasas de encarcelamiento han sido históricamente altas. En ALC, dos casos extremos son El Salvador, con una tasa de encarcelamiento excepcionalmente alta, y Haití, con una tasa significativamente baja. Las altas tasas de encarcelamiento no siempre corresponden a menos crimen.

FIGURA 2.9.

Los países de ALC tienen tasas de encarcelamiento relativamente altas

Personas en prisión por cada 100.000 habitantes, 2021 o 2022



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nota: Los países de ALC se muestran en azul oscuro. Las barras de las regiones del mundo (amarillo) presentan el país mediano, mientras que los puntos azul claro indican los valores mínimos y máximos de cada región. Las etiquetas de los países utilizan los códigos de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por su sigla en inglés). ALC = América Latina y el Caribe.

La preocupación más urgente es que, en muchos lugares, los grupos de crimen organizado han tomado el control de las cárceles y dirigen actividades criminales desde su interior.⁶² La cárcel ya no es impedimento para que los reclusos cometan nuevos crímenes, y el encarcelamiento ha dejado de ser una amenaza útil para disuadir la actividad criminal. En cambio, se ha convertido en un paso dentro de la carrera criminal de un pandillero. Las cárceles en ALC no solo funcionan como “zonas seguras” para los líderes criminales, sino también sirven como centros de reclutamiento y entrenamiento para nuevos miembros de bandas criminales. En Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho surgieron dentro de las cárceles como una estrategia de los reclusos para protegerse de la violencia carcelaria. Con el tiempo, estas bandas crecieron en tamaño e influencia, evolucionando hasta convertirse

60 En esta sección se usa el término cárceles para referirse tanto al sistema carcelario como al penitenciario.

61 Becker (1968); Bhuller et al. (2020); Drago, Galbiasi y Vertova (2009); Kuziemko (2013).

62 Schargrodsky y Tobón (2025).

en organizaciones criminales transnacionales.⁶³ De manera similar, el Tren de Aragua tuvo su origen en las cárceles de Venezuela.⁶⁴ Las “maras” salvadoreñas más grandes y violentas—Barrio 18 y MS-13—se crearon en cárceles de Los Ángeles, en Estados Unidos. Otras de las bandas más peligrosas no se originaron en las cárceles, pero desde el encarcelamiento sus líderes controlan y organizan operaciones externas, y negocian y regulan operaciones con líderes de grupos criminales rivales que también están presos.⁶⁵

Las autoridades en ALC deben retomar el control de las cárceles mediante la interrupción de las comunicaciones celulares y otras formas de comunicación, el sometimiento de los líderes de las bandas criminales a controles más estrictos en instalaciones de alta seguridad, y una mejor asignación de los reclusos para evitar la exposición de criminales menores a miembros de grupos criminales al interior de las cárceles. Por supuesto, estas intervenciones son desafiantes, porque los operativos dentro de las cárceles pueden provocar represalias violentas tanto dentro como fuera de las cárceles. Por ejemplo, en Rosario (Argentina), el endurecimiento de las condiciones de seguridad carcelaria en marzo de 2024 provocó una serie de asesinatos al azar en las calles, ordenados por los líderes encarcelados de la banda Los Monos como protesta. No obstante, las autoridades respondieron con firmeza, y la tasa de homicidios descendió rápidamente (ver recuadro 2.2).

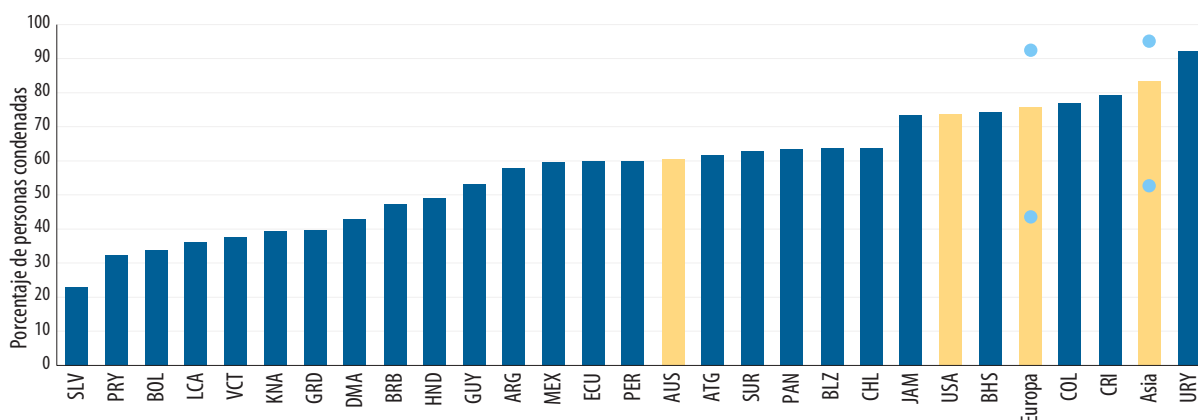
Los sistemas carcelarios de ALC se caracterizan también por tener grandes proporciones de prisioneros no sentenciados, malas condiciones y altos niveles de hacinamiento (figura 2.10). De los 24 países de ALC con datos disponibles, seis tienen más del doble de reclusos de lo que permite su capacidad, y solo tres operan por debajo de ella. En promedio, casi la mitad de los presos no ha sido sentenciada. El Salvador es un caso extremo, donde solo el 23 por ciento de los reclusos ha recibido sentencia.

Una segunda prioridad es mejorar las condiciones carcelarias. Proveer a los reclusos de mejor infraestructura y servicios, reducir los niveles de hacinamiento y aumentar la proporción de guardias por interno ha demostrado ser efectivo en la reducción de la reincidencia. En algunas regiones de Colombia, estas mejoras llevaron a una disminución del 36 por ciento en las tasas de reincidencia.⁶⁶ Resultados similares se han observado en Estados Unidos.⁶⁷ Mejorar las condiciones en las cárceles incluye implementar programas de resocialización para los reclusos.⁶⁸

FIGURA 2.10.

Las cárceles en ALC están hacinadas y muchos reclusos no han sido sentenciados

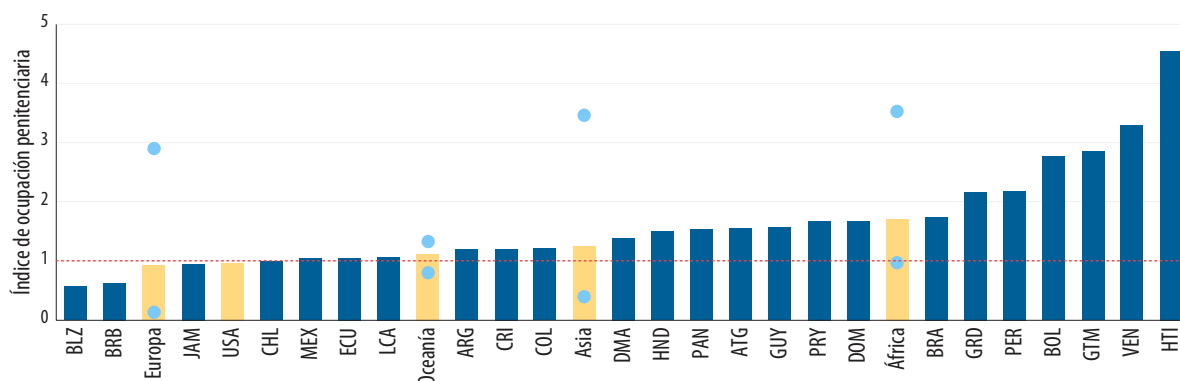
a. Proporción de personas en prisión que han sido sentenciadas, 2021 o 2022



63 Biondi (2016); Lessing (2010); Lessing y Willis (2019).
 64 Sampó y Troncoso (2024).
 65 Blattman et al. (2024a, 2024b); Kalsi (2018); Sviatschi (2022).
 66 Tobón (2022).
 67 Chen y Shapiro (2007).
 68 Alsan et al. (2024); Davis, Meares y Arnesen (2025).

Figura 2.10. Las cárceles en ALC están hacinadas y muchos reclusos no han sido sentenciados (continuación)

b. Relación entre el número de personas en la cárcel y la capacidad oficial del sistema penitenciario, 2021 o 2022



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nota: Los países de ALC se muestran en azul oscuro. Las barras de las regiones del mundo (en amarillo) presentan el país mediano, mientras que los azul claro indican los valores mínimos y máximos de cada región. El indicador de "proporción de sentenciados" se calcula dividiendo el número de reclusos con sentencia por la población total encarcelada. El dato de El Salvador es de Estudios Carcelarios Mundiales (WPS, por su sigla en inglés), por falta de información completa en UNODC para este país. Los datos de capacidad carcelaria de Estados Unidos corresponden a 2019, y los de Haití a 2015. ALC = América Latina y el Caribe.

Para reducir el hacinamiento, es fundamental considerar alternativas al encarcelamiento. Estas alternativas pueden ser especialmente valiosas para evitar que jóvenes y criminales de bajo nivel sufran una experiencia de encarcelamiento criminógena bajo la influencia de organizaciones criminales.⁶⁹ En Argentina, el monitoreo electrónico ha demostrado ser una alternativa rentable a la cárcel, reduciendo la reincidencia en aproximadamente 50 por ciento.⁷⁰ Reducir la detención preventiva y acortar la duración de las sentencias son otras estrategias que pueden disminuir la reincidencia.⁷¹ La justicia restaurativa y las terapias conductuales han mostrado resultados prometedores.⁷² La mayoría de estas alternativas son de bajo costo y potencialmente costo-efectivas comparadas con el encarcelamiento tradicional.

Finalmente, el mundo ha estado siguiendo la estrategia de "mano dura" del gobierno salvadoreño, puesta en marcha en 2021 con el propósito de incapacitar a la MS-13, el Barrio 18 y otros grupos criminales a través del encarcelamiento masivo.⁷³ Más de 73.000 hombres jóvenes han sido arrestados.⁷⁴ La resultante caída de los homicidios (de 18 a 2,4 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2023) y la recuperación del control del territorio por el estado se tradujeron en un fuerte apoyo de la ciudadanía.⁷⁵ La estrategia, sin embargo, ha sido cuestionada por desconocer la separación de poderes en el gobierno y el debido proceso.⁷⁶ En otros países de ALC, los resultados de corto plazo de estrategias de mano dura han demostrado ser altamente dependientes de las particularidades de cada contexto. Algunos de estos intentos han fortalecido el control de las cárceles por parte de las organizaciones criminales y extendido su influencia más allá de las fronteras nacionales al forzar la fragmentación y reubicación de los grupos.⁷⁷

69 Agan, Doleac y Harvey (2023); Agan et al. (2023); Aizer y Doyle (2015); Bhuller et al. (2020); Eren y Mocan (2021); Kleinberg et al. (2018); Kuziemko y Levitt (2004).

70 Di Tella y Scharfrodsky (2013). Estos hallazgos se replicaron en Estados Unidos y Australia (Grenet, Grönqvist y Niknami, 2024; Williams y Weatherburn, 2022).

71 Donohue y Wolfers (2006); Estelle y Phillips (2018); Polinsky y Riskind (2019); Rose (2021); Rose y Shem-Tov (2021).

72 Shem-Tov, Raphael y Skog (2024).

73 La represión fue posible en virtud de una declaración de estado de emergencia que suspendió los derechos constitucionales con el fin de combatir a estos grupos (Human Rights Watch, 2024). Aunque originalmente se había establecido que duraría 30 días, el estado de emergencia se ha prorrogado 34 veces hasta el momento (Economist, 2023a).

74 Human Rights Watch (2024).

75 Una reducción previa de la violencia letal, de 105 a 20 homicidios por cada 100.000 personas entre 2015 y 2020, había sido el resultado de un acuerdo con la MS-13 y el Barrio 18 para disminuir la violencia a cambio de mejores condiciones carcelarias y liberación anticipada. A pesar de su éxito en la contención de la violencia letal, la tregua aumentó la extorsión (Blattman, 2024; Dudley, 2020; Insight Crime, 2024; Meléndez-Sánchez y Winter, 2024; Papadovassilakis, 2023). A pesar de la prohibición constitucional de la reelección inmediata, el presidente Nayib Bukele fue reelegido el 4 de febrero de 2024, ganando por un amplio margen. Los índices de aprobación del Gobierno oscilan entre el 80 y el 90 por ciento, los más altos de América Latina. Las encuestas muestran que las personas de otros países de ALC pueden tener una opinión incluso más favorable del presidente Bukele que los salvadoreños (Economist, 2023a, 2024a).

76 Amnistía Internacional (2022); Cristosal (2023); Economist (2023a); Human Rights Watch (2024).

77 Akee et al. (2014); Blattman (2024); Davenport (2007); Golcalves et al. (sin fecha); Lessing (2013); Meléndez-Sánchez y Winter (2024).

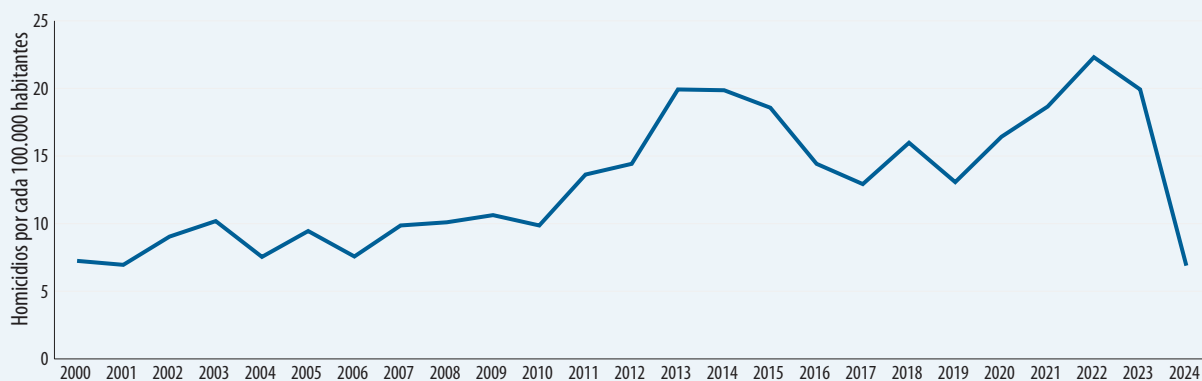
RECUADRO 2.2.**La intervención en las cárceles de Rosario en 2024^a**

Desde 2013, el crimen violento aumentó significativamente en la ciudad de Rosario (Argentina). Este fenómeno está estrechamente relacionado con el narcotráfico, con la mayoría de asesinatos asociados con disputas territoriales entre la banda criminal más grande de Rosario —Los Monos— y organizaciones rivales. A pesar del encarcelamiento de la mayoría de los líderes de Los Monos, la tasa de homicidios siguió aumentando, hasta 22 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023 (cinco veces la tasa de Argentina). La corrupción dentro del sistema carcelario permitía a los líderes de los grupos criminales encarcelados continuar con sus actividades criminales fuera de la cárcel. Por ejemplo, en 2022, Los Monos abrieron fuego contra la residencia de un juez federal que había ordenado el traslado de cárcel de uno de sus líderes.

A inicios de 2024, las autoridades federales y provinciales implementaron el Operativo Bandera, que incluyó endurecer sustancialmente las condiciones carcelarias de los líderes de los grupos criminales, hacer cumplir la prohibición del uso de teléfonos celulares, implementar inspecciones repentinas, reasignar presos, agrupar a los miembros de cada banda criminal en pabellones separados y ejercer un mayor control sobre las visitas. Los grupos criminales respondieron con una serie de asesinatos aleatorios de civiles en las calles. Sin embargo, el gobierno mantuvo las condiciones de encarcelamiento más estrictas para los líderes de las bandas criminales, y respondió con el despliegue de 1.400 agentes de seguridad federal adicionales en la ciudad, en coordinación con la policía provincial. El Operativo Bandera tuvo un éxito casi inmediato, reduciendo la tasa de homicidios de Rosario en un 65 por ciento (figura R2.1.1).

FIGURA R2.2.1.**La tasa de homicidios cayó abruptamente después de la intervención de las cárceles**

Homicidios por cada 100.000 habitantes, Rosario (Argentina), de 2000 a 2024



Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal del año 2000 al 2023; Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe para el año 2024.

Notas

a. Este recuadro se basa en Schargrodsky y Tobón (2025).

Unas fuerzas de policía que funcionen bien podrían hacer una gran diferencia, pero darles forma es difícil

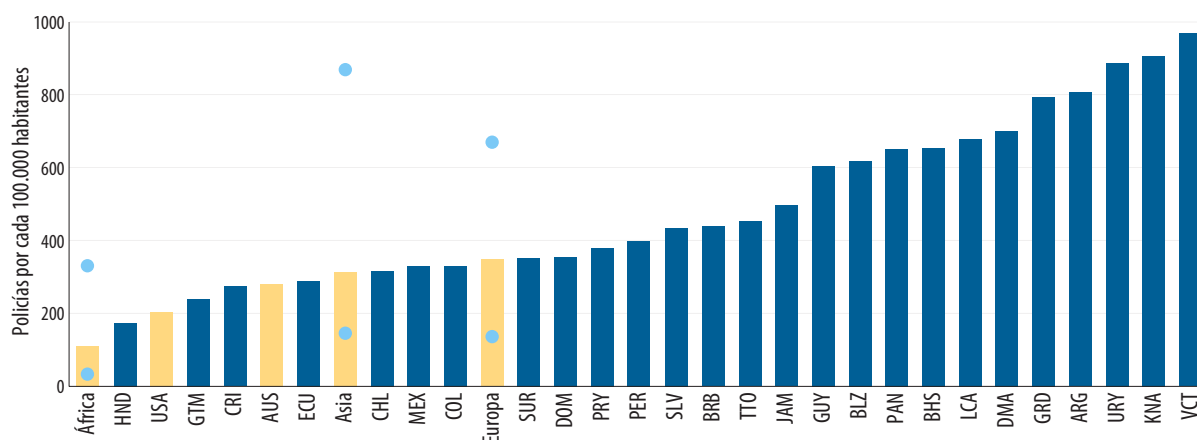
Las fuerzas de policía reducen el crimen a través de la disuasión (la presencia policial desincentiva el crimen al aumentar la probabilidad de aprehensión de los presuntos criminales) y la incapacitación (los criminales capturados por la policía no pueden cometer nuevos crímenes). Al igual que en el caso de las cárceles, la mayoría de las fuerzas de policía en ALC fallan en el cumplimiento de sus funciones.

El tamaño de las fuerzas de policía de ALC oscila entre 173 por cada 100.000 habitantes en Honduras y 968 por cada 100.000 en San Vicente y las Granadinas. La región tiene la mayor variación en el tamaño de las fuerzas de policía entre países y la mediana regional más alta. Sin embargo, la mayoría de los países de ALC se encuentran dentro del rango europeo con respecto al tamaño de la policía por cada 100.000 habitantes. (figura 2.11). A partir de estas cifras, es imposible decir que los países de ALC tienen excesos o deficiencias de capacidad policial, porque hay otros factores además del tamaño que son determinantes de la efectividad de la policía.

FIGURA 2.11.

El tamaño de las fuerzas de policía varía entre países

Personal policial por cada 100.000 habitantes, países de ALC y comparadores, 2021 o último año disponible desde 2015



Fuente: Cálculos del Banco Mundial basados en datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nota: Los países de ALC se muestran en azul oscuro. Las barras de las regiones del mundo (en amarillo) presentan el país mediano, mientras que los puntos azul claro indican los valores mínimos y máximos de cada región. Los datos de Chile corresponden a 2017. Brasil no se incluye en el gráfico ya que no hay información disponible después de 2013. ALC = América Latina y el Caribe.

En efecto, el tamaño de la policía puede ser un problema en lugares donde el crimen es alto y las fuerzas de policía son pequeñas. Pero no existe un número ideal de policías por persona ni alguna razón por la cual el personal policial tendría que distribuirse de manera homogénea sobre el territorio. Por el contrario, la forma en la que se despliega el personal policial sobre la geografía de un país o una ciudad puede jugar un papel crítico. Este es un caso en el cual la disponibilidad de mejores datos y herramientas de procesamiento, como la inteligencia artificial y el análisis de datos, podrían mejorar las estrategias de patrullaje y la asignación eficiente de recursos en tiempo real. Las estrategias geográficas incluyen intervenciones específicas destinadas a recuperar el control del Estado sobre el territorio, como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) de Brasil, que buscaban recuperar el control de las favelas dominadas por grupos criminales, y el Plan de Control Territorial de El Salvador, que restituyó la autoridad estatal en áreas controladas por bandas criminales.⁷⁸

78 Monteiro y Weintraub (2025).

La asignación de recursos entre las actividades de patrullaje e investigación es otra dimensión que importa para la efectividad de la policía en la lucha contra el crimen organizado. Con frecuencia hay un sesgo a favor del patrullaje porque el despliegue visible de la policía responde a las demandas de los ciudadanos por una mayor presencia policial. Sin embargo, el patrullaje ayuda a combatir el crimen común, pero no es suficiente para hacer frente al crimen organizado, que requiere mayores capacidades de investigación policial.

Además, las fuerzas de policía de ALC suelen estar mal entrenadas para abordar los desafíos que enfrentan, en particular los que presenta el crimen organizado. Un mejor entrenamiento en las mejores prácticas policiales para el patrullaje y la investigación puede hacer la diferencia. También se requiere mayor apoyo institucional, incluyendo mejores condiciones de trabajo, prácticas de bienestar y remuneración. Esto último es necesario para prevenir la corrupción, reducir la rotación del personal, abordar los problemas de salud mental (comunes a la ocupación) y fomentar la lealtad al Estado entre la policía.⁷⁹

Otro problema a la hora de considerar la efectividad de la policía en ALC es la necesidad de coordinación con otros organismos estatales y, en ocasiones, con otras fuerzas de seguridad. Las fuerzas de policía deben coordinar y colaborar con otros organismos del Estado para ser efectivas. La Ciudad de México es un buen ejemplo de una estrategia de múltiples pilares para combatir el crimen, basada en gran medida en la inteligencia policial y la coordinación interinstitucional bajo un mando centralizado (recuadro 2.3). La coordinación también es esencial cuando las fuerzas locales y nacionales se superponen. Además, en respuesta a la creciente presencia de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, es necesaria una mejor coordinación (a través de un mando centralizado u otros mecanismos) de las intervenciones policiales dentro y entre los países de ALC.

Los países de la región poseen distintos grados de descentralización de las fuerzas de policía. Por ejemplo, mientras Colombia tiene una sola fuerza de policía (nacional) distribuida por todo el territorio, Argentina tiene fuerzas de policía federales y provinciales.⁸⁰ La (des)centralización policial presenta ventajas y desventajas significativas. Las fuerzas de policía locales pueden tener la ventaja de un mayor conocimiento a nivel local. Sin embargo, si los grupos del crimen organizado responden a las intervenciones policiales en una zona trasladando sus actividades a otra, es probable que las respuestas policiales descentralizadas y aisladas sean insuficientes. Por otro lado, la coordinación y la competencia entre las fuerzas de seguridad pueden impedir que sean capturadas por organizaciones criminales. Sin embargo, tal vez la capacidad de las fuerzas de policía para coordinar internamente entre las unidades y con otros actores estatales resulte más importante que el grado de descentralización institucional, como se ha señalado.

La efectividad de la policía también depende de la confianza de la comunidad. Según la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por su sigla en inglés) (2017-22), los niveles de confianza ciudadana en la policía en ALC son los más bajos del mundo. En promedio, el 67 por ciento de los encuestados en los países de ALC indica tener poca o ninguna confianza en la policía, en comparación con el 36 por ciento en los países no pertenecientes a ALC. La desconfianza afecta la denuncia de crímenes y la cooperación. Enfrentar el uso excesivo de la fuerza, el abuso y la aplicación sesgada de la ley (por ejemplo, los ataques a las minorías), conductas a las que en ocasiones incurren las fuerzas de policía, puede contribuir a restablecer la confianza.⁸¹ Las intervenciones preventivas dirigidas a los agentes en situación de riesgo resultan ser costo-efectivas para reducir dichas conductas.⁸² Otro enfoque que ha demostrado reducir el sesgo yace en aumentar la diversidad dentro de los departamentos de policía mediante el reclutamiento de grupos subrepresentados.⁸³ Un mayor apoyo institucional, como se describió anteriormente, también puede ser útil.

79 Dube, MacArthur y Shah (2023); Holz, Rivera y Ba (2023); Owens et al. (2018).

80 Argentina cuenta con fuerzas de seguridad adicionales a nivel federal, como la Gendarmería y la Prefectura Nacional, encargadas de proteger las fronteras nacionales del país.

81 Braga, Brunson y Drakulich (2019).

82 Abril et al. (2024); Parker, Ross y Ross (2024); Stoddard, Fitzpatrick y Ludwig (2024).

83 Ba et al. (2021); Cox, Cunningham y Ortega (2024); Donohue y Levitt (2001); Harvey y Mattia (2024); Miller y Segal (2019).

RECUADRO 2.3.**Estrategia de la Ciudad de México para la reducción de crímenes de alto impacto^a**

La tasa de homicidios de la Ciudad de México alcanzó un máximo de 30 homicidios por cada 100.000 personas en 2018, después de cuatro años de crecimiento. En 2019, se implementó una nueva estrategia para mitigar los crímenes de alto impacto y mejorar las percepciones de seguridad.^b La estrategia aún se está aplicando y consta de seis pilares clave:

1. Policía basada en inteligencia: la fuerza policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recibió nuevas facultades investigativas, mejorando sus operaciones con acciones específicas impulsadas por la inteligencia;
2. Coordinación interinstitucional bajo el mando centralizado de la Jefatura de Gobierno para promover la colaboración permanente entre el Ministerio Público, la SSC y los municipios, mediante reuniones periódicas;
3. Asignación estratégica de la fuerza policial en zonas de alta criminalidad para una respuesta más rápida y eficaz;
4. Uso de herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar la vigilancia y respuesta a incidentes;
5. Priorización de la profesionalización y el bienestar del personal policial, que se tradujo en un aumento salarial acumulado del 45 por ciento entre 2018 y 2022, y la certificación de casi el 90 por ciento del personal policial; y
6. Programas de prevención social para atacar las causas subyacentes.

La estrategia dio como resultado una disminución del 49 por ciento en los crímenes de alto impacto entre julio de 2019 y julio de 2024, con promedios diarios que cayeron de 131 a 57 crímenes. La percepción de inseguridad también cayó del 92 por ciento a principios de 2018, al 52 por ciento a mediados de 2024, una disminución del 41 por ciento. Desde entonces, los homicidios han disminuido anualmente.^c

Notas

- a. Este recuadro se basa en el texto aportado por Thomas Favennec de LAB-CO.
- b. Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México (2024a); Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (2024a).
- c. Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México (2024b); Ciudad de México, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (2024b).

Para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad es esencial adoptar medidas eficaces de seguimiento y rendición de cuentas.⁸⁴ Por ejemplo, las cámaras corporales tienen el potencial de influir en los resultados policiales, en particular reduciendo el uso letal y no letal de la fuerza por parte de la policía, además de las quejas de los civiles contra la policía. Desde el punto de vista financiero, estas cámaras pagarían su costo con la reducción de costos de investigación y de pagos por compensaciones.⁸⁵ Por último, la policía militarizada, que trata a los sospechosos como enemigos en tiempos de guerra, se asocia con el abuso y, por lo tanto, es indeseable.⁸⁶ Los esfuerzos policiales orientados a la comunidad emergen como una aproximación alternativa. Sin embargo, tienen resultados mixtos y su efectividad depende en gran medida de las características particulares de cada contexto (recuadro 2.4).

84 Rivera y Ba (2023).

85 Ariel, Farrar y Sutherland (2015); Assaraf et al. (2024); Barbosa et al. (2021); Braga et al. (2017); Braga, MacDonald y McCabe (2022, 2023); Fagundes, Monteiro y Souza (2023); Lum et al. (2019); Mancha, Monteiro y Weintraub (sin fecha); Munyo y Rossi (2020); Williams et al. (2021).

86 Magaloni y Rodríguez (2020).

RECUADRO 2.4.**La estrategia de policía orientada a la comunidad de Río de Janeiro^a**

En 2008, en Río de Janeiro, el Estado puso en marcha las Unidades de Policía Pacificadora (conocidas como UPP, por su sigla en portugués) con el fin de recuperar el territorio bajo el control de los grupos criminales. La iniciativa tenía como objetivo ofrecer una alternativa a la vigilancia policial “militarizada” de las favelas, las áreas urbanas de bajos ingresos que albergan alrededor del 20 por ciento de la población de Río, controladas por bandas criminales. Se reclutaron jóvenes agentes entrenados en derechos humanos y vigilancia policial orientada a la comunidad para fomentar mejores relaciones con los residentes de las favelas y reducir los enfrentamientos armados. La implementación varió según el estilo de liderazgo, incluyendo la oferta de clases de fútbol y karate para los niños, resolución de conflictos y reuniones comunitarias para dialogar sobre seguridad. Las UPP con más de 10.000 policías fueron desplegadas en unas 160 favelas.

Las UPP redujeron los tiroteos fatales de la policía en un 45 por ciento en comparación con la policía militarizada que operaba previamente. Sin embargo, su impacto varió según la capacidad militar de los grupos criminales locales y la forma predominante de gobernanza local. En los lugares donde los grupos criminales tenían un fuerte poder militar y ofrecían beneficios a los civiles a cambio de apoyo, las intervenciones de la UPP convirtieron estas comunidades en zonas de guerra. En los lugares donde tenían una capacidad militar más baja y una gobernanza más dura, las UPP mejoraron las condiciones de seguridad locales. En los casos en que compartían los recursos de los mercados criminales con asociados estatales mientras que proporcionaban seguridad y asistencia local a la población civil, las redadas de las UPP alteraron este orden. En los casos en que explotaban a las comunidades a través de asociaciones criminales con agentes del Estado, participando en actividades como la trata de personas y el secuestro bajo la protección de las fuerzas del orden, las UPP mejoraron la seguridad local y los derechos humanos al romper estos pactos ilícitos. En los casos en que grupos rivales se enfrentaban en un conflicto constante por el control territorial, las UPP jugaron un papel crucial en la resolución de situaciones violentas, siendo a menudo actores clave para mantener el orden.

Una conclusión de esta experiencia es que la capacidad del Estado para recuperar el control territorial también depende del comportamiento de la policía. El control efectivo del territorio cambia cuando las comunidades ven a la policía como grupos legítimos y no criminales. Sin embargo, si los grupos criminales mantienen el orden mejor que la policía y los residentes temen más a las fuerzas del orden que a los líderes de estos grupos, es posible que prefieran a las organizaciones criminales.

Notas

a. Este recuadro se basa en Magaloni, Franco-Vivanco y Melo (2020).

Los sistemas de justicia son el eslabón más débil

La mayoría de los crímenes más graves en ALC no se investigan ni se juzgan. Los sistemas de justicia de la región carecen de la capacidad necesaria para investigar y procesar debidamente crímenes de alto impacto y, en algunos casos, están capturados por criminales.⁸⁷

Los indicadores disponibles sobre la efectividad de la investigación y la resolución de delitos (extraídos del Proyecto de Justicia Mundial) sugieren que, a excepción de Chile, Costa Rica y Uruguay, los países de América Latina ocupan los últimos puestos en relación con otras regiones del mundo (figura 2.12). El primer indicador evalúa la calidad de la justicia penal con base en la percepción y experiencia acerca de si los criminales son efectivamente capturados e

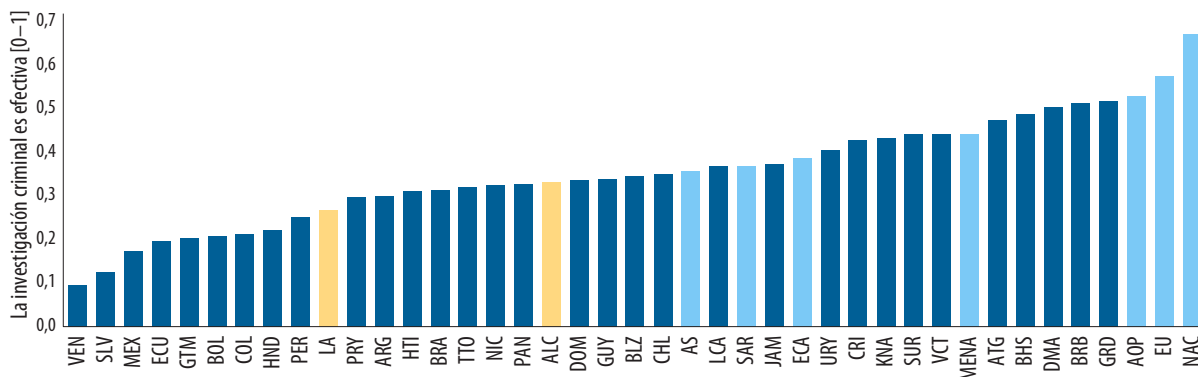
⁸⁷ En este análisis se hace referencia a los sistemas de justicia como todas las autoridades públicas que 1) gestionan y resuelven disputas entre ciudadanos, organizaciones privadas y organismos estatales, incluidos los mecanismos formales e informales de resolución de disputas; y 2) investigan, enjuician y condenan crímenes penales. Esta amplia caracterización incluye distintos tipos de autoridades públicas, como sistemas judiciales formales, organismos de investigación penal y fiscalías, y mecanismos informales de resolución de disputas, como la conciliación, la mediación y otros instrumentos restaurativos.

FIGURA 2.12.

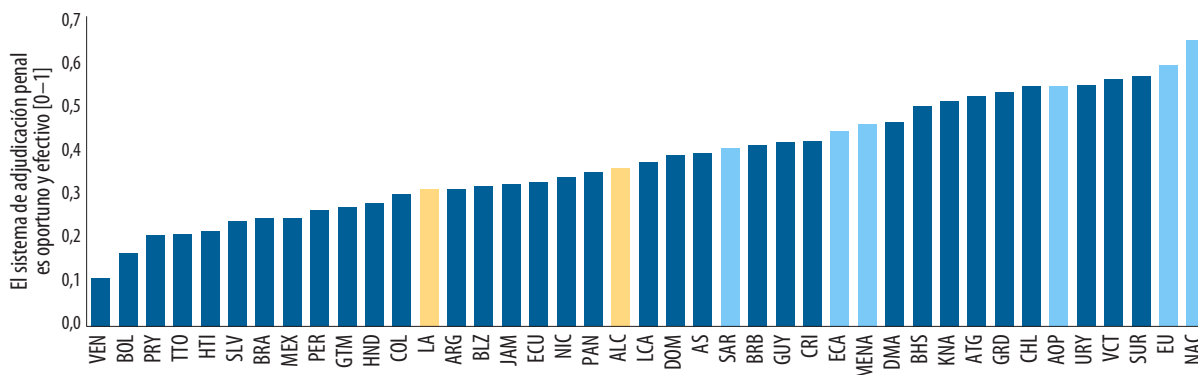
A la mayoría de los países latinoamericanos les va mal en cuanto a la eficacia de sus sistemas de justicia criminal

Indicadores de Justicia Criminal, 2023

a. El sistema de investigación criminal es efectivo [0–1]



b. El sistema de resolución penal es oportuno y eficaz [0–1]



Fuente: Índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial 2023.

Nota: Los índices se basan en datos provenientes de encuestas a la población general y cuestionarios dirigidos a encuestados calificados, completados por expertos en derecho penal. Las calificaciones van de 0 a 1, donde 1 indica un sistema más eficaz. Los países de ALC se muestran en azul oscuro. AOP = Asia Oriental y el Pacífico; ECA = Europa y Asia Central; UE = Unión Europea; LA = América Latina; ALC = América Latina y el Caribe; OMNA = Oriente Medio y Norte de África; NAC = América del Norte; ASS = África Subsahariana.

imputados. También mide si la policía, los investigadores y los fiscales cuentan con los recursos adecuados, están libres de corrupción y cumplen con sus deberes de manera competente. El segundo indicador mide si los criminales son efectivamente procesados y castigados, y si los jueces penales y otros funcionarios judiciales son competentes y adoptan decisiones rápidas. Este indicador proporciona una evaluación más precisa de la impunidad y confirma que se trata de un problema significativo en la región.

Los altos niveles de impunidad de los crímenes graves se ven confirmados por la mayoría de las mediciones del desempeño de la justicia penal en los países de ALC que experimentan más crimen y violencia. En este contexto, la ineficacia del sistema judicial, combinada con fragilidad institucional y fuerzas de seguridad débiles y poco estratégicas, contribuye a crear un círculo vicioso que abarca amplias desventajas sociales, económicas y políticas; poderosas organizaciones criminales y otros grupos ilegales; y grandes y persistentes mercados ilegales.

La debilidad de los sistemas de justicia de la región implica que los países carecen de la capacidad para detectar, investigar y dismantlar organizaciones criminales complejas con múltiples actores y estructuras o, al menos, para castigar a los criminales y las actividades que generan las peores externalidades para el bienestar de los habitantes de la región.

La falta de capacidad judicial puede explicarse, en parte, por insuficiencia en los indicadores de desempeño que proporcionarían los incentivos correctos a todos los actores de la cadena de aplicación de la ley y de la justicia criminal. Por ejemplo, en los casos relacionados con actividades del crimen organizado, centrarse en los resultados operativos a corto plazo, como la captura y el enjuiciamiento de los eslabones más débiles de una organización, no es la mejor medida del éxito estratégico, especialmente si tales operaciones perjudican los esfuerzos de investigación más ambiciosos que podrían conducir a la captura y el enjuiciamiento de los niveles superiores de la cadena de mando. Del mismo modo, las acciones represivas indiscriminadas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley pueden dar lugar a un aumento imprevisto de la violencia y resultar contraproducentes para la protección de la población civil en determinadas regiones.⁸⁸ De hecho, la disponibilidad de indicadores adecuados de desempeño en materia de justicia criminal puede mejorar la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía, proporcionando los incentivos correctos para una eficacia estratégica (y no solo operativa) (recuadro 2.5).

RECUADRO 2.5.

Indicadores de justicia: definición y finalidad^a

Los indicadores de justicia son métricas que evalúan diversos aspectos del sistema judicial y ayudan a identificar deficiencias, monitorear reformas, garantizar transparencia y alinear los objetivos operativos y estratégicos. Juegan un papel crucial en la medición del desempeño, la rendición de cuentas y la asignación de recursos, al proveer puntos de referencia que respaldan la planificación estratégica y la formulación de políticas basadas en evidencia.

Estos indicadores se pueden clasificar en tres categorías: los indicadores de insumo evalúan los recursos y los avances de las reformas; los indicadores de ejecución evalúan la eficiencia institucional; y los indicadores de resultado miden objetivos más amplios, como la confianza de la ciudadanía y la reducción del crimen. Para ser eficaces, los indicadores deben estar alineados con los objetivos del sistema de justicia. Por lo mismo, se requiere de un alto nivel de capacidad estratégica por parte de las autoridades a cargo de la aplicación de la ley y la justicia criminal para que se midan y prioricen los resultados que maximizan los efectos en el largo plazo. Además, los indicadores deben ser de fácil comprensión, tener un alcance multidimensional y ser accionables. Su desarrollo requiere colaboración entre las partes interesadas, incluyendo los encargados de la formulación de políticas, los funcionarios judiciales y las organizaciones de la sociedad civil, y depende de la existencia de fuentes de datos confiables y de la estandarización de los métodos de recopilación de información.

Entre los desafíos para el desarrollo y uso de indicadores de justicia se encuentran la resistencia institucional a las evaluaciones de desempeño (bastante común en ALC), la baja calidad y disponibilidad de datos, y la posible manipulación de las métricas por parte de las instituciones con el fin de mejorar su apariencia en lugar de incrementar genuinamente la calidad de su gestión. Asimismo, la comparación entre países o (en algunos casos) entre estados de un mismo país puede ser complicada debido a los diferentes marcos y estructuras legales. Abordar estos desafíos requiere compromiso político, auditorías independientes, rigor metodológico y creatividad.

Algunos ejemplos de indicadores de justicia son las tasas de resolución de casos, las tasas de desempeño operativo (como las tasas de acusación o condena), la duración de los juicios y el acceso a la asistencia jurídica. Para maximizar su eficacia e impacto, estos indicadores deben estar integrados con estrategias de reforma más amplias en las que se los vincule con iniciativas de mejoras en el desempeño, se garantice la transparencia a través del acceso público a los datos, se aliente la colaboración entre las instituciones judiciales y se los actualice periódicamente para reflejar las necesidades cambiantes del sistema.

Notas

a. Este recuadro se basa en Dandurand, Kittayarak y MacPhail (2015).

88 Abt (2019); Blattman (2023); Draca et al. (2023); Kennedy (2011); Lessing (2017).

Para mejorar la capacidad de la justicia criminal, específicamente en la lucha contra el crimen organizado, las autoridades deben recurrir a la priorización, lo que implica focalizar los recursos disponibles en investigar y eliminar aquellos crímenes que son más perjudiciales para la sociedad. Algunos ejemplos son la violencia homicida, la prostitución infantil y la extorsión.⁸⁹

Las autoridades judiciales también son fundamentales en los esfuerzos para reducir el encarcelamiento. Reformar las condiciones de elegibilidad para la aplicación focalizada de la ley y el encarcelamiento en los códigos penales a nivel nacional y subnacional requiere la participación de las autoridades judiciales, así como debates más amplios sobre la política de drogas. Avanzar en el diálogo sobre la regulación de los mercados de drogas puede aliviar el hacinamiento carcelario en ALC y liberar recursos para atacar las estructuras centrales de las organizaciones criminales de manera más eficiente.⁹⁰

Por último, como se ha discutido, en algunos de los territorios bajo su control, las organizaciones criminales ayudan a la gente a resolver disputas, sustituyendo a las instituciones estatales y asumiendo el rol de impartir justicia.⁹¹ Por lo mismo, una institucionalidad de justicia eficiente está entre lo primero que los gobiernos deben llevar a los territorios donde los servicios estatales han estado ausentes.⁹²

El apoyo a sistemas innovadores de conciliación y arbitraje, además de otros mecanismos de restauración y reparación puede ser un primer paso hacia la recuperación del monopolio estatal en la provisión de justicia en los lugares donde los actores no estatales tienen el control. En el largo plazo, estos sistemas pueden trabajar simultáneamente con las instituciones de justicia formales, gestionando disputas menores e impidiendo que estas lleguen a los tribunales— pueden complementar y funcionar alineados con las instituciones de justicia convencionales.

Los mecanismos alternativos de solución de disputas no son nuevos en ALC, pero se han aplicado en contextos limitados (recuadro 2.6). La experiencia de la región con estos mecanismos puede orientar las estrategias para llevar la presencia del Estado a la administración de justicia en los territorios donde se ha perdido el control a manos de grupos criminales.

La acción estatal en la lucha contra el crimen organizado requiere una mejor comprensión de su funcionamiento

La falta de información confiable sobre el crimen organizado y los desafíos para medirlo de manera sistemática y comparable entre países son inmensas. Esto significa que la formulación de políticas y la acción estatal para combatir el crimen organizado a menudo fracasan debido a la falta de datos e información adecuados que las guíen. De hecho, parte de las debilidades institucionales analizadas en la sección anterior son el resultado de la falta de datos o de la capacidad de utilizar los datos disponibles para orientar el curso de acción. La asignación estratégica de las fuerzas de policía sobre el territorio, la mayor sofisticación del análisis criminal para focalizar y llevar a cabo operaciones que afecten estructuralmente a los grupos criminales en lugar de capturar únicamente a miembros de rango bajo de una organización, y la identificación de los jóvenes en riesgo son ejemplos de acciones para las que tener mejores datos y una mejor comprensión del crimen organizado son prerequisites.

89 Abt (2019); Blattman (2023); Braga, Weisburd y Turchan (2018); Kennedy (2011); Lessing (2017).

90 UNODC (2024); Uprimny, Chaparro y Cruz (2017).

91 Feldmann y Mantilla (2021).

92 Arjona y Saab (2024).

RECUADRO 2.6.**Las unidades de servicios móviles pueden ser una forma de acercar al Estado donde está ausente**

La mayoría de los países en desarrollo no pueden proporcionar servicios esenciales en todo su territorio. Un enfoque innovador que se ha puesto a prueba en diversos contextos es la prestación de servicios por medio de vehículos móviles. Las clínicas móviles, por ejemplo, se han desplegado ampliamente para llegar a las personas que no pueden acceder a servicios de salud de calidad.^a En el contexto de la lucha contra el crimen organizado, los servicios móviles de justicia pueden ser un primer paso para recuperar el control de los territorios bajo gobernanza criminal.

Los tribunales móviles se utilizan cada vez más en todo el mundo para extender servicios de justicia a zonas remotas y desatendidas.^b Las evaluaciones rigurosas de estos programas itinerantes son escasas. En una zona rural de Liberia, una organización no gubernamental (ONG) prestó servicios de mediación y promoción por intermedio de asistentes jurídicos comunitarios capacitados en derecho formal. Para llegar a las comunidades remotas, el programa desplegó “asistentes legales móviles” en motocicletas en 160 aldeas de 5 de los 15 condados de Liberia. La asistencia jurídica dio lugar a un aumento en el número de clientes que reportaron haber obtenido resultados justos, mayor satisfacción y mejores relaciones con la contraparte después de la resolución del caso.^c

Otro programa que ha sido evaluado es la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas (UMAOV), puesto en marcha en 2012 en Colombia. Este programa fue diseñado para atender las necesidades de las víctimas del conflicto armado en zonas remotas y marginadas. Las unidades móviles ofrecían consultas personalizadas, asesoría legal especializada, capacitación sobre derechos y mecanismos de justicia transicional, e información sobre programas nacionales y locales para víctimas. Entre 2012 y 2020, la UMAOV atendió a más de 125.000 personas, abordando cuestiones como violaciones a los derechos humanos, solicitudes administrativas de compensación y reparaciones integrales.^d Este programa facilitó los procesos administrativos relacionados con las reparaciones, aumentó la tasa de compensación de las víctimas y mejoró su percepción de la justicia y la seguridad.^e

Notas

- a. Vidrine et al. (2012); OMS (2006).
- b. Harper (2011); Fundaciones de la Sociedad Abierta (2013); PNUD (2014); Banco Mundial (2006, 2008).
- c. Sandefur y Siddiqi (2013).
- d. Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia (2020).
- e. Vargas et al. (sin fecha).

Uno de los mayores desafíos está en que el crimen organizado tiene tanto elementos visibles —como la violencia letal— como aspectos invisibles que son mucho más difíciles de cuantificar. Esto explica por qué las autoridades suelen responder de manera reactiva, en particular cuando ocurren incidentes de alto perfil, como se ha visto recientemente en Ecuador. Sin embargo, las áreas en las que el crimen organizado tiene mayor influencia con frecuencia pasan desapercibidas, y las actividades criminales que ocurren discretamente rara vez son objeto de escrutinio. Esto permite que las organizaciones criminales crezcan sin ser detectadas hasta alcanzar niveles en que controlarlas se vuelve desafiante.

Como se mencionó, si bien los homicidios están relativamente bien documentados, otros crímenes no se denuncian. El grado de sub-reporte varía según el tipo de crimen y la condición socioeconómica, la educación, el género y la etnia de la víctima. Las principales fuentes alternativas de información son las encuestas de victimización. Sin embargo, estas encuestas no suelen ser representativas a nivel granular y no se recogen sistemáticamente, porque a menudo son realizadas por organizaciones no gubernamentales (ONG) con financiamiento intermitente.

Parte del problema es la ausencia de encuestas oficiales sistemáticas. Si bien los países de ALC recopilan regularmente información sobre los mercados laborales y la inflación, no recopilan sistemáticamente encuestas estandarizadas sobre actividades criminales ni incluyen módulos en las encuestas oficiales de hogares y empresas.⁹³ Esto a pesar de que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población en estudios de opinión como Latinobarómetro. Las encuestas que captan la actividad criminal de manera representativa a nivel de barrio —necesarias para orientar la focalización de las políticas y los programas— en zonas con niveles críticos de crimen organizado y violencia, son aún más raras.⁹⁴

El uso de datos administrativos para informar la acción del Estado y el diseño de políticas tampoco es sistemático ni generalizado. Los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS), a través de los cuales las instituciones financieras informan a las autoridades estatales sobre transacciones potencialmente asociadas con el lavado de dinero y otros crímenes financieros, son una excepción. Aun así, su uso para explorar patrones e informar procesos penales es muy limitado en ALC (recuadro 2.7).

El uso más útil de registros administrativos para comprender el funcionamiento del crimen organizado y orientar las políticas de prevención o seguridad se encuentra en investigaciones académicas, casi siempre como esfuerzos aislados. La mayoría de estos proyectos son llevados a cabo por investigadores que dedican años de trabajo a áreas geográficas limitadas. Las experiencias de investigación a largo plazo en Medellín (Colombia) y El Salvador muestran lo mucho que se puede ganar de la investigación especializada y la colaboración entre investigadores, agencias estatales y gobiernos locales.

El recuadro 2.8 presenta una descripción detallada de la gobernanza criminal en Medellín, visibilizada por el Medellín Impact Lab, una iniciativa de la Universidad EAFIT en Medellín, la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action. El equipo de investigación adoptó una aproximación multifacética, que ha incluido la recopilación y análisis de datos administrativos, la realización de encuestas representativas a nivel de barrio en toda la ciudad, entrevistas cualitativas detalladas a lo largo de los años y, lo más importante, trabajo de la mano con el gobierno de la ciudad para, cuando ha sido posible, hacer pilotos para informar el diseño de políticas y programas. Por ejemplo, su trabajo permitió identificar escuelas con jóvenes en alto riesgo de ser reclutados, para focalizar intervenciones preventivas, midiendo su impacto sobre los proyectos de vida de los jóvenes, e informando la realización de ajustes a los programas para escalarlos. El enfoque innovador e integral del Medellín Impact Lab al estudio del crimen organizado ofrece lecciones valiosas para la formulación de políticas en otros lugares. Es un buen ejemplo de investigación que informa el diseño de políticas más efectivas y demuestra la importancia de los esfuerzos colaborativos de largo plazo para abordar problemas sociales complejos.

Como se mencionó, otro equipo de investigadores ha realizado una investigación extensa y de largo plazo sobre el impacto de las bandas criminales y las políticas públicas en El Salvador.⁹⁵ Sus estudios han proporcionado conocimientos invaluable sobre las estrategias de reclutamiento de las bandas, las consecuencias socioeconómicas del control territorial y la efectividad de diversas intervenciones de política pública en el país. Esta investigación ha permitido comprender mejor la compleja dinámica del control de las bandas y sus efectos de gran alcance en las comunidades. El recuadro 2.9 profundiza en las enseñanzas extraídas de esta experiencia.

La dinámica agenda de investigación de este equipo es otro ejemplo del papel que puede desempeñar la investigación rigurosa y de largo plazo para orientar la acción estatal y el diseño de políticas a nivel nacional o municipal. Al comprender las complejas dinámicas de la actividad de las bandas y su impacto en la sociedad, los responsables de la formulación de políticas pueden desarrollar estrategias más efectivas para combatir el crimen y fortalecer el desarrollo comunitario en El Salvador y en otros contextos.

93 Hay algunas excepciones. Bolivia, El Salvador, Guatemala y Perú incluyen sistemáticamente preguntas sobre victimización en sus encuestas de hogares. Brasil, Chile y Colombia han tenido un módulo en la encuesta de hogares una vez, mientras que Costa Rica y República Dominicana han agregado ocasionalmente un módulo. Sin embargo, el número y el alcance de las preguntas sobre victimización en las encuestas de hogares varían considerablemente de un país a otro. El Salvador y México realizan encuestas anuales de victimización. Otros países solo han recogido encuestas de victimización de forma ocasional.

94 Medellín (Colombia) tiene una encuesta oficial anual representativa a nivel de barrio y São Paulo (Brasil) tiene una encuesta representativa para nueve zonas urbanas. Bogotá (Colombia) cuenta con una encuesta oficial anual representativa a nivel de localidad que realiza la Cámara de Comercio de la ciudad. En Fortaleza (Brasil), un equipo de investigación recopiló una encuesta de una ola.

95 Esta investigación ha sido liderada por Micaela Sviatschi (Universidad de Princeton) y Carlos Schmidt-Padilla (Universidad de California, Berkeley).

RECUADRO 2.7.**Seguir el dinero: dismantlar las organizaciones criminales requiere interrumpir los flujos financieros y las redes que sostienen a estos grupos^a**

Las medidas en contra del lavado de dinero (AML, por su sigla en inglés) están diseñadas prevenir y detectar la ocultación de ganancias ilícitas.^a Estas medidas pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado en ALC al atacar la infraestructura financiera que sostiene las actividades criminales.

Conceptualmente, estas medidas contribuyen a:

- **Desmantelar redes financieras y recuperar activos.** Al identificar, congelar y recuperar activos vinculados con organizaciones criminales, las medidas de AML pueden interrumpir los flujos y redes que sustentan a estos grupos y reducir la rentabilidad de sus actividades criminales.
- **Mejorar la transparencia.** Implementar regulaciones más estrictas sobre las transacciones financieras, tales como exigir la declaración del origen de los fondos y de los propietarios finales de las empresas, puede aumentar la transparencia y dificultar el lavado de dinero.
- **Abordar la corrupción y otros crímenes financieros.** Al introducir controles de AML, como el reporte de transacciones financieras sospechosas, los países pueden reducir las oportunidades que tienen los grupos criminales de beneficiarse de crímenes como la corrupción y la evasión fiscal.
- **Apoyar la integridad y el crecimiento de los mercados financieros.** Al aumentar los controles de AML, los países fomentan la productividad y la confianza de los inversionistas en los mercados locales, lo que a su vez impulsa el crecimiento.
- **Fomentar la cooperación nacional e internacional.** Para implementar efectivamente controles de AML, los países deben facilitar el intercambio permanente de información entre las autoridades nacionales relevantes, tales como supervisores, fiscalías, unidades de inteligencia financiera, fuerzas de policía y sus contrapartes extranjeras.

El principal desafío está en la implementación. Si bien atacar las finanzas criminales es una estrategia de política efectiva, esto requiere significativa coordinación interna e innovación, ya que la información y el poder necesarios para atacar los flujos ilícitos de dinero están en varias agencias, y los criminales adaptan continuamente sus métodos para mover y ocultar los fondos. Como resultado, solo uno de cada cinco países está investigando, procesando y condenando delitos de lavado de dinero a un nivel alto o sustancial.^b Las tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y el “blockchain”, pueden ayudar a detectar actividades sospechosas y rastrear fondos ilícitos de manera más efectiva. Sin embargo, el personal bien entrenado, capaz de diseñar estrategias que permitan seguir e investigar patrones de actividad financiera sospechosa es el insumo escaso más crucial.

Notas

- Este recuadro utiliza texto aportado por Yara Esquivel y Ailsa Hart, de la Unidad de Estabilidad e Integridad Financiera del Banco Mundial.
- FAFT (2022).

RECUADRO 2.8.**Entendiendo y enfrentando el crimen organizado en Medellín^a**

La ciudad de Medellín (Colombia) alberga una extensa red de crimen organizado, constituida por unas 400 bandas callejeras conocidas como combos, que en conjunto emplean a cerca de 12.000 personas.^a Estas bandas están profundamente arraigadas en el tejido socioeconómico de la ciudad y controlan aproximadamente dos tercios de sus barrios. Los ingresos de sus miembros varían significativamente según su rango. Los soldados rasos ganan alrededor de 10.000 dólares (PPA) al año, una cifra similar al ingreso mediano de los trabajadores de la ciudad. En los rangos más altos, los líderes de los combos y de estructuras criminales más grandes con funcionamiento similar a la mafia, conocidas como Razones, reciben ingresos que los ubican dentro del 1 por ciento de las personas con mayores ingresos de Colombia. Los combos suelen proveer protección y orden en sus barrios para reducir la presencia policial y fomentar la lealtad entre los residentes, mientras que protegen sus lucrativas operaciones de tráfico de drogas.

La estructura jerárquica de estas bandas está meticulosamente organizada. Los combos, conformados por entre 15 a 50 miembros, se dedican principalmente a la venta minorista de drogas y a la extorsión. Sus operaciones también incluyen otros servicios coercitivos como los préstamos gota a gota y el cobro de deudas. Las Razones supervisan, cada una, docenas de combos. Les suministran drogas al por mayor y otros recursos, y coordinan sus actividades para mantener el orden y maximizar las ganancias: reparten los mercados geográficos, imponiendo acuerdos de colusión sobre los precios de las drogas, y facilitan negociaciones pacíficas para evitar conflictos costosos cuando es necesario. Las Razones también se comunican entre sí para coordinar actividades a su nivel y mantener la paz. Los acuerdos en esta instancia reflejan una estructura organizacional sofisticada de negocios. Como resultado de estos arreglos, la violencia en Medellín ha disminuido drásticamente en comparación con hace 15 años, cuando los mercados estaban en disputa. La violencia homicida que persiste es selectiva y funciona como un castigo por incumplimientos de los acuerdos vigentes.

El Medellín Impact Lab ha sido fundamental para revelar los detalles más complejos de esta gobernanza criminal. Los datos administrativos desempeñaron un papel clave en esta investigación. En colaboración con el gobierno de la ciudad, el equipo obtuvo acceso a diversas bases de datos, incluyendo registros de arrestos, informes de crímenes geolocalizados, datos de seguridad social y registros de rendimiento escolar. Esta información detallada permitió mapear en tiempo real los lugares de alta criminalidad y realizar análisis predictivos, esenciales para comprender la dinámica del crimen organizado en la ciudad e informar el diseño de políticas y programas focalizados de seguridad y prevención.

Además, el equipo de investigación ha acompañado al gobierno de la ciudad en la realización de encuestas anuales de victimización a gran escala, representativas de todos los barrios de ingresos bajos y medios. También llevó a cabo directamente tres encuestas a gran escala en 2019, 2023 y 2024, que incluyeron aproximadamente 8.000 residentes y negocios de Medellín. Estas encuestas fueron diseñadas para capturar fenómenos subreportados, como la extorsión y la gobernanza de las bandas criminales. Los resultados han revelado, por ejemplo, que la mayoría de los casos de extorsión no se denuncian —se registran solo 15 denuncias oficiales por semana, frente a los 150.000 hogares y negocios que se estima pagan cuotas de extorsión. Esta brecha evidencia la necesidad de mejores herramientas de diagnóstico y de intervenciones más efectivas.

La recolección de datos cualitativos también ha sido fundamental. A lo largo de varios años, el equipo de investigación ha realizado cientos de entrevistas a residentes, dueños de negocios, líderes comunitarios, oficiales de policía y miembros de las bandas criminales. Esta aproximación cualitativa ha permitido una comprensión más profunda de las estructuras organizacionales de las bandas, sus fuentes de ingresos y sus estrategias de gobernanza. Esto resalta la importancia de entender la organización política y económica de las organizaciones de crimen organizado para diseñar políticas que puedan interrumpir sus operaciones de manera efectiva, minimizando las posibles consecuencias no deseadas.

Las alianzas han sido vitales para esta investigación, incluida su etapa experimental. La colaboración con el gobierno local, la policía y organizaciones no gubernamentales (ONG) ha facilitado el diseño y la implementación de intervenciones para reducir el crimen. Una de esas intervenciones, el programa Operación Convivencia, intensificó la presencia de trabajadores comunitarios en barrios donde las bandas estaban profundamente arraigadas y la

legitimidad del Estado era baja. Inicialmente, el programa se implementó como prueba piloto en algunos barrios antes de expandirse a 40 barrios, con los resultados de la evaluación de impacto guiando nuevas estrategias para fortalecer el orden y contrarrestar la gobernanza de las bandas.

El Medellín Impact Lab también puso en marcha un proyecto piloto enfocado en el reclutamiento de menores por parte de las bandas, con el objetivo de ofrecer oportunidades alternativas y redes de apoyo para jóvenes en riesgo, con la intención de reducir el atractivo de unirse a estos grupos. El éxito de la prueba piloto llevó a la ciudad a comprometer fondos para implementar la intervención en dos cohortes de 300 adolescentes por año durante al menos tres años. El programa, llamado Parceritos, cuenta con una primera cohorte que forma parte de una evaluación en curso para medir su impacto en el reclutamiento juvenil y las tasas generales de crimen a mediano y largo plazo.

Notas

a. Este recuadro se basa en Blattman et al. (2022); Blattman et al. (2024a); y Blattman, Lessing y Tobón (2025).

RECUADRO 2.9.

Investigación especializada sobre las bandas criminales en El Salvador^a

Hasta 2022, el crimen organizado en El Salvador, impulsado principalmente por bandas como la MS-13 y el Barrio 18, representó un desafío complejo caracterizado por el control territorial, la violencia y actividades criminales como la extorsión y el tráfico de drogas. En 2015, se reportó que más del 50 por ciento de los municipios de El Salvador tenían presencia de estas bandas.^b

Un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton y la Universidad de California (Berkeley) ha realizado una investigación extensa y de largo plazo sobre el impacto de las bandas y las políticas públicas en El Salvador. Su trabajo ha revelado, por ejemplo, el profundo impacto de las bandas sobre los niños de El Salvador. Estas bandas empleaban diversas estrategias para reclutar niños vulnerables, que iban desde la coerción directa hasta la promesa de mayor estatus social y aceptación. Los niños expuestos a los líderes de bandas criminales durante sus años de formación tenían una mayor probabilidad de afiliarse a estos grupos en la adultez.^c Más aún, las cárceles en El Salvador funcionaban como centros de desarrollo criminal y de fortalecimiento de redes criminales entre los reclusos. Los reclusos que estuvieron en contacto con líderes de bandas criminales se involucraban con mayor probabilidad en actividades relacionadas con estos grupos al salir de la cárcel.^d

El control territorial de las bandas obstaculizó significativamente el desarrollo al imponer restricciones a la movilidad de los residentes y limitar su acceso a oportunidades. En los barrios controlados por bandas criminales, las personas tenían un menor bienestar material, menores ingresos y oportunidades educativas más limitadas en comparación con aquellos que vivían solo 50 metros por fuera del territorio controlado. Las restricciones a la movilidad también limitaban las oportunidades en el mercado laboral, ya que era difícil para las personas en áreas controladas desplazarse al trabajo en áreas no controladas. Esta investigación también documenta el profundo impacto de los criminales sobre el comportamiento de las empresas y en los resultados políticos de los municipios afectados por la violencia de bandas. En particular, muestra que en estos municipios había una menor creación de empresas y la participación en elecciones era más baja.^e

La investigación sobre políticas públicas que abordan estas cuestiones arroja resultados prometedores. El programa Escuelas Seguras, implementado en 2015, involucró el uso de patrullas de policía preventivas para reducir el reclutamiento por parte de las bandas criminales en los alrededores de los centros educativos. Esta iniciativa contribuyó a reducir la deserción escolar y redujo el reclutamiento y los arrestos de jóvenes vulnerables. Como resultado, cinco años después de la intervención se registró una disminución en los niveles de extorsión y homicidio.^f

El estudio de las treguas entre bandas muestra tanto efectos positivos como negativos. Las treguas pueden reducir la violencia a corto plazo, pero suelen fortalecer a los grupos criminales dando lugar a aumentos de la actividad criminal y mayor control territorial.^g

Los operativos del gobierno contra las bandas, como el de 2022, han mostrado potencial para la recuperación de barrios y la restauración de la libertad de movimiento de los residentes. Sin embargo, estos operativos pueden tener consecuencias no deseadas, como un aumento del estigma y la discriminación contra los residentes de antiguos territorios controlados por bandas en el mercado laboral, como lo muestra la investigación más reciente sobre El Salvador de este equipo de investigadores. Si bien medidas como estas abordan preocupaciones inmediatas de seguridad, su éxito en largo plazo depende del contexto y de una evaluación cuidadosa de su potencial impacto sobre la legitimidad de las instituciones.^h

Notas

- a. Este recuadro está basado en el trabajo liderado por Micaela Sviatschi (Universidad de Princeton) y Carlos Schmidt-Padilla (Universidad de California, Berkeley).
- b. Martínez et al. (2016).
- c. Sviatschi (2022).
- d. Golcalves et al. (sin fecha).
- e. Melnikov, Schmidt-Padilla y Sviatschi (2020).
- f. Castro et al. (sin fecha).
- g. Brown et al. (2024).
- h. Melnikov, Schmidt-Padilla y Sviatschi (sin fecha).

El crimen organizado es un problema de primer orden para ALC porque es una barrera creciente para el desarrollo

ALC está asediada por grupos de crimen organizado que, en muchos lugares, evolucionaron de organizaciones narcotraficantes a corporaciones transnacionales, con control sobre corredores de tráfico de drogas, rutas de contrabando y migración, y otras numerosas actividades criminales y no criminales. Este capítulo ha discutido cómo el crimen organizado obstaculiza el desarrollo de la región. No se puede enfatizar lo suficiente que este es un problema de primer orden para ALC. Se requieren urgentes medidas de política y un respaldo pleno de los gobiernos de toda la región para contener su expansión y mitigar el daño social.

El crimen organizado se reproduce en ausencia de oportunidades

Este capítulo ha resumido el creciente alcance del crimen organizado en ALC: sus características distintivas y su relación con la epidemia de violencia en la región. También ha destacado que este es, en definitiva, un problema de desarrollo que se nutre de la falta de oportunidades y participación política de las poblaciones más vulnerables. Esto implica que, además de las acciones urgentes señaladas anteriormente en relación con los pilares fundamentales de la política de seguridad (cárceles, fuerzas de policía y sistema de justicia), la lucha contra el crimen organizado también requiere abordar una serie de factores multiplicadores de la actividad criminal.

Conceptualmente, estos factores pueden dividirse en aquellos que pueden ayudar a reducir la oferta de mano de obra y el acceso al capital de las organizaciones criminales (aumentando así sus costos de operación) y aquellos que restringen la demanda de los bienes y servicios que ofrecen estos grupos (disminuyendo así sus ingresos).

En cuanto a la oferta de mano de obra, la falta de oportunidades —especialmente para los hombres jóvenes, quienes son las víctimas principales y los principales perpetradores de la violencia criminal— facilita el reclutamiento en las organizaciones criminales. Las agendas de investigación de Medellín y El Salvador analizadas en este capítulo respaldan de manera clara esta idea. En muchos casos, los reclutados no son obligados a ingresar a las actividades criminales, sino que los grupos criminales ofrecen oportunidades económicas significativamente mejores que las disponibles en los mercados legales. Además, ofrecen perspectivas de carrera y elementos de “movilidad emocional” (respeto, aprecio y reconocimiento), que los trabajos precarios legales que la región ofrece a la mayoría de los jóvenes, rara vez pueden proveer.⁹⁶

Además, muchos de estos jóvenes han sido criados en entornos violentos, ya sea en sus comunidades o en sus propios hogares. El 64 por ciento de los niños menores de 15 años en ALC han experimentado una crianza violenta en el hogar en forma de castigos físicos severos o agresión emocional.⁹⁷ Solo 10 países de ALC cuentan con legislación que prohíbe estas prácticas.⁹⁸ La exposición constante a la violencia aumenta la probabilidad de que los jóvenes internalicen la agresión como un mecanismo de supervivencia y empoderamiento, haciendo que la afiliación a una banda criminal se asimile a una forma de protección y empoderamiento.⁹⁹ La influencia de amigos y conocidos también es un factor determinante. Las investigaciones sobre las motivaciones de los jóvenes para unirse a estos grupos indican que quienes se unen a pandillas por razones instrumentales, como beneficios económicos o protección, tienen mayor probabilidad de involucrarse en actividades criminales. La presión de grupo también juega un papel crucial, ya que la dinámica social dentro de las bandas refuerza la participación en el crimen.¹⁰⁰

La falta de educación y de oportunidades económicas interactúa con la desigualdad política en la región y se ve agravada por ella. Grandes segmentos de la población de ALC carecen de voz y agencia, lo que genera un desencanto generalizado. Esta desigualdad política aumenta la demanda por formas alternativas de gobernanza, fortaleciendo el atractivo de los servicios que ofrecen las organizaciones criminales.

Este análisis sugiere que existen políticas que podrían abordar simultáneamente los mecanismos de la oferta y la demanda. En muchas partes de la región, la falta de oportunidades y de representación política coexisten con un Estado débil. Esta debilidad se manifiesta en varias dimensiones, como la falta de monopolio estatal sobre los servicios de justicia y seguridad, la presencia desigual del Estado en el territorio, su incapacidad para proporcionar servicios esenciales a toda la ciudadanía, una regulación excesiva acompañada de una implementación deficiente y su frecuente recurso a soluciones militarizadas, que pueden ser contraproducentes para el control de la violencia del crimen organizado y la confianza ciudadana. Un Estado débil o ausente es lo que permite que los grupos de crimen organizado ofrezcan servicios, como protección y resolución de conflictos, dos dimensiones al centro de un Estado que funcione.

Los hombres y mujeres en edad de trabajar necesitan mejores alternativas al crimen, en forma de empleos de calidad que les ofrezcan perspectivas de mejora a lo largo de sus vidas. Las reformas necesarias para generar este tipo de empleos han sido postergadas durante demasiado tiempo, y la región está pagando un alto precio por ello, no solo al proporcionar una abundante mano de obra a la actividad criminal, sino también en términos de crecimiento perdido, menor prosperidad y desarrollo estancado. Si bien estas reformas son complejas, deben verse como una parte esencial de la seguridad pública. Mejores prisiones, mejores fuerzas de policía y mejores sistemas de justicia son indispensables, pero también lo son mejores oportunidades. Sin estas últimas, es poco probable que las primeras logren brindar la seguridad y tranquilidad que los ciudadanos esperan, con justicia, de sus gobiernos.

96 Amaya y Martínez d'Aubuisson (2021); Blattman, Rodríguez-Uribe y Tobón (sin fecha); Bouchard y Splinder (2010).

97 UNICEF (2018a).

98 UNICEF (2018b).

99 Hoeve et al. (2009); López Stewart et al. (2000); Rojas-Flores et al. (2013).

100 Lachman, Roman y Cahill (2013); Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Estados Unidos (2011).

ALC puede fortalecer la capacidad estratégica para controlar el crimen organizado

Este informe no argumenta que el fortalecimiento del Estado sea un requisito previo para combatir el crimen organizado. Plantear esto implicaría retrasar acciones de política urgentes contra el crimen organizado en sí mismo—y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales debe ser una prioridad en ALC, independientemente de la presencia del crimen organizado. Por el contrario, los gobiernos deben poner la lucha contra el crimen organizado al centro de la agenda de la política pública ahora mismo. Con ese fin, deben identificar los comportamientos y resultados que no se pueden tolerar y trazar líneas rojas que guíen la acción priorizada y específica a cada contexto del Estado.

No hay crímenes aceptables, pero dada la complejidad y la multiplicidad de formas que puede adoptar la actividad del crimen organizado—así como la limitada capacidad del Estado para enfrentarla—los responsables de la formulación de políticas deben priorizar y comenzar por identificar el tipo de crímenes que tienen los impactos más adversos para enfocar en ellos todos los esfuerzos del Estado, de manera coordinada. Este foco puede generar nuevos desafíos, pero dada la magnitud del problema, la región no puede aspirar a atacar todo el fenómeno del crimen organizado en su totalidad. Ni Estados Unidos ni Europa han logrado erradicar por completo la actividad del crimen organizado. En cambio, han aprendido a gestionar el problema controlando las actividades y los comportamientos más perjudiciales para la sociedad.

No es posible repensar las cárceles, reestructurar la policía, priorizar la acción judicial, promover la coordinación institucional, aumentar los costos de los negocios criminales y reducir la demanda de servicios criminales sin una mejor comprensión de la naturaleza, complejidad, dinámica y múltiples manifestaciones del crimen organizado. Producir mejor información es una prioridad urgente en la lucha contra el crimen organizado en la región. Como sugieren las experiencias en curso en Medellín y El Salvador, un conocimiento profundo del contexto y evidencia original, tanto cuantitativa como cualitativa, son clave para una comprensión más integral del crimen organizado en territorios específicos. La armonización de los registros administrativos de crimen y violencia entre países, la generación de información subnacional mediante la inclusión de módulos de victimización en las encuestas de hogares y empresas, y la recolección de datos a nivel sub-municipal, son precondiciones esenciales para la producción de análisis matizados y complejos, más relevantes para el diseño de políticas y programas.¹⁰¹

La política de seguridad y las políticas de prevención son complementarias en la lucha contra el crimen organizado

Las políticas que contribuyan a mejorar el funcionamiento precario de los mercados laborales de ALC y a generar mejores oportunidades de empleo para todos—incluyendo mejores sistemas de educación y capacitación y marcos regulatorios que igualen el terreno de juego para los negocios—son fundamentales; aumentarán los costos de oportunidad de participar en actividades criminales, reduciendo la oferta de mano de obra para el crimen organizado, como ocurre en las regiones más desarrolladas del mundo. Simultáneamente, las políticas de prevención del reclutamiento dirigidas a jóvenes en alto riesgo deben ser una prioridad, ya que pueden limitar el acceso de estas organizaciones a poblaciones vulnerables. Estas acciones pueden incluir intervenciones educativas focalizadas, estrategias comunitarias de prevención y protección, y programas de resocialización para antiguos criminales. Además, las intervenciones dirigidas a cuestionar masculinidades nocivas y reducir la desigualdad de género pueden contribuir a reemplazar normas que justifican diversas formas de violencia por otras que promuevan sociedades más pacíficas.¹⁰² Los programas de mentoría y apoyo emocional, donde los jóvenes pueden encontrar modelos a seguir fuera del contexto criminal, también han demostrado ser efectivos.¹⁰³

101 Blattman et al. (2022).

102 Zermeño (2024).

103 National Gang Center (sin fecha).

La prevención no puede sustituir a las políticas de seguridad, pero es un complemento necesario. Del mismo modo, incluso una buena política de seguridad será insuficiente sin medidas de prevención de largo plazo. La combinación de intervenciones de seguridad y prevención es la estrategia que probablemente logre los mejores resultados (recuadro 2.10).

RECUADRO 2.10.

Casos en que las políticas de seguridad y prevención se refuerzan mutuamente

La lucha contra el crimen organizado requiere respuestas de prevención y seguridad que se complementen de manera efectiva entre sí.^a Algunos ejemplos de esta complementariedad incluyen:

1. **Combatir las economías ilegales.** Las intervenciones de seguridad dirigidas a reducir la oferta de drogas, como la interdicción en zonas de tráfico, reducen los ingresos criminales. Las medidas de prevención complementarias pueden aumentar la efectividad de estos esfuerzos, incluyendo intervenciones de prevención y psicosociales orientadas a disminuir el consumo de drogas entre los jóvenes, que pueden disminuir la demanda de drogas o retrasar la edad del primer consumo, y disminuir la dependencia.^b Se pueden considerar intervenciones similares que combinan prevención y seguridad para enfrentar otras actividades económicas criminales, como el tráfico de migrantes. Por ejemplo, se puede reforzar la vigilancia de las rutas irregulares mientras se promueven vías de migración legales y se fomenta la inclusión socioeconómica en los lugares de origen.
2. **Enfoques de desarrollo territorial.** Aproximadamente el 50 por ciento de los crímenes ocurre en solo el 2,5 por ciento de las secciones de calles de las ciudades de ALC, y los homicidios se concentran en apenas el 1,4 por ciento de ellas.^c Si bien la vigilancia policial en puntos calientes puede reducir la criminalidad localizada en ciertas condiciones, su implementación aislada puede conducir a la reubicación de la actividad criminal hacia nuevas zonas. En cambio, combinar estos operativos con estrategias de prevención en los vecindarios cercanos puede limitar la capacidad de desplazamiento del crimen y generar un impacto más sostenible en la seguridad.

Notas

- a. Este recuadro utiliza texto aportado por Paula Rossiasco del Banco Mundial.
- b. Los programas preventivos con metodologías activas y/o participativas han sido eficaces para prevenir el consumo de drogas y la delincuencia juvenil. Véanse Aguilera-Torrado y Payares-Ortiz (2021); Strang et al. (2012).
- c. Chainey et al. (2019).

La coordinación y colaboración internacional son fundamentales para enfrentar el crimen organizado

Como se ha enfatizado a lo largo de esta discusión, los Estados de ALC son responsables de construir la capacidad estratégica que necesitan para gestionar el crimen organizado, proteger a sus ciudadanos de sus expresiones más dañinas y darles la oportunidad de tener vidas dignas. Sin embargo, es poco probable que lo logren solos, porque el crimen organizado es un problema que trasciende las fronteras nacionales y requiere soluciones coordinadas. Para que la lucha contra el crimen organizado sea efectiva, se necesitan altos niveles de coordinación y colaboración internacional.

Mejorar las plataformas de intercambio de información entre países es crítico— entre autoridades aduaneras y fiscales, unidades de inteligencia financiera y unidades de investigación criminal. El intercambio limitado de información permite a los criminales moverse entre países y llevar sus actividades criminales a través de las fronteras.

También es fundamental facilitar el intercambio de evidencia criminal entre jurisdicciones. Esto requiere intensificar el nivel de colaboración para estandarizar las definiciones de crimen, las pruebas y los protocolos de investigación en los códigos penales de todos los países, como lo ha hecho la Unión Europea. El esfuerzo de estandarización es aún más complejo en los países con gobiernos federales y múltiples códigos penales, como es el caso de Estados Unidos.

Recopilar información periódica y comparable entre países para medir el crimen organizado y la violencia en sus múltiples manifestaciones es también un paso hacia un esfuerzo internacional de coordinación más significativo. Esto no solo es importante en sí mismo, sino también porque señala que esto es una prioridad de política y permite evaluar avances en un contexto comparativo.

Otro ejemplo paradigmático de la necesidad de mejor coordinación entre actores públicos y privados, tanto dentro de los países como a nivel internacional, es el manejo de los informes de actividad sospechosa de los bancos y otras instituciones financieras. Estos informes aún no logran traducirse en esfuerzos efectivos para capturar y procesar a los líderes del crimen organizado o para desmantelar, al menos en parte, sus estructuras empresariales (recuadro 2.7). Fortalecer las unidades dentro de los ministerios de finanzas encargadas de detectar el lavado de activos a través de bancos e instituciones financieras es una prioridad crítica, que, sin embargo, puede no ser suficiente. El auge de las criptomonedas plantea un desafío adicional, ya que algunas transacciones financieras se realizan a través de canales paralelos que evitan el sistema financiero formal. En este contexto, los ministerios de finanzas, en coordinación con los bancos centrales, deben fortalecer su comprensión de estos canales alternativos y desarrollar estrategias para minimizar su uso con fines ilícitos.

La falta de coordinación entre instituciones estatales es un elemento característico del subdesarrollo, y está en la raíz de la mayoría de las políticas fallidas en ALC. Sin embargo, mejorar la coordinación y la colaboración entre los organismos estatales responsables de la política de seguridad, tanto a nivel nacional como con sus contrapartes de otros países, debe ser una prioridad debido a las costosas consecuencias de la falta de coordinación y las innumerables formas en que debilita la capacidad de cada institución para cumplir su misión.

Por último, poner freno al tráfico ilícito de armas de fuego de venta legal en Estados Unidos, que alimenta la violencia en ALC, depende de forma crítica del reconocimiento internacional del problema y de la colaboración para resolverlo. Además, la región no puede abstenerse de participar en el debate global sobre política de drogas. La fallida guerra contra las drogas, en especial en lo relacionado con el cannabis y la cocaína, ha permitido que el crimen organizado controle los mercados de drogas, generando mayores rentas ilegales y dominio territorial.¹⁰⁴ Una regulación efectiva puede reducir estos ingresos ilícitos y ayudar a los participantes en mercados que antes eran ilegales, como se ha observado en el mercado de cannabis en Nueva York. Para reducir el crimen en ALC, el debate mundial sobre la regulación debe avanzar.

104 Thomson, Meehan y Goodhand (2024).

Referencias

- Abi-Habib, M. 2024. "How a Tourist Paradise Became a Drug-Trafficking Magnet." *New York Times*, Septiembre 17, 2024.
- Abi-Habib, M., A. Correal y J. Nicas. 2024. "In Latin America, Guards Don't Control Prisons, Gangs Do." *New York Times*, Febrero 21, 2024.
- Abril, V., E. Norza, S. Perez-Vincent, S. Tobon y M. Weintraub. 2024. "Building Trust in the Police: Evidence from a Multi-site Experiment in Colombia." Center for Open Science, SocArXiv mrh5q_v1.
- Abt, T. 2019. *Bleeding Out: The Devastating Consequences of Urban Violence—and a Bold New Plan for Peace in the Streets*. Basic Books.
- Acevedo, C. 2008. "Los costos económicos de la violencia en Centroamérica." San Salvador: Consejo Nacional de Seguridad.
- Agan, A., J. L. Doleac y A. Harvey. 2023. "Misdemeanor Prosecution." *Quarterly Journal of Economics* 138 (3): 1453–1505.
- Agan, A. Y., A. Garin, D. K. Koustas, A. Mas y C. Yang. 2023. "Labor Market Impacts of Reducing Felony Convictions." NBER Working Paper 31773, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF). 2022a. "Firearms Trace Data: Central America 2020." ATF.
- Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF). 2022b. *National Firearms Commerce and Trafficking Assessment: Firearms in Commerce*. ATF.
- Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF). 2023. *2021 Annual Firearms Manufacturing and Export Report*. ATF.
- Agência Brasil. 2024. "Crimes ambientais na Amazônia Legal aumentam 88%, aponta PRF." Octubre 29, 2024.
- Aguilera-Torrado, A. y A. Payares-Ortiz. 2021. "El club juvenil como estrategia para la prevención del consumo de drogas y la delincuencia juvenil. Caso Barrancabermeja." *Revista Criminología* 63 (2): 155–74.
- Aguirre, K. y R. Muggah. 2020. "Arming the Americas." En *The Oxford Handbook of the Sociology of Latin America*, edited by X. Bada and L. Rivera-Sánchez, 717–37. Oxford Academic.
- Aizer, A. y J. J. Doyle, Jr. 2015. "Juvenile Incarceration, Human Capital y Future Crime: Evidence from Randomly Assigned Judges." *Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 759–803.
- Akee, R., A. K. Basu, A. Bedi y N. H. Chau. 2014. "Transnational Trafficking, Law Enforcement y Victim Protection: A Middleman Trafficker's Perspective." *Journal of Law and Economics* 57 (2): 349–86.
- Albarracín, J. 2018. "Criminalized Electoral Politics in Brazilian Urban Peripheries." *Crime, Law and Social Change* 69 (4): 553–75.
- Alsan, M., A. M. Barnett, P. Hull y C. Yang. 2024. "'Something Works' in US Jails: Misconduct and Recidivism Effects of the IGNITE Program." NBER Working Paper 32282, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Amazon Watch, InfoAmazonia, Amazon Underworld y GI-TOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime). 2023. "Amazon Underworld Economías Criminosas Na Maior Floresta Tropical do Mundo."
- Amaya, L. E. y J. J. Martínez d'Aubuisson. 2021. *Criminal Governance in El Salvador*. Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC).
- Amnistía Internacional. 2016. "Brazil: Police Killings, Impunity y Attacks on Defenders." Amnesty International Submission for the UN Universal Periodic Review–27th Session of the UPR Working Group, mayo 2017.
- Amnistía Internacional. 2022. "El Salvador: President Bukele Engulfs the Country in a Human Rights Crisis after Three Years in Government." Junio 2, 2016.
- Arcia, G. 2012. "The Evolution of Violence: Economic Development and Intergroup Conflict in Guatemala, El Salvador y Costa Rica." In *Economic Development Strategies and the Evolution of Violence in Latin America*, edited by W. Ascher and N. Mirovitskaya, 71–93. Palgrave MacMillan.
- Arias, E. D. y N. Barnes. 2017. "Crime and Plural Orders in Rio de Janeiro, Brazil." *Current Sociology* 65 (3): 448–65.
- Ariel, B., W. A. Farrar y A. Sutherland. 2015. "The Effect of Police Body-Worn Cameras on Use of Force and Citizens' Complaints against the Police: A Randomized Controlled Trial." *Journal of Quantitative Criminology* 31 (2015): 509–35.
- Arjona, A. 2016. *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge University Press.
- Arjona, A. 2021. "The Effects of Violence on Inequality in Latin America and the Caribbean: A Research Agenda." UNDP LAC Working Paper Series 12, United Nations Development Programme.
- Arjona, A., M. Chacón, y L. García-Montoya. 2025. "The Impact of Political Assassinations on Turnout: Evidence from Colombia." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122, no. 11.

- Arjona, A. M. y S. N. Kalyvas. 2012. "Recruitment into Armed Groups in Colombia: A Survey of Demobilized Fighters." En *Understanding Collective Political Violence*, 143–71. London: Palgrave Macmillan UK.
- Arjona, A., N. Kasfir y Z. Mampilly, eds. 2015. *Rebel Governance in Civil War*. Cambridge University Press.
- Arjona, A. y A. Saab. 2024. "State Capacity and Rebel and Criminal Governance: The Centrality of Dispute Resolution Institutions." Documento de trabajo.
- Assaraf, N., A. Mouro, D. M. Papy, N. Castillo y B. Ariel. 2024. "Behind the Yellow Sticker: Paradoxical Effects of a Visual Warning of Body-Worn Cameras on the Use of Police Force." *Journal of Experimental Criminology*, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s11292-024-09627-8>.
- Austin, A. 2023. "Why Have Ecuador's Drug Trafficking Gangs Turned to Extortion?" *InSight Crime*, diciembre 20, 2023.
- Aziani, A., G. A. Bertoni, M. Jofre y M. Riccardi. 2023. "COVID-19 and Organized Crime: Strategies Employed by Criminal Groups to Increase their Profits and Power in the First Months of the Pandemic." *Trends in Organized Crime* 26 (2): 114–35.
- Ba, B. A., D. Knox, J. Mummolo y R. Rivera. 2021. "The Role of Officer Race and Gender in Police-Civilian Interactions in Chicago." *Science* 371 (6530): 696–702.
- Banco Mundial. 2006. *Honduras–Judicial Branch Modernization*. Washington, DC: World Bank.
- Banco Mundial. 2008. *Guatemala–Judicial Reform Project*. <http://documents.worldbank.org/curated/en/305631468252615058/pdf/32128a.pdf>.
- Banco Mundial. 2010. *Crime and Violence in Central America: Volume II (Report No. 56781-LAC)*. Washington, DC: World Bank, Central America Unit, Poverty Reduction and Economic Management Unit, Latin America and the Caribbean Region.
- Barbosa, D., T. Fetzter, P. C. Souza y C. Vieira. 2021. "De-escalation Technology: The Impact of Body-Worn Cameras on Citizen-Police Interactions." CEPR Discussion Paper No. DP16578, Centre for Economic and Policy Research, London.
- Becker, Gary S. 1968. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76 (2): 169–217.
- Bernal, C., M. Prem, J. F. Vargas y M. Ortiz. 2024. "Peaceful Entry: Entrepreneurship Dynamics during Colombia's Peace Agreement." *Journal of Development Economics* 166 (enero): 103119.
- Bhuller, M., G. B. Dahl, K. V. Loken y M. Mogstad. 2020. "Incarceration, Recidivism y Employment." *Journal of Political Economy* 128 (4): 1269–1324.
- Biondi, K. 2016. *Sharing This Walk: An Ethnography of Prison Life and the PCC in Brazil*, editado y traducido por J. F. Collins. University of North Carolina Press.
- Bisca, P. M., V. Chau, P. Dudine, R. A. Espinoza, J.-M. Fournier, P. Guérin, N.-J. H. Hansen y J. Salas. 2024. *Violent Crime and Insecurity in Latin America and the Caribbean: A Macroeconomic Perspective*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Blanco, L. y I. Ruiz. 2013. "The Impact of Crime and Insecurity on Trust in Democracy and Institutions." *American Economic Review* 103 (3): 284–88.
- Blattman, C. 2023. *Why We Fight: The Roots of War and the Paths to Peace*. Penguin.
- Blattman, C. 2024. "Bad Medicine: Why Different Systems of Organized Crime Demand Different Solutions." Center for Open Science, SocArXiv ghepj_v1.
- Blattman, C., G. Duncan, B. Lessing y S. Tobón. 2024a. "Gang Rule: Understanding and Countering Criminal Governance." *Review of Economic Studies*, rdae079.
- Blattman, C., G. Duncan, B. Lessing y S. Tobon. 2024b. "Statebuilding in the City: An Experiment in Civilian Alternatives to Policing." Working paper, Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts.
- Blattman, C., G. Duncan, B. Lessing y S. Tobón. 2024c. "Gangs of Medellín: How Organized Crime is Organized." Working Paper, BFI Friedman Forum, University of Chicago Law School, enero 10, 2024.
- Blattman, C., B. Lessing, J. P. Mesa-Mejía y S. Tobón. 2022. "Measuring Organised Crime: Challenges and Solutions for Collecting Data on Armed Illicit Groups." Briefing Note 3, SOC ACE (Serious Organized Crime & Anti-Corruption Evidence).
- Blattman, C., B. Lessing y S. Tobon. 2025. "How to Map and Combat Urban Organized Crime: Lessons from the Medellín Impact Lab." Briefing Note 33, SOC ACE (Serious Organized Crime & Anti-Corruption Evidence), enero 2025.
- Blattman, C., A. Rodríguez-Uribe y S. Tobón. Sin fecha. "Who Expects to Join Criminal Gangs and Why? Occupational Choice among 15,000 Teenage Boys in Medellín." Working paper 2024-03, Universidad EAFIT.
- Bouchard, M. y A. Spindler. 2010. "Groups, Gangs y Delinquency: Does Organization Matter?" *Journal of Criminal Justice* 38 (5): 921–33.
- Braga, A. A., R. K. Brunson y K. M. Drakulich. 2019. "Race, Place y Effective Policing." *Annual Review of Sociology* 45: 535–55.
- Braga, A., J. R. Coldren Jr, W. Sousa, D. Rodriguez y O. Alper. 2017. *The Benefits of Body-Worn Cameras: New Findings from a Randomized Controlled Trial at the Las Vegas Metropolitan Police*. Final report to the National Institute of Justice, 2013-IJ-CX-0016. Arlington, VA: CNA.

- Braga, A. A., J. M. MacDonald y J. McCabe. 2022. "Body-Worn Cameras, Lawful Police Stops y NYPD Officer Compliance: A Cluster Randomized Controlled Trial." *Criminology* 60 (1): 124–58.
- Braga, A. A., J. M. MacDonald y J. E. McCabe. 2023. "Police Reform in Public Housing Contexts: Body-Worn Cameras, Surveillance y Harm Reduction in New York City Housing Authority Developments." *Justice Quarterly* 40 (4): 1267–94.
- Braga, A. A., D. Weisburd y B. Turchan. 2018. "Focused Deterrence Strategies and Crime Control: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis of the Empirical Evidence." *Criminology & Public Policy* 17 (1): 205–50.
- Brown, Z. Y., E. Montero, C. Schmidt-Padilla y M. M. Sviatschi. 2024. "Market Structure and Extortion: Evidence from 50,000 Extortion Payments." *Review of Economic Studies*, rdae057.
- Calderón, G., G. Robles y B. Magaloni. 2015. "The Beheading of Criminal Organizations and the Dynamics of Violence in Mexico." *Journal of Conflict Resolution* 59 (8): 1455–85.
- Carreras, M. 2013. "The Impact of Criminal Violence on Regime Legitimacy in Latin America." *Latin American Research Review* 48 (3): 85–107.
- Castillo, J. C., D. Mejía y P. Restrepo. 2020. "Scarcity without Leviathan: The Violent Effects of Cocaine Supply Shortages in the Mexican Drug War." *Review of Economics and Statistics* 102 (2): 269–86.
- Castro, E., F. Coy, C. Schmidt-Padilla y M. M. Sviatschi. 2024. "Breaking the Gang: A Preventive Approach to Reduce Recruitment in Schools." Junio 28, 2024, Seminario de Economía, Universidad de la Plata.
- Ceobanu, A. M., C. H. Wood y L. Ribeiro. 2011. "Crime Victimization and Public Support for Democracy: Evidence from Latin America." *International Journal of Public Opinion Research* 23 (1): 56–78.
- CEPAL. 2018. *Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe: deudas de igualdad*. CEPAL.
- Cerqueira, D. R. D. C., S. Bueno, R. S. D. Lima, C. Neme, H. R. S. A. Ferreira, P. P. Alves...and K. C. Armstrong. 2019. *Atlas da violência 2019*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) & Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
- Chainey, S. P., G. Pezzuchi, N. O. Guerrero Rojas, J. L. Hernandez Ramirez, J. Monteiro y E. Rosas Valdez. 2019. "Crime Concentration at Micro-Places in Latin America." *Crime Science* 8 (Article 5).
- Chassang, S. y G. P. i Miquel. 2009. "Economic Shocks and Civil War." *Quarterly Journal of Political Science* 4 (3): 211–28.
- Chatterjee, J. 2005. "The Changing Structure of Organized Crime Groups." Research and Evaluation Branch, Community, Contract and Aboriginal Policing Services Directorate, Royal Canadian Mounted Police.
- Chen, M. K. y J. M. Shapiro. 2007. "Do Harsher Prison Conditions Reduce Recidivism? A Discontinuity-based Approach." *American Law and Economics Review* 9 (1): 1–29.
- CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). 2015. "Violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en las Américas". Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
- Cox, R. J., J. P. Cunningham y A. Ortega. 2024. "The Impact of Affirmative Action Litigation on Police Killings of Civilians." NBER Working Paper 32502, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Cristosal Human Rights. 2023. "El Salvador: Widespread Abuses under State of Emergency." Abril 1, 2023. <https://cristosal.org/EN/2023/04/01/el-salvador-widespread-abuses-under-state-of-emergency/>
- Dandurand, Y., K. Kittayarak y A. MacPhail. 2015. "Justice Indicators and Criminal Justice Reform: A Reference Tool." International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy.
- Davenport, C. 2007. "State Repression and Political Order." *Annual Review of Political Science* 10 (1): 1–23.
- Davis, J. M. V., T. Meares y E. Arnesen. 2025. "Improving Programming in Juvenile Detention: The Impact of Project Safe Neighborhoods Youth Outreach Forums." *Journal of Quantitative Criminology* 41 (marzo): 23–50.
- Dell, M. 2015. "Trafficking Networks and the Mexican Drug War." *American Economic Review* 105 (5): 1738.
- Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia en Estados Unidos. 2011. https://mpdc.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/mpdc/publication/attachments/Say%20No%20to%20Gangs_SPA.pdf
- Detotto, C. y E. Otranto. 2010. "Does Crime Affect Economic Growth?" *Kyklos* 63 (3): 330–45.
- Di Nicola, A. 2022. "Towards Digital Organized Crime and Digital Sociology of Organized Crime." *Trends in Organized Crime*, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12117-022-09457-y>.
- Di Tella, R. y E. Schargrodsky. 2013. "Criminal Recidivism after Prison and Electronic Monitoring." *Journal of Political Economy* 121 (1): 28–73.
- Donohue III, J. J. y S. D. Levitt. 2001. "The Impact of Race on Policing and Arrests." *Journal of Law and Economics* 44 (2): 367–94.
- Donohue, J. J. y J. Wolfers. 2006. "Uses and Abuses of Empirical Evidence in the Death Penalty Debate." NBER Working Paper 11982, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

- Doran, M.-C. 2017. "The Hidden Face of Violence in Latin America: Assessing the Criminalization of Protest in Comparative Perspective." *Latin American Perspectives* 44 (5): 183–206.
- Draca, M., J. Garred, L. Stickland y N. Warrinnier. 2023. "On Target? Sanctions and the Economic Interests of Elite Policymakers in Iran." *Economic Journal* 133 (649): 159–200.
- Drago, F., R. Galbiati y P. Vertova. 2009. "The Deterrent Effects of Prison: Evidence from a Natural Experiment." *Journal of Political Economy* 117 (2): 257–80.
- Dube, A., O. Dube y O. García-Ponce. 2013. "Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico." *American Political Science Review* 107 (3): 397–417.
- Dube, O., S. J. MacArthur y A. K. Shah. 2023. "A Cognitive View of Policing." NBER Working Paper 31651, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Dudley, S. 2020. 3 Dirty Secrets Revealed by the El Salvador Gang 'Negotiations.' Reporte técnico, InSight Crime.
- Economist, The. 2016. "The Gangs that Cost 16% of GDP." *The Americas*. Mayo 21, 2016.
- Economist, The. 2023a. "Nayib Bukele Shows How to Dismantle a Democracy and Stay Popular." *The Americas*. Julio 20, 2023.
- Economist, The. 2023b. "Illegal Gold Is Booming in South America." *The Americas*. Noviembre 9, 2023.
- Economist, The. 2023c. "Latin America's Most Powerful New Gang Built a Human-Trafficking Empire." *The Americas*. Noviembre 16, 2023.
- Economist, The. 2024a. "Gangsters in El Salvador Are Terrified of Strongman Nayib Bukele." *Leaders*. Febrero 2, 2024.
- Economist, The. 2024b. "The World's Most Violent Region Needs a New Approach to Crime." *The Americas*. Mayo 9, 2024.
- El Universo. 2021. "Dueño de farmacia se negó a pagar \$5.000 por 'vacuna' y delincuentes tiraron explosivo para destruir su negocio en Pascuales." Agosto 31, 2021. <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/explosion-en-farmacia-de-pascuales-por-no-pagar-vacuna-nota/>
- Eren, O. y N. Mocan. 2021. "Juvenile Punishment, High School Graduation y Adult Crime: Evidence from Idiosyncratic Judge Harshness." *Review of Economics and Statistics* 103 (1): 34–47.
- Estelle, S. M. y D. C. Phillips. 2018. "Smart Sentencing Guidelines: The Effect of Marginal Policy Changes on Recidivism." *Journal of Public Economics* 164 (agosto): 270–93.
- Fagundes, E., J. Monteiro y P. Souza. 2023. "Monitoring Street-level Bureaucrats: The Impact of Body-Worn Cameras on Police Performance." Documento de trabajo, manuscrito no publicado.
- FATF. 2022. Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards. Technical report. FATF
- Feldman, A. y J. Mantilla. 2021. "Criminal Governance in Latin America." doi:10.1093/ACREFORE/9780190264079.013.697.
- Financial Times. 2024. "Mexico's Drug Cartels Are Thriving." Mayo 20, 2024. <https://www.ft.com/content/fe04c6ed-73f8-4e17-852b-ce16fd6c3515>
- Freeman, W. 2024. "Brazil's Largest Mafia Is Entering Politics. The Government Must Act." *New York Times*, Octubre 4, 2024.
- Gallego, J. 2018. "Civil Conflict and Voting Behavior: Evidence from Colombia." *Conflict Management and Peace Science* 35 (6): 601–21.
- Gaviria, A. 2002. "Assessing the Effects of Corruption and Crime on Firm Performance: Evidence from Latin America." *Emerging Markets Review* 3 (3): 245–68.
- GI-TOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime). Sin fecha. "Busted: Albanian Cocaine Network Run from Prison in Ecuador." *Risk Bulletin of Illicit Economies in South Eastern Europe*.
- GMH (Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación). 2013. ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Golcalves, F., P. Matos, C. Schmidt-Padilla y M. M. Sviatschi. Sin fecha. "Mass Incarceration and the Expansion of Gangs: Evidence from El Salvador." Manuscrito no publicado.
- Gómez Gallego, J. A., J. R. Herrera Vergara y N. Pinilla Pinilla. 2010. Informe final: comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Universidad del Rosario.
- González, Y. 2019. "The Social Origins of Institutional Weakness and Change: Preferences, Power y Police Reform in Latin America." *World Politics* 71 (1): 44–87.
- Grabosky, P. 2007. "The Internet, Technology y Organized Crime." *Asian Journal of Criminology* 2 (2): 145–61.
- Grenet, J., H. Grönqvist y S. Niknami. 2024. "The Effects of Electronic Monitoring on Offenders and their Families." *Journal of Public Economics* 230 (C): 105051.
- Guerrero, E. 2011. *La raíz de la violencia*. Nexos.
- Harper, E. 2011. "Customary Justice: From Program Design to Impact Evaluation." International Development Law Organization, Rome.

- Harvey, A. y T. Mattia. 2024. "Reducing Racial Disparities in Crime Victimization: Evidence from Employment Discrimination Litigation." *Journal of Urban Economics* 141 (May): 103459.
- Hoeve, M., J. S. Dubas, V. I. Eichelsheim, P. H. van der Laan, W. Smeenk y J. R. M. Gerris. 2009. "The Relationship between Parenting and Delinquency: A Meta-Analysis." *Journal of Abnormal Child Psychology* 37 (6): 749–75.
- Holz, J. E., R. G. Rivera y B. A. Ba. 2023. "Peer Effects in Police Use of Force." *American Economic Journal: Economic Policy* 15 (2): 256–91.
- Human Rights Watch. 2024. "El Salvador." *Capítulo de país en World Report 2024*. Human Rights Watch.
- Idrobo, N., D. Mejía y A. M. Tribin. 2014. "Illegal Gold Mining and Violence in Colombia." *Peace Economics, Peace Science and Public Policy* 20 (1): 83–111.
- Insight Crime. 2023. *Mexico's Rising Femicides Linked to Organized Crime*. Reporte técnico. Insight Crime.
- Insight Crime. 2024. *2023 Homicide Round-Up*. Reporte técnico. Insight Crime.
- International Crisis Group. 2021. *Electoral Violence and Illicit Influence in Mexico's Hot Land*. Report No. 89. Brussels: International Crisis Group.
- International Institute for Strategic Studies. 2024. *The Expansion and Diversification of Mexican Cartels: Dynamic New Actors and Markets*. <https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-survey/2024/the-expansion-and-diversification-of-mexican-cartels-dynamic-new-actors-and-markets/>
- Justino, P. 2016. "Supply and Demand Restrictions to Education in Conflict-affected Countries: New Research and Future Agendas." *International Journal of Educational Development* 47 (marzo): 76–85.
- Kalsi, P. 2018. "The Impact of US Deportation of Criminals on Gang Development and Education in El Salvador." *Journal of Development Economics* 135 (noviembre): 433–48.
- Kennedy, D. M. 2011. *Don't Shoot: One Man, a Street Fellowship y the End of Violence in Inner-City America*. Bloomsbury Publishing USA.
- Kleinberg, J., H. Lakkaraju, J. Leskovec, J. Ludwig y S. Mullainathan. 2018. "Human Decisions and Machine Predictions." *Quarterly Journal of Economics* 133 (1): 237–93.
- Krause, K. 2014. "Supporting the Iron Fist: Crime News, Public Opinion y Authoritarian Crime Control in Guatemala." *Latin American Politics and Society* 56 (1): 98–119.
- Kuziemko, I. 2013. "How Should Inmates Be Released from Prison? An Assessment of Parole versus Fixed-Sentence Regimes." *Quarterly Journal of Economics* 128 (1): 371–424.
- Kuziemko, I. y S. D. Levitt. 2004. "An Empirical Analysis of Imprisoning Drug Offenders." *Journal of Public Economics* 88 (9-10): 2043–66.
- Lachman, P., C. G. Roman y M. Cahill. 2013. "Assessing Youth Motivations for Joining a Peer Group as Risk Factors for Delinquent and Gang Behavior." *Youth Violence and Juvenile Justice* 11 (3): 212–29.
- Lessing, B. 2010. "The Danger of Dungeons: Prison Gangs and Incarcerated Militant Groups." *Small Arms Survey*.
- Lessing, B. 2013. "A Hole at the Center of the State: Prison Gangs and the Limits to Punitive Power." CDDRL Working Paper 143, Center on Democracy, Development y the Rule of Law (CDDRL), Stanford University.
- Lessing, B. 2017. *Making Peace in Drug Wars: Crackdowns and Cartels in Latin America*. Cambridge University Press.
- Lessing, B. 2021. "Conceptualizing Criminal Governance." *Perspectives on Politics* 19 (3): 854–73.
- Lessing, B. y G. D. Willis. 2019. "Legitimacy in Criminal Governance: Managing a Drug Empire from Behind Bars." *American Political Science Review* 113 (2): 584–606.
- López Stewart, C., M. G. Lara, L. D. Herrera Amighetti, L. S. Wissow, M. I. Gutierrez, I. Levay y M. Maddaleno. 2000. "Parenting and Physical Punishment: Primary Care Interventions in Latin America." *Revista Panamericana de Salud Pública* 8 (4): 257–67.
- Lum, C., M. Stoltz, C. S. Koper y J. A. Scherer. 2019. "Research on Body-Worn Cameras: What We Know, What We Need to Know." *Criminology & Public Policy* 18 (1): 93–118.
- Magaloni, B., E. Franco-Vivanco y V. Melo. 2020. "Killing in the Slums: Social Order, Criminal Governance y Police Violence in Rio de Janeiro." *American Political Science Review* 114 (2): 552–72.
- Magaloni, B. y L. Rodríguez. 2020. "Institutionalized Police Brutality: Torture, the Militarization of Security y the Reform of Inquisitorial Criminal Justice in Mexico." *American Political Science Review* 114 (4): 1013–34.
- Malone, M. F. 2010. "Does Crime Undermine Public Support for Democracy? Evidence from Central America and Mexico." septiembre 4, 2010. <https://ssrn.com/abstract=1668789> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1668789>
- Mampilly, Z. C. 2012. *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*. Cornell University Press.

- Mancha, A., J. Monteiro y M. Weintraub. Sin fecha. "A New Path to Police Reform? Effects of a New Police Squad in Ceará, Brazil." Manuscrito no publicado.
- Martinez, O., E. Lemus, C. Martinez y D. Sontag. 2016. "Killers on a Shoestring: Inside the Gangs of El Salvador." *New York Times*, noviembre 20, 2016.
- McDermott, J. 2020. "GameChangers 2019: Latin America's Top 10 Criminal Groups." *Insight Crime*, enero 22, 2020.
- McDougal, T., D. A. Shirk, R. Muggah y J. H. Patterson. 2013. "The Way of the Gun: Estimating Firearms Traffic across the U.S.-Mexico Border." Igarapé Institute and University of San Diego.
- Meléndez-Sánchez, M. y B. Winter. 2024. "The Bukele Model: Why It's Hard to Replicate." *America's Quarterly*, Podcast, julio 11, 2024.
- Melnikov, N., C. Schmidt-Padilla y M. M. Sviatschi. 2020. "Gangs, Labor Mobility and Development." NBER Working Paper 27832, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Melnikov, N., C. Schmidt-Padilla y M. M. Sviatschi. Sin fecha. "Gangs Crackdowns and Development." Manuscrito no publicado.
- Mexico, Mexico City, Gobierno de la Ciudad de México. 2024a. Coordinación interinstitucional y ciudadana. Informe de Gobierno CDMX. <https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/coordinacion-interinstitucional-y-ciudadana>
- Mexico, Mexico City, Gobierno de la Ciudad de México. 2024b. Destacamos reducción en delitos de alto impacto. <https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/destacamos-reduccion-en-delitos-de-alto-impacto>
- Mexico, Mexico City, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 2024a. Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial.
- Mexico, Mexico City, Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 2024b. Boletín SECOB 2024.
- Miller, A. R. y C. Segal. 2019. "Do Female Officers Improve Law Enforcement Quality? Effects on Crime Reporting and Domestic Violence." *Review of Economic Studies* 86 (5): 2220–47.
- Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. 2020. Unidad Movil Atencion Orientacion Victimas. <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/justicia-transicional/Paginas/Unidad-Movil-Atencion-Orientacion-Victimas.aspx>
- Monteiro, J. y M. Weintraub. 2025. In *World Bank Policy Document on Police and Organized Crime*. World Bank, Washington, DC. No publicado.
- Munyo, I. y M. A. Rossi. 2020. "Police-Monitored Cameras and Crime." *Scandinavian Journal of Economics* 122 (3): 1027–44.
- National Gang Center. Sin fecha. *Mentoring Youth to Prevent Gang Violence*. U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Nicas, J., P. Bonnefoy y J. Bartlett. 2025. "Maduro Government Accused of Dark New Tactic: Assassinations." *New York Times*, febrero 10, 2025.
- O Globo. 2024. "Um terço da Amazônia Legal está tomado por facções criminosas, aponta levantamento." Diciembre 11, 2024.
- OIM (Organización Internacional para las Migraciones). 2021. "Migrant Smuggling." Diciembre 23, 2021. <https://lac.iom.int/en/migrant-smuggling>.
- OMS (Organización Mundial de la Salud). 2006. "Mobile Clinics Provide Health Care to People in Some of the World's Worst Crises." http://www.who.int/hac/donorinfo/2016/mobile_clinics/en/.
- Open Society Foundations. 2013. "Justice in DRC: Mobile Courts Combat Rape and Impunity in Eastern Congo." Open Society Foundations.
- Owens, E., D. Weisburd, K. L. Amendola y G. P. Alpert. 2018. "Can You Build a Better Cop? Experimental Evidence on Supervision, Training y Policing in the Community." *Criminology & Public Policy* 17 (1): 41–87.
- Papadovassilakis, A. 2023. *El Salvador's (Perpetual) State of Emergency: How Bukele's Government Overpowered Gangs*. Reporte técnico, Insight Crime.
- Parker, S. T., M. B. Ross y S. Ross. 2024. "Driving Change: Evaluating Connecticut's Collaborative Approach to Reducing Racial Disparities in Policing." NBER Working Paper 32692, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Pérez, O. J. 2003. "Democratic Legitimacy and Public Insecurity: Crime and Democracy in El Salvador and Guatemala." *Political Science Quarterly* 118 (4): 627–44.
- Pérez Esparza, D. y E. Weigend. 2015. "The Illegal Flow of Firearms from the United States to Mexico: A State-Level Trafficking Propensity Analysis." *Journal of Trafficking, Organized Crime and Security* 1 (2): 115–25.
- Pérez Ricart, C. A. 2021. "Mexico and Central America: Flexibility and Frameworks." Chapter 6 in *The International Drug Control Regime in the Twenty-First Century*, editado por A. Idler and J. C. Garzón, 157–83. Hull Publishers.
- Pérez Ricart, C. A. 2024. "The Nexus of Firearms and Organized Crime in Latin America." Capítulo 4 en *Illicit Firearms Markets and Organized Crime: Global, Regional y Local Perspectives*, editado por D. Bright. Oxford University Press.

- Perez-Vincent, S. M., D. Puebla, N. Alvarado, L. F. Mejía, X. Cadena, S. Higuera y J. D. Niño. 2024. *The Costs of Crime and Violence: Expansion and Update of Estimates for Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2013. *Regional Human Development Report 2013–2014: Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America*. New York: UNDP (noviembre).
- PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2014. *Evaluation of UNDP's Support to Mobile Courts in Sierra Leone, Democratic Republic of the Congo y Somalia*. UNDP.
- Polinsky, A. M. y P. N. Riskind. 2019. "Deterrence and the Optimal Use of Prison, Parole y Probation." *Journal of Law and Economics* 62 (2): 347–71.
- Ponce, A. F. 2019. "Violence and Electoral Competition: Criminal Organizations and Municipal Candidates in Mexico." *Trends in Organized Crime* 22 (2019): 231–54.
- Prem, M., A. F. Rivera, D. A. Romero y J. F. Vargas. 2021. "Selective Civilian Targeting: The Unintended Consequences of Partial Peace." <https://ssrn.com/abstract=3203065> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3203065>
- Prem, M., J. F. Vargas y O. Namen. 2023. "The Human Capital Peace Dividend." *Journal of Human Resources* 58 (3): 962–1002.
- Rivera, R. G. y B. A. Ba. 2023. "The Effect of Police Oversight on Crime and Misconduct Allegations: Evidence from Chicago." *Review of Economics and Statistics* 1–45. https://doi.org/10.1162/rest_a_01377
- Rodríguez Mega, E. 2024. "Why Are So Many Mexican Election Candidates Getting Killed?" *New York Times*, mayo 25, 2024.
- Rojas-Flores, L., S. Herrera, J. M. Currier, E. Y. Lin, R. Kulzer y D. W. Foy. 2013. "We Are Raising Our Children in Fear: War, Community Violence y Parenting Practices in El Salvador." *International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation* 2 (4): 269–85.
- Rose, E. K. 2021. "Who Gets a Second Chance? Effectiveness and Equity in Supervision of Criminal Offenders." *Quarterly Journal of Economics* 136 (4): 1199–1253.
- Rose, E. K. y Y. Shem-Tov. 2021. "How Does Incarceration Affect Reoffending? Estimating the Dose-Response Function." *Journal of Political Economy* 129 (12): 3302–56.
- Saiz, M. 2024. "The Rise of Global Crime Networks: European Mafias in the Americas." *Insight Crime*, noviembre 18, 2024.
- Sampó, C. y V. Troncoso. 2024. "El tren de Aragua: La transnacionalización del crimen organizado a través del tráfico de migrantes." *Análisis Político* 37 (108): 147–76.
- Sandefur, J. y B. Siddiqi. 2013. "Delivering Justice to the Poor: Theory and Experimental Evidence from Liberia." In *World Bank Workshop on African Political Economy, Volume 20*, 1–61. Washington, DC: World Bank.
- Schargrofsky, R. y S. Tobon. 2025. In *World Bank Policy Document on Prisons and Organized Crime*. World Bank, Washington, DC. No publicado.
- Shem-Tov, Y., S. Raphael y A. Skog. 2024. "Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence from the Make-it-Right Program." *Econometrica* 92 (1): 61–78.
- Soares, R. R. 2004. "Crime Reporting as a Measure of Institutional Development." *Economic Development and Cultural Change* 52 (4): 851–71.
- Soares, R. R. 2006. "The Welfare Cost of Violence across Countries." *Journal of Health Economics* 25 (5): 821–46.
- Solmirano, C. 2023. "Behind a Rise in Latin America's Violent Crime, a Deadly Flow of Illegal Guns." *Americas Quarterly*, mayo 15, 2023.
- Stoddard, G., D. J. Fitzpatrick y J. Ludwig. 2024. "Predicting Police Misconduct." NBER Working Paper 32432, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Strang, J., T. Babor, J. Caulkins, B. Fischer, D. Foxcroft y K. Humphreys. 2012. "Drug Policy and the Public Good: Evidence for Effective Interventions." *The Lancet* 379 (9810): 71–83.
- Sviatschi, M. M. 2022. "Spreading Gangs: Exporting US Criminal Capital to El Salvador." *American Economic Review* 112 (6): 1985–2024.
- Tamayo Gomez, C. 2020. "Organised Crime Governance in Times of Pandemic: The Impact of COVID-19 on Gangs and Drug Cartels in Colombia and Mexico." *Bulletin of Latin American Research* 39 (S1): 12–15.
- Thomson, F., P. Meehan y J. Goodhand. 2024. "The political economy of illicit drug crops." *The Journal of Peasant Studies*, 51(4), p. 763-800.
- Tobón, S. 2022. "Do Better Prisons Reduce Recidivism? Evidence from a Prison Construction Program." *Review of Economics and Statistics* 104 (6): 1256–72.
- UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2018a. *Disciplina violenta en América Latina y el Caribe*. UNICEF.
- UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia). 2018b. "Comprehensive Laws and Social Changes Are Key to Eradicate Physical Punishment Suffered by 1 Out of Every 2 Children in Latin America and the Caribbean." Press release, abril 25, 2018.

- Unidad Investigadora de Venezuela. 2023. "In Lara, Venezuela, Criminal 'Colectivos' Control Public Services." InSight Crime, abril 25, 2023. <https://insightcrime.org/news/in-lara-venezuela-criminal-colectivos-control-public-services/>
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2011. "Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes." UNODC.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2023a. World Drug Report. United Nations.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2023b. Global Report on Cocaine 2023—Local Dynamics, Global Challenges. UNODC.
- UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). 2024. World Drug Report. United Nations.
- Uprimny, R., S. Chaparro y L. F. Cruz. 2017. Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia. Documento 37, Dejusticia & Colectivo de Estudios Drogas y Derecho – CEDD
- Vargas, J. E., M. Rounseville, J. L. Silva, D. Ortiz y A. Hathaway. Sin fecha. "The Twists and Turns in the Road to Justice in Colombia." Manuscrito no publicado.
- Vélez, J. 2025. "El Parque Nacional La Paya, otra víctima del poder de los Comandos de la Frontera en Putumayo." El País, febrero 22, 2025.
- Vidrine, D. J., F. E. Fletcher, H. E. Danysh, S. Marani, J. I. Vidrine, S. B. Cantor y A. V. Prokhorov. 2012. "A Randomized Controlled Trial to Assess the Efficacy of an Interactive Mobile Messaging Intervention for Underserved Smokers: Project Action." BMC Public Health 12 (1): 696.
- Visconti, G. 2020. "Policy Preferences after Crime Victimization: Panel and Survey Evidence from Latin America." British Journal of Political Science 50 (4): 1481–95.
- Wallace, A. 2020. "Muerte de George Floyd: Cuál es la situación de la población negra en América Latina (y el parecido a la de EE.UU.)." BBC News Mundo, junio 9, 2020. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52969557>
- Weigend Vargas, E., Z. Hans, D. J. Wiebe y J. E. Goldstick. 2023. "Firearm Manufacturing and Imports in the U.S. and Their Association to Firearm Homicides in Central America and the Caribbean, 1991–2019." Injury Prevention 30 (5): 381–86.
- Williams, J. y D. Weatherburn. 2022. "Can Electronic Monitoring Reduce Reoffending?" Review of Economics and Statistics 104 (2): 232–45.
- Williams, Jr., M. C., N. Weil, E. A. Rasich, J. Ludwig, H. Chang y S. Egrari. 2021. "Body-Worn Cameras in Policing: Benefits and Costs." Working Paper No. 2021-38, Becker Friedman Institute for Economics, University of Chicago.
- Yashar, D. J. 2018. Homicidal Ecologies: Illicit Economies and Complicit States in Latin America. New York: Cambridge University Press.
- Zermeño, F. 2024. ¿Por qué y cómo incorporar el enfoque de género y feminista en las políticas de seguridad ciudadana? Enero 25, 2024, Segunda Semana de la Seguridad Ciudadana, PNUD/USAID.

